



"FUGA DE RIYANA", RETAMO DE EDOBERTO JIMÉNEZ

ARGUMENTOS

Revista de análisis social del IEP

Año 7, Nº1 Marzo 2013

Publicación del Instituto de Estudios Peruanos

COMITÉ EDITORIAL

DIRECTOR

Jorge Aragón

EDITOR

Jorge Morel

CONSEJO EDITORIAL

ROXANA BARRANTES

ÚRSULA ALDANA

ROMEO GROMPONE

ENRIQUE LÓPEZ

MARISA REMY

PABLO SANDOVAL

MARTÍN TANAKA

FRANCESCA UCCELLI

RAMÓN PAJUELO

ROBERTO PISELLI

CORRECCIÓN DE ESTILO

Daniel Soria Pereyra

DIAGRAMACIÓN Y PUBLICACIÓN

EN WEB

Mónica Ávila Paulette

DIAGRAMACIÓN Y PUBLICACIÓN

EN WEB

Diego Bedoya Vásquez
MaestroWeb

IEP Instituto de Estudios Peruanos

Horacio Urteaga 694 - Jesús María

Teléfonos: 431-6603 / 332-6194

Fax: 332-6173

E-mail: iep@revistargumentos.org.pe

PRESENTACIÓN

El verano del 2013 ha sido particularmente intenso en términos políticos para quienes vivimos en Lima. Sin duda, su origen está en la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, del 31 de octubre del 2012, que convocaba a un proceso de revocatoria de las autoridades de la Municipalidad de Lima Metropolitana. A muy poco días de que se lleve a cabo esta consulta popular, el tema central de este nuevo número de Argumentos busca contribuir al debate y a la reflexión sobre lo que se juega en este tipo de procesos, y sobre sus diversas implicancias para el funcionamiento de la democracia, la participación y la gestión local.

Con algo de ironía, diera la impresión que quienes vivimos en la capital del país recién caemos en la cuenta de los costos y peligros que implica un mecanismo de participación y control ciudadano que ya tiene varios años de existencia en nuestro país y que, además, ha experimentado importantes modificaciones. Experiencia que hasta hace muy poco se había dado mayoritariamente en distritos con una población más bien pequeña. Tal como lo sugiere Remy en uno de los artículos que son parte de esta sección central, es hora de discutir en profundidad sobre la democracia en el Perú, de modo tal que se fortalezcan no solo los espacios de participación de la ciudadanía sino también los espacios de gestión local.

(continúa en la siguiente página)

EN ESTE NÚMERO...

COYUNTURA

BALANCE POLÍTICO DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA. ¿LA GRAN TRANSFORMACIÓN?, *Ivette Sosa y Armando Chumaceda* p. 3 / LA NUEVA PROPUESTA DEL ESTADO PARA EL ABORDAJE DE CONFLICTOS SOCIALES: LA OFICINA NACIONAL DE DIÁLOGO Y SOSTENIBILIDAD, *César Bedoya* p. 10 /

HACIA UN DIAGNÓSTICO DE LIMA METROPOLITANA

EL MODELO URBANO QUE SIGUE LIMA EN LA ACTUALIDAD: EL RESPONSABLE OLVIDADO DE LA INSEGURIDAD, *Pablo Vega Centeno* p. 14 / LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN LIMA METROPOLITANA, *Úrsula Aldana* p. 21 / PATRONES DE TRANSPORTE EN LIMA METROPOLITANA: ADÓNDE, CUÁNTO Y POR QUÉ VIAJAN LOS LIMEÑOS, *Roberto Piselli* p. 25

REVOCATORIA Y DEMOCRACIA

LAS REVOCATORIAS EN EL PERÚ: ENTRE LA PARTICIPACIÓN MASIVA Y LA DEBILIDAD INSTITUCIONAL, *Maria Isabel Remy* p. 29 / ¿POR QUÉ MUCHOS POBRES NO QUIEREN A SUSANA VILLARÁN?, *Wilfredo Ardito* p.38 / RACIONALIDAD Y EMOTIVIDAD EN LAS ELECCIONES PERUANAS: UNA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN, *Arturo Maldonado* p. 44 / REVOCATORIA 2013: LA PRENSA, LAS ENCUESTAS Y EL PESO DE LAS PALABRAS, *Carolina Arrunátegui* p. 50

CRÍTICA Y RESEÑAS

ENTRE BRECHAS Y SOLEDADES. POLÍTICA Y SOCIEDAD EN EL PERÚ: A PROPÓSITO DE LA SOLEDAD DE LA POLÍTICA, DE CARLOS MELÉNDEZ, *Guillermo Rochabrún* p. 57 / RESEÑA AL LIBRO "MEMORIAS DE UN SOLDADO DESCONOCIDO" DE LURGIO GAVILÁN (IEP-2012)*, *Ramón Pajuelo et al.*, p. 65

Específicamente, el proceso de revocatoria en Lima Metropolitana, ha hecho evidente que en el sistema político peruano existe un margen demasiado grande para que algunos actores y operadores políticos, con una gran deslealtad democrática, pongan en jaque la gestión local de una ciudad que no se puede dar ese lujo. A su vez, que la revocatoria pueda prosperar de manera parcial o general, tiene que ver un conjunto de otros factores y circunstancias. Para comenzar, con el alto costo social y político que se ha originado a partir de los procesos de reforma de áreas que fueron sistemáticamente evitadas por anteriores gestiones. Costos que rápidamente sintonizan con la desconfianza y las evaluaciones muy negativas que solemos desarrollar los peruanos frente a nuestras autoridades (inclusive entre quienes votaron por ellas en el más reciente proceso electoral). Por otra parte, la actual gestión metropolitana cometió algunos errores políticos –ampliamente descritos en el artículo de Wilfredo Ardito– que le impidieron intervenir de manera significativa e eficaz en discusiones políticas que tenían mucho de paradójicas: la no congruencia entre percepciones subjetivas (“Susana Villarán está haciendo una mala gestión”) y datos más bien objetivos (un nivel de ejecución presupuestal de la actual administración durante sus primeros dos años que es considerablemente mayor a la primera y segunda gestión de Luis Castañeda).

Como sin duda habrá todavía mucho más que decir y pensar después de que se conozcan los resultados definitivos de este proceso de revocatoria, este número incluye también una sección que llama la atención sobre la necesidad de discutir y actualizar los diagnósticos y las propuestas que existen en relación con el modelo de desarrollo que está siguiendo Lima Metropolitana, y que involucra temas centrales tales como la seguridad, el transporte y, en general, las condiciones de vida de su población.

Cambiando un poco de tónica, este número incluye también un trabajo sobre la nueva propuesta del Estado para el abordaje de los conflictos sociales (que se refleja en la reciente creación de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad) y un análisis de las últimas elecciones presidenciales en el Ecuador. Finalmente, la sección de crítica y reseña contiene un conjunto de reacciones al libro de Lurgio Gavilán, *Memorias de un soldado desconocido* (IEP 2012), que va ya camino a una segunda edición, y al libro de Carlos Meléndez, *La soledad de la política* (Mitin Editores).

BALANCE POLÍTICO DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA. ¿La gran transformación?



Ivette Sosa* y Armando Chaguaceda**

EL CAMBIO POLÍTICO

El pasado febrero, Rafael Correa fue ratificado — por tercera ocasión y abrumadora mayoría— al frente del Estado ecuatoriano. Sumando más votos que el resto de los candidatos reunidos, obtuvo además un control mayoritario del parlamento, en manos de su organización Alianza Patria Altiva y Soberana (AP), lo que le permitirá avanzar su agenda de cambios político-institucionales dirigidos a superar lo que su encendida retórica ha denominado “la larga y oscura noche neoliberal”, vivida por Ecuador desde la década de 1980.¹ Un proceso que conllevó una desinstitucionalización creciente, expresada en la disminución del gasto social y las obras públicas, el colapso de los servicios estatales, la generalización de la corrupción

administrativa, la ineficiencia estatal y la severa crisis de gobernabilidad —en particular del Ejecutivo—.²

Cohesionando las demandas que vociferaban las manifestaciones populares a mediados de la década pasada, su programa incluía una extensa modificación económica y política, que pretendía zanjar la inestabilidad política de más de diez años. Entre 1996 y el 2007 se sucedieron nueve gobiernos —entre ellos una dictadura y fueron derrocados tres presidentes por amplias multitudes (Bucarán, 1997; Mahuad, 2000; Gutiérrez, 2005). Dicha inseguridad, unida al sobredimensionado poder de veto del sector empresarial, conducía a constantes cambios jurídicos que enturbiaban las reglas del juego político.

* Psicóloga y politóloga, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede Ecuador.

** Politólogo e historiador, Universidad Veracruzana/Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

1 Para interpretaciones divergentes del proceso ver Falconí 2013, Franco 2013 y “La aplanadora no cambia de timonel” 2013: 18-19.

Este proceso de cambio y descomposición político-institucional es analizado por Pablo Andrade en sus obras *Democracia y cambio político en el Ecuador* y *La era neoliberal y el proyecto republicano*, ambas publicadas por la Universidad Andina, sede Ecuador, en 2009.

La inestabilidad política que caracterizó a Ecuador desde los noventa condicionó la búsqueda de un liderazgo fuerte, quizás un antisistema o un *outsider*, dada las características comunes con otros países andinos. Al asumir la presidencia, Correa dio cauce a un proceso constitucional que abarcó la consulta popular para una Asamblea Constituyente, la elaboración de una nueva Constitución —sometida a referéndum— y la elección a puestos legislativos. Comenzaba el camino de la oficialmente denominada “Revolución Ciudadana”.³

Sin duda alguna, los antecedentes del ciclo político del “correísmo” se remontan a la debilidad del sistema de partidos y la inestabilidad política que viviera el país, la fractura de la oposición y su incapacidad de rearticular intereses de la población.

La devastación del sistema político ecuatoriano durante su etapa neoliberal dejó claros vacíos institucionales en el procesamiento político, lo cual condujo a la desconfianza en la política y la “partidocracia”.

El gobierno de la Revolución Ciudadana se ha caracterizado por ser plebiscitario —en comparación con administraciones predecesoras—. Empero, lejos de otorgarle el carácter denostador que frecuentemente se le imputa, ello significa la búsqueda de bases legítimas para realizar las transformaciones que se han ejecutado desde 2007. Una mirada evolutiva a las elecciones generales apunta no solo al incremento del respaldo al proceso que impulsa el actual gobierno ecuatoriano, sino también a la consolidación de AP en la Asamblea —con los beneficios legislativos que esto comporta.

Tabla 1: Resultados electorales: candidatos punteros del oficialismo y la oposición en elecciones generales (2006-2013)

	Elección 2006		Elección 2009		Elección 2011	
	Candidato y Agrupación Política ganadores	Candidato y Agrupación Política en segundo lugar	Candidato y Agrupación Política ganadores	Candidato y Agrupación Política ganadores	Candidato y Agrupación Política ganadores	Candidato y Agrupación Política en segundo lugar
Total de votos obtenidos (millones)	Rafael Correa (Acuerdo País) 3,517,635	Álvaro Novoa (Partido Renovador Institucional de Acción Nacional) 2.689.418	Rafael Correa (Alianza País) 3,586,439	Lucio Gutiérrez (Sociedad Patriótica) 1,947,830	Rafael Correa (Alianza País) 4,839,219	Guillermo Lasso (Creando Oportunidades) 1,928,851
Total de votos obtenidos (millones)	56.67%	43.33% 5	1.99 %	28. 24 %	57.04%	22.73%

³ Un esfuerzo integrador de diversas perspectivas sobre dicho proceso lo constituye Mantilla y Mejía 2012.

En los comicios generales de abril de 2009, el partido oficialista alcanzó el 43,6% del total de puestos en la Asamblea, condición que no eliminó escollos para la aprobación de leyes “esenciales” para el curso de la Revolución Ciudadana. La conformación de la Asamblea de entonces no benefició la formación de coaliciones estables, a base de acuerdos programáticos —aunque AP se consolidó como partido hegemónico, sufrió el desgarramiento de varios de los grupos que inicialmente la integraron y apoyaron—. En las recientes elecciones, ganadas en una sola vuelta, AP acumula 100 curules, más de las dos terceras partes de los votos necesarios para aprobar iniciativas legales en el cuerpo colegiado, frente a los exiguos resultados de la oposición.

Si bien esta prominencia del partido en el poder acelera la aprobación de leyes pendientes (ley de comunicación, Código Penal, modificaciones a las leyes de seguridad social y la redistribución de tierras) y las de novel producción en el periodo que recién comienza, la co-legislación en dicha instancia se ve mermada. La disminución en la deliberación interna pudiera debilitar al Legislativo y al proceso “revolucionario” en sí, al tiempo que hacen aguas las alianzas con otros partidos y se agudiza la contenida fiscalización y el control al Ejecutivo.

Por otro lado, aunque se ha logrado estabilidad en la presidencia, persisten deficiencias en el diseño institucional que perpetúan la situación política irregular: insuficiencias en la producción legislativa complementaria a la Constitución, escaso *accountability* horizontal y contrapesos políticos, ausencia de espacios para el procesamiento adecuado de los conflictos y nombramientos provisionales —a estas alturas— de funcionarios en áreas estatales de amplia envergadura muestran la relativa (in)estabilidad del proceso político que

impulsa el Gobierno. Asimismo, han disminuido los poderes de control y fiscalización del Ejecutivo por parte de la Asamblea —que han sido transferidos, en parte, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social— y persiste el nombramiento trunco de autoridades en organismos de control y del Poder Judicial.

EL GOBIERNO Y LA OPOSICIÓN. LA CRUZADA MEDIÁTICA

La imagen del régimen se ha visto igualmente afectada por las rupturas de sectores políticos que lo apoyaron inicialmente. Movimientos indígenas, agrupaciones campesinas y sindicales, capas medias e intelectuales de la izquierda nacional han retirado su apoyo al Gobierno tras la Constituyente, y se han erigido como movimientos de oposición (grupo Ruptura de los 25´, Movimiento Popular Democrático [MPD] y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador [Conaie]). Un factor de peso significativo para el desmembramiento de las movilizaciones sociales —que tuvieron un rol efectivo durante el ciclo de inestabilidad política entre 1996 y 2007— fue el viraje en el proyecto programático del Gobierno y del presidente una vez instalado en el poder.

Las propuestas de refundación, distribución y cultura ciudadana de la izquierda de entonces se concentraron en la plataforma programática de Alianza País —entidad política que llevó al candidato Correa al triunfo electoral—. Sin embargo, ya en el sillón presidencial se adjuntó —y ocasionalmente prefirió— la doctrina social de la Iglesia católica. La amalgama programática se extendió también al Plan de Desarrollo elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), plataforma asumida por Alianza País —actual organización gubernamental—, plan que también fuera modificado, luego de la Asamblea Constituyente, por el del “Buen Vivir”. Aunque las

plataformas coincidieran en sustanciosos aspectos (el antiimperialismo, el nacionalismo, la redistribución de la riqueza y salario digno a los trabajadores), la permanente muda de proyectos políticos y la personalización de las propuestas llevó al (actual) despojo de la izquierda de un proyecto propio y su fraccionamiento.

Por otro lado, el tratamiento de los medios masivos de comunicación privados ha sido objeto de impugnaciones antidemocráticas. Tanto el lenguaje “confrontacional” de Correa como los juicios a que han sido sometidos varios medios privados de la prensa nacional, canales de televisión y radios locales opuestos al Gobierno han agudizado una imagen de polarización política en el país que no se corresponde con los resultados electorales alcanzados en las recientes elecciones. Es incuestionable que el poderío económico de los grupos empresariales, propietarios de tales medios privados, alcanza el nivel de agencia política e ideológica —para algunos analistas, reemplaza incluso a los partidos—. Cuestionamientos simplistas al surgimiento de un sistema estatal de medios (como los periódicos *El Telégrafo* y *El Ciudadano*, la agencia *Andes*, radios y televisiones públicas) destinados a difundir información oficial del Gobierno evidencian los intereses tendenciosos de un sector de la oposición. Sin embargo, la incautación a la que se han visto sometidos no solo vulnera la libertad del ejercicio empresarial, sino que también —y esto es acaso más grave— reduce las posibilidades de información y expresión autónomas a las oficiales, y reproduce esquemas de control político de la prensa inherentes al modelo de *hegemonía comunicacional* implementado por varios de los países agrupados en la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA).

El alineamiento notoriamente antigubernamental de los medios de comunicación privados y su

conexión con una clase política empresarial que otrora hegemonizara los destinos del país no es razón suficiente para quebrantar y debilitar libertades y derechos ciudadanos en este campo. La exclusión y mofa a la que es sometida la oposición en el discurso político oficialista limita la consolidación del proceso que aúpa el Gobierno y, en última instancia, pone en peligro su continuidad. El reforzamiento de los medios públicos, la práctica de la libertad de expresión y el abandono del escarnio entre ambos bandos sería mucho más saludable para la necesaria libertad de expresión en el desempeño democrático del régimen.

La cuestión más álgida en la ley de medios propuesta por el gobierno de Correa es la definición de “ética periodística”. La necesaria constricción de la delimitación de la eticidad en las comunicaciones pudiera dejar abundantes lagunas para la arbitrariedad administrativa.

La ética periodística a la cual apunta el Gobierno en su propuesta de ley de medios —contemplada en la Constitución de 2008— debiera dejar en claro que combate la “corrupción” de cualquier opinión, noticia o información que limite el desarrollo de la democracia en el país, y no dirigirse exclusivamente contra el “golpismo” mediático de los medios privados. Justamente la cuestión más álgida en la ley de medios propuesta por el gobierno de Correa es la definición de “ética periodística”. La necesaria constricción de la delimitación de la eticidad en las comunicaciones

podiera dejar abundantes lagunas para la arbitrariedad administrativa o condicionar la producción mediática a los intereses “supremos del proceso revolucionario” —plasmado antecedente en *Palabras a los intelectuales*, debate entre Fidel Castro y la intelectualidad cubana ocurrido en 1961, que perpetuara la máxima “dentro de la revolución, todo; contra la revolución, nada”.

EL CONFLICTO INDÍGENA

Otro de los puntos críticos de los últimos años de gobernación de Correa ha sido el bloqueo en el diálogo y las negociaciones con movimientos indígenas. Pese al relieve que otorga Correa a la cultura precolombina, la cooptación de líderes indígenas, la lucha entre Pachakutik-Conaie y Alianza País por los votos de sus poblaciones y la imposición de criterios presidenciales han debilitado las relaciones entre las partes, han despojado de unidad a la representación indígena en el Legislativo y han limitado la participación a la ratificación de las decisiones oficiales y la socialización de las políticas del gobierno, lo que obstruye la deliberación y la búsqueda de consensos. La más reciente muestra de distanciamiento entre las organizaciones indígenas y el Gobierno fue la Marcha de la Resistencia Plurinacional. Por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos, convocada en marzo de 2012 por la Conaie. El levantamiento de la Amazonía se produjo tras la insistencia del Ejecutivo de intensificar la minería extractiva en el país, pese a la oposición de sus poblaciones.

Es innegable que la inserción de los indígenas en la arena política ha alcanzado mayores espacios bajo el gobierno de Correa; sin embargo, las tirantes relaciones entre ambas partes revelan la disputa sobre las exigencias de reconocimiento a la diferencia y el aumento de la igualdad. La ausencia de una agenda indígena definida en la plataforma gubernativa aleja la posibilidad de conciliación

y terminación del conflicto, y exagera, en cambio, la polarización política. El reconocimiento del carácter pluricultural del Estado queda así en la retórica literaria de la Constitución, substraído de la realidad. Es ilustrativo en este particular lo expuesto por los analistas —como Pablo Stefanoni—, que reconocen en el Gobierno ecuatoriano una menor propensión a la promoción de políticas de participación locales y nacionales —tanto en su plano genuinamente innovador como en su potencial utilización como factor de movilización y encuadre— en comparación con sus aliados de Bolivia y Venezuela.

La fragmentación de la izquierda en el escenario político se complementa con la añeja descomposición de la oposición —que no ha alcanzado un proceso de consenso y unidad como su homóloga venezolana— y la segmentación —casi vaciamiento— de la presencia de movimientos sociales autónomos y beligerantes, del tipo de los que logran torcer la agenda del mandatario Evo Morales en Bolivia. En gran medida, esta desintegración y parcialización de la agencia política civil encuentra su condicionante y contrapartida en la fortaleza y predominio del liderazgo de Correa en las definiciones de la agenda política. A esto se suma el efecto positivo de una buena gestión de la economía y políticas públicas, algo que también contrasta con los resultados variables de Caracas y La Paz en esos mismos rubros.

PERSPECTIVAS FUTURAS Y ALCANCE DE LA DEMOCRATIZACIÓN

El momento histórico que vive el Ecuador desde 2007 se inscribe en un periodo refundacional —sin precedentes— de la izquierda en América Latina. La Revolución Ciudadana coincide coyunturalmente y es respaldada políticamente por los gobiernos del llamado *Socialismo del siglo XXI*.

La apabullante victoria del candidato-presidente Correa, tras seis años de mandato, no muestra desgaste político alguno de su liderazgo, sino la generación de una nueva identidad política —el correísmo— que, si bien ha logrado inscribir un giro en la praxis y discurso políticos de la nación ecuatoriana, tiene ante sí el enorme desafío de la consolidación democrática con un partido hegemónico y un liderazgo fuerte.

El programa político ganador indiscutible de las elecciones generales —el del partido oficialista AP— se ha comprometido a la profundización del “cambio” y la consolidación del proyecto “revolucionario” bajo las propuestas del “socialismo del Buen Vivir”. Las facetas que abarca esta plataforma alcanzan la inclusión y equidad social, educación, salud, seguridad, el hábitat, la movilidad y vivienda “dignos”, la cultura, el tiempo libre, la comunicación social, la ciencia, la tecnología y los saberes ancestrales como fuentes de bienestar y unidad nacional; pero también modificaciones al modelo constitucional en derechos y justicia sociales, la gobernanza descentralizada, la interculturalidad y la plurinacionalidad.

Empero, cabrían oportunas interrogantes sobre el futuro de esta identidad política: ¿correísmo es igual a revolución ciudadana?, ¿la radicalización implica —necesariamente— modificaciones constitucionales para perpetuar el liderazgo en el poder?, ¿la legitimidad que otorgan las mayorías permite el despojo de las libertades? Aunque algunos especialistas darían por saldadas de antemano estas respuestas, no sería justo dejar a los protagonistas de esta historia diferenciarse de sus paralelas o semejantes en la actual coyuntura. Saludable sería para la democracia —que acompaña formalmente al proceso “revolucionario” — tomar distancias de posiciones caudillistas que con fuerza se evidencian en la región. Los problemas derivados de sucesiones políticas de poderes caudillistas echan por la borda procesos democratizadores

y reeditan etapas dictatoriales que se alejan de las aristas positivas de la globalización y la mundialización —por demás inevitables.

Aunque algunos de sus partidarios señalan que el presidente “trabaja en equipo”, no cabe dudas de que su fuerza y su carisma han sido los principales impulsores de la Revolución Ciudadana. La generación de cuadros políticos que —dentro del marco de la democracia representativa— ofrezcan continuidad al proceso es indispensable.

Aunque algunos de sus partidarios señalan que el presidente “trabaja en equipo”, no cabe dudas de que su fuerza y su carisma han sido los principales impulsores de la Revolución Ciudadana. La generación de cuadros políticos que —dentro del marco de la democracia representativa— ofrezcan continuidad al proceso es indispensable. Si bien a los cambios que se procuran se les hace urgente la promulgación de leyes, la radicalización que se propugna choca con el acallamiento de organizaciones sociales, sindicales y campesinas que han jugado un rol fundamental durante estos seis años, pero sobre todo durante la historia democrática del Ecuador. Soslayar la importancia de solidificar la autonomía y libertades concomitantes al ejercicio cívico desvirtuaría el carácter democrático del régimen y terminaría por un traslado hacia el autoritarismo.

Asimismo, la concentración de poderes, unida a la actual correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional y a la ausencia de espacios adecuados

para la concertación y la búsqueda de consensos, supone un grave peligro para la cohesión nacional y alimenta la polarización política —aunque beneficia la ejecución de las políticas proyectadas por el gobierno—. Al mismo tiempo, como se ha apuntado, desgarrar la necesaria deliberación entre las diversidades ideológicas y políticas de la sociedad ecuatoriana. Así, el nuevo periodo de gobernación debería dirigirse a la generación de alianzas políticas con sectores que le han retirado su apoyo, poniendo especial énfasis en la concertación de acuerdos con los líderes y organizaciones indígenas, así como en lograr una relación menos confrontada con la oposición y la prensa dentro de los cauces democráticos.

Llamar democrático a un régimen político involucra respetar los atributos básicos de la democracia, respetar el acuerdo de institucionalización del juego democrático y buscar el perfeccionamiento autónomo de la política propia sin desvirtuar los avances históricos de los procesos democratizadores. En ese sentido, el proceso en curso en Ecuador reúne atributos ciudadanizantes (por la vía de la inclusión social, la promoción del desarrollo y, en menor medida, de la innovación democrática) con rasgos centralistas y autoritarios, que atentan contra la consolidación y expansión democráticas.

Así, se trata de un campo de luchas, en el cual — pese al creciente peso político del actor oficial— la partida no está decidida de antemano. —□

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Falconí, Fander (2013, 22 de febrero). “Triunfó el Buen Vivir”. En *Página 12*. <<http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-214369-2013-02-22.html>>.

Franco, Francisco (2013, 22 de febrero). “Un tranvía llamado Rafael”. En *Vistazo*, n.º 1092.

“La aplanadora no cambia de timonel” (2013, 19-24 de febrero). *Vanguardia*, pp. 18-19.

Mantilla, Sebastián y Santiago Mejía (comp.) (2012). *Rafael Correa. Balance de la Revolución Ciudadana*. Quito: Editorial Planeta del Ecuador S. A.

Este artículo debe citarse de la siguiente manera:

Sosa, Ivette* y Armando Chaguaceda. “Balance político de la revolución ciudadana. ¿La gran transformación?”. En *Revista Argumentos*, año 7, n.º 1. Marzo 2013. Disponible en http://www.revistargumentos.org.pe/revolucion_ciudadana.html. ISSN 2076-7722

LA NUEVA PROPUESTA DEL ESTADO PARA EL ABORDAJE DE CONFLICTOS SOCIALES: la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad



César Bedoya*

Si tomamos en cuenta el documento que ha hecho público¹ la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros y actual instancia que desde el Estado se está haciendo cargo del abordaje de los conflictos sociales en el Perú, tenemos por primera vez una propuesta abierta y explícita, que da cuenta de la manera como se conceptualizan los conflictos sociales en el país y la estrategia, al menos general, que están considerando poner en marcha para abordarlos.

Desde el denominado Comité de Crisis, instalado por el gobierno de Alejandro Toledo, pasando por la Oficina de Análisis y Resolución de Conflictos,

que funcionó durante el gobierno aprista y parte del de Ollanta Humala, no se contó con mucho detalle, al menos público, respecto a los enfoques, metodología de trabajo o protocolos formalizados que estas instancias manejaban. Básicamente, se los veía en acción y, generalmente, en momentos en que los conflictos escalaban hacia su fase de crisis.

En general, las críticas que se han hecho sobre cómo el Estado ha venido abordando la conflictividad social en el país en los últimos años han aludido a la falta de eficiencia y eficacia para prevenirlos y resolverlos, a que su despliegue básicamente se daba cuando los conflictos llegaban a su etapa de crisis y a la inoperancia de los mecanismos de abordaje instalados (mesas de diálogo, procesos de negociación multiactor y comisiones especiales), entre otros aspectos. Estudios más acotados buscaron identificar los problemas más de fondo, llegando a plantear que se carecía de

* Sociólogo. Profesor de la PUCP en el Área de Comunicación para el Desarrollo. Consultor asociado de ProDiálogo. cbedoya@prodialogo.org

¹ Presidencia del Consejo de Ministros/Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. *Willaqñiki*, n.º 1. Diciembre de 2012.

marcos conceptuales claros y compartidos entre las diversas instancias públicas instituidas para hacer frente a los conflictos, la ausencia de metodologías y protocolos establecidos para la prevención y la actuación en crisis y el débil nivel de articulación a nivel vertical (PCM con otras instancias públicas encargadas) y horizontal (entre los gobiernos subnacionales).²

Según el planteamiento de la ONDS, los dos objetivos que orientan su labor son: contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el desarrollo del país, rescatando la relación entre el ciudadano y el Estado, y transformar los conflictos sociales en oportunidades de desarrollo a partir de su prevención y gestión con políticas institucionalizadas de diálogo y desarrollo sostenible. Aspecto fundamental del enfoque de esta nueva instancia gubernamental, apunta a lo que denominan un tratamiento integral de los conflictos incidiendo especialmente en su prevención, buscando adelantarse a su escalamiento y entrada a fase de crisis. Cinco son las áreas de trabajo de la ONDS: prevención, gestión del diálogo, construcción de política, educación ciudadana y análisis e investigación. La estrategia general a desplegar considera como marco general definir una nueva pauta de relacionamiento entre el Estado, la empresa y la sociedad. En específico, buscan diseñar propuestas de política que redefinan el vínculo entre empresa y comunidad, Estado y empresa, y Estado y sociedad. En el campo de la prevención, la prioridad es adelantarse al escalamiento de los conflictos poniendo en marcha el Sistema de Prevención de Conflictos Sociales, el cual operará desarrollando un Sistema de Alerta

y Respuesta Temprana (SART), la identificación de zonas de riesgo para la intervención preventiva y la institucionalización de la política de prevención en los tres niveles de gobierno (local, regional y nacional). En el campo de la gestión del diálogo y la negociación, la ONDS considera desplegar sus esfuerzos mayores en la institucionalización del diálogo como mecanismo de abordaje de conflictos, participando como su promotor, facilitador o mediador, según sea el caso.

Del planteamiento estratégico de la ONDS podemos rescatar al menos dos elementos importantes, entre otros: el que alude a la búsqueda de un nuevo relacionamiento entre el Estado, la empresa y la comunidad, y el acento puesto en lo preventivo.

En este punto, del planteamiento estratégico de la ONDS podemos rescatar al menos dos elementos importantes, entre otros: el que alude a la búsqueda de un nuevo relacionamiento entre el Estado, la empresa y la comunidad, y el acento puesto en lo preventivo. Respecto a lo primero, asumimos que una entrada clave será generar un nuevo encuadre para el abordaje de los conflictos sobre la base de una clara distinción de roles (Estado, empresa, comunidad) y de agendas, poniendo como eje central el tema del desarrollo y el de las mejoras de condiciones sociales en el escenario del conflicto, buscando ir más allá de centrar la discusión solamente en los temas conflictivos o en controversia. El segundo punto está relacionado al uso de un sistema de alerta temprana que permita contar con información estratégica de las zonas de potencial conflicto y, por ende, decidir de manera

² Hay interesantes estudios al respecto. Ver Guiselle Huamani (2012). *Hacia una mejor gestión de los conflictos socio-ambientales en el Perú*. Lima: CIES; y Martín Tanaka et al. (2011). *Mapa de la conflictividad social en el Perú. Análisis de sus principales causas*. Lima: PCM-PNUD-UE.

antelada el tipo de intervención que convierta un eventual escenario conflictivo en otro de potencial oportunidad de cambio.

Además de ser explícita en mostrar su estrategia, la ONDS expone los conceptos de base desde donde entienden el conflicto y sus características generales, y, a partir de ello, desarrollar sus modalidades de intervención. Empieza por distinguir nociones como la de controversia, comprendiéndola básicamente como contraposición de opiniones; controversia como una oposición de intereses o posiciones acerca de un hecho, una acción o decisión. En cuanto al conflicto, lo entiende como un proceso en el que dos o más partes interdependientes perciben que sus intereses se contraponen, y adoptan acciones que pueden constituir una amenaza a la gobernabilidad o el orden público, y para cuya resolución se requiere la intervención del Estado en calidad de mediador, negociador o garante de derechos. Estas distinciones conceptuales sirven para diferenciar las etapas e intensidades del conflicto a lo largo de su ciclo de evolución y, considerando ello, poder determinar qué mecanismos o estrategias de intervención priorizar. Este aspecto es sumamente relevante, pues permite saber desde qué mirada conceptual se está comprendiendo el conflicto y, en consecuencia, la manera como se definirá la intervención. Nos parece que anteriormente, al no hacerse explícito el marco de entendimiento del conflicto, por su accionar, se podía deducir que pesaba la percepción de este como un hecho disfuncional que minaba la gobernabilidad democrática y que detrás de él, básicamente, un elemento clave que definía su activación era el rol de los actores.

Respecto a las modalidades de intervención, la ONDS plantea tres. La prevención, que tiene que ver con las acciones que buscan anticiparse a la configuración del conflicto y su subsecuente esca-

lada. En este punto es que el SART entra en escena. El tratamiento, que es cuando el conflicto está en pleno despliegue, sea en escalada o fase de crisis; en este momento es cuando se evalúa el uso de los distintos mecanismos de intervención, sea el diálogo, la negociación directa o la mediación. Y el seguimiento, en el que se hace el monitoreo del desenvolvimiento de los mecanismos puestos en marcha, así como de sus resultados. Otro punto interesante tiene que ver con la tipología que la ONDS ha desarrollado respecto a los conflictos más frecuentes en el país, construida sobre la base de criterios como el tipo de demanda de los actores (económica, ambiental, productiva, etc.), la afectación de derechos de los actores sociales y al medio ambiente o las disputas entre pueblos o regiones. Considerando todo ello, plantean ocho tipos de conflicto, referidos a minería, energéticos (hidrocarburo), hídrico, minería informal e ilegal, demarcación territorial, agrarios, forestales (por producción de hoja de coca) y laborales. De hecho, cabe considerar que toda tipología, al operar como una reducción conceptual de uso analítico, siempre tiende a ser insuficiente. Entendemos que en parte el establecimiento de esta lo que busca también es ayudar a determinar en la estrategia qué sectores del Gobierno se verán involucrados directamente en la intervención que se vaya a desplegar.

La ONDS aparece con un planteamiento conceptual, estratégico y analítico respecto a los conflictos sociales en el país, con una particular lectura de la conflictividad, y llega a un conjunto de constataciones y conclusiones. Una primera es que la conflictividad social gira básicamente en torno a las industrias extractivas, y, dentro de ellas, la mayor cantidad tiene que ver con la relación entre minería y sus entornos sociales; que en general, a contraposición de lo que cierto sentido común busca instalar, la mayoría de estos conflictos lo

que expresan son expectativas por atender más que oposiciones cerradas y radicales a la actividad (sin negar que hayan casos en que sí hay determinados actores sociales con su propia agenda en este sentido). La minería informal e ilegal se viene constituyendo en una significativa fuente de conflictos, y los vinculados al tema hidrocarburífero presentan otro tipo de características respecto a los mineros. En este campo el rechazo de la población nativa parece ser la pauta. Sin embargo, se reconoce que los espacios de diálogo sí están expresando resultados positivos, y que cada vez hay una mayor inclinación de los actores a comprometerse con estos espacios.

En estos momentos contamos con una instancia que ha optado inicialmente por clarificar su enfoque y priorizar su apuesta por el diálogo como mecanismo de abordaje de los conflictos, con un enfoque estratégico que pone el acento en la prevención. También, un aspecto importante en esta nueva formulación es el rol de las instancias locales y regionales, el papel de los gobernadores regionales y la instalación de Oficinas de Gestión

del Diálogo y su articulación con el SART de los gobiernos regionales. Ahora viene el complejo camino de la teoría a la práctica. La idoneidad de la instancia creada se expresará, en parte, en el significativo decrecimiento del número de conflictos y de su intensidad, pero sobre todo se espera que el nuevo patrón de relación que se vaya asentando entre Estado, empresa y sociedad rinda sus frutos. Como ya es sabido, la preocupación fundamental no debe estar centrada en la cantidad de conflictos existentes, sino en el hecho de contar con instancias que logren que estos se conviertan en oportunidad de desarrollo y fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. 

Este artículo debe citarse de la siguiente manera:

Bedoya, César. "La nueva propuesta del Estado para el abordaje de conflictos sociales: la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad". En *Revista Argumentos*, año 7, n.º 1. Marzo 2013. Disponible en http://www.revistargumentos.org.pe/nueva_propuesta.html
ISSN 2076-7722

EL MODELO URBANO QUE SIGUE LIMA EN LA ACTUALIDAD: el responsable olvidado de la inseguridad



Pablo Vega Centeno*

Estamos a pocos días de un acontecimiento inédito para Lima. Sus habitantes deberán decidir si revocan o no a la actual alcaldesa de la ciudad. Como en todo proceso electoral, las pasiones ya se han desatado a favor de las únicas dos opciones a las que el electorado se verá confrontado. Sin embargo, lo triste de todo este evento es que la opinión pública no parece muy interesada en discutir o pensar colectivamente hacia dónde queremos que vaya la ciudad. Más interesados estamos en denunciar la inseguridad ciudadana como responsabilidad de alguien, y no aprovechamos para interpellarnos por el modelo de ciudad que tenemos ni por el que aspiramos. Al final, es más fácil buscar un chivo expiatorio que hacer el esfuerzo de pensar comprometidos con el futuro de nuestra ciudad.

En estos días nos ha visitado Toni Puig, conocido “gurú de las ciudades” por ser uno de los grandes responsables de la transformación de Barcelona durante las últimas cuatro décadas, en las que pasó de ser una ciudad intermedia más de Europa a convertirse en uno de los íconos mundiales de metrópoli moderna con gran calidad de vida. En los eventos y conferencias en que ha participado nos ha refrescado con un mensaje juvenil, creativo, desafiante y optimista. Entre muchas de las estimulantes ideas que compartió, rescato una retomada de su mediático libro *Marca Ciudad*: “Las ideas preceden a la gestión. El activismo debe desterrarse de la ciudad. Antes de hacer, de gestionar, la ciudad debe invertir tiempo, energía y recursos en pensar” (Puig 2009: 36).

* Sociólogo. Investigador y profesor del Departamento de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Pues bien, haciendo un paréntesis en la coyuntura electoral, acerca de la que me confieso incompetente como analista político, propongo hacer el ejercicio de pensar qué pasa con nuestra ciudad y hacia dónde va, tomando como eje central el tema que hoy en día parece preocupar más a los limeños: la inseguridad.

LA INSEGURIDAD CIUDADANA COMO EFECTO DE LA TRANSFORMACIÓN DE LIMA

A finales del siglo pasado hemos visto cómo la ciudad de Lima fue consolidando sus áreas periféricas e iniciando un crecimiento vertical, principalmente en su zona central. Por una parte ello motivó a autores como Matos Mar (2012) o Arellano (2004) a destacar el desarrollo urbano que iban alcanzando las áreas periféricas de la ciudad, antes consideradas tan solo bolsones de pobreza. Es así que, simbólicamente, se alude en la actualidad a estas zonas de expansión como *Lima Norte*, *Lima Sur* y *Lima Este*, evitando así la connotación peyorativa que pudo guardar en la opinión pública la noción de cono que fuera utilizada en las décadas de 1980 y 1990.

Por otra parte, se inició un nuevo empuje de la industria de la construcción en la ciudad, que fue transformando el rostro de Lima, que pasó de ser una aglomeración poco densa a otra donde en varios distritos del área central se edifican numerosos inmuebles de más de diez pisos. Este proceso ha sido producido principalmente gracias a la iniciativa del capital privado, que se orientó al negocio inmobiliario.

La consolidación de los barrios periféricos y el desarrollo de las inversiones del sector inmobiliario han sido, pues, grandes responsables de la transformación de Lima. No obstante, a manera

de grandes nubarrones que oscurecen aún más el grisáceo cielo capitalino, la enorme percepción de inseguridad ciudadana que reina entre los habitantes pone en duda que el futuro de la ciudad sea auspicioso.

En efecto, cada día nos enteramos de algún nuevo acto de violencia, sea como consecuencia de un crimen, robo o asalto, como también por actos de pandillaje o de hostigamiento callejero. Ahora bien, ¿cómo explicar que si la ciudad está en franco crecimiento económico durante los últimos veinte años no existan respuestas satisfactorias para enfrentar los problemas de la inseguridad? En términos perceptivos, para la población de Lima los responsables de ello son el Gobierno nacional y la policía, como arrojan los resultados de la encuesta del observatorio ciudadano Lima Cómo Vamos del año 2012, lo que da a entender que hay una deficiente política de seguridad y ausencia del personal y equipamiento policial necesario. Esta opinión enfrenta directamente varias de las causas de la actual inseguridad ciudadana. Sin embargo, preocupa que la opinión pública sustente las respuestas principalmente en el aumento de la presencia de las fuerzas del orden o con políticas de mayor control a la ciudadanía, salvo que aspiremos a una militarización de la ciudad.

En nuestra perspectiva, uno de los factores más importantes que explican la poca capacidad de respuesta de la ciudad a la falta de seguridad ciudadana es el tipo de urbanización que la ciudad ha venido desarrollando de manera predominante durante los últimos veinte años, que también es responsable de las desiguales oportunidades de empleos, y es lo que intentaremos demostrar en el presente artículo.

LA PRODUCCIÓN DEL ESPACIO URBANO AL INICIO DEL NUEVO MILENIO EN AMÉRICA LATINA

América Latina viene experimentando un nuevo modelo dominante de urbanización, que en el caso europeo es definido por Borsdorf como post-suburbia (2005), y que en nuestra región da como resultado lo que Bahr (2005) define como el desarrollo de una ciudad fragmentada, con la completa desconexión de la trama urbana tanto en sus áreas centrales como en sus zonas de expansión. ¿Por qué ocurre esto? Veamos cómo se comportan los actores responsables de la producción del espacio de la ciudad.

La industria inmobiliaria opera sobre la base de inversores de escala mundial, que ofrecen nuevos productos, como los rascacielos para oficinas, *shopping malls*, grandes hoteles de cadenas multinacionales, edificios residenciales dotados con equipamientos en servicios colectivos y barrios amurallados (De Mattos 2008). El conjunto de esta oferta inmobiliaria busca ofrecer a familias y empresas una calidad de vida que solo es posible alcanzar en espacios privados conectados a través del automóvil. Por ende, los espacios públicos son ignorados o considerados peligrosos para la seguridad de las personas, lo que sustenta un fenómeno que Borja (2003) definió como agorafobia, que suele justificar muchas conductas de intolerancia y exclusión. La respuesta recibida por esta oferta urbanística ha sido muy positiva de parte de las clases medias y altas de las urbes latinoamericanas, por lo que el negocio inmobiliario se encuentra actualmente en una etapa boyante.

Un estímulo importante ha sido el rol subsidiario que ha tenido el Estado, por el que las inversiones se enfrentan a pocos controles de parte de planes reguladores o normas controladoras de la gestión urbana. La actual visión de competitividad

de las ciudades pareciera necesitar este papel del Estado, por el cual los inversores inmobiliarios se convierten en los decisores del tipo y forma de crecimiento urbano de las urbes y en particular de las grandes metrópolis. Como afirma De Mattos, las estrategias de competitividad habitualmente tienden a establecer condiciones especialmente permisivas para la atracción de inversiones en el sector inmobiliario que tengan efectos favorables en la industria de la construcción, la cual es beneficiosa para el crecimiento económico (2008: 33).

El conjunto de esta oferta inmobiliaria busca ofrecer a familias y empresas una calidad de vida que solo es posible alcanzar en espacios privados conectados a través del automóvil. Por ende, los espacios públicos son ignorados o considerados peligrosos para la seguridad de las personas

Sin embargo, este tipo de incremento del rol de las inversiones inmobiliarias produce efectos nocivos para la ciudad. Los productos ofertados son cerrados, autónomos respecto a los lugares en los que se insertan, y generan un divorcio con el espacio público de la urbe; esto es lo que conduce a referirnos a estos fenómenos urbanos como fragmentados.

Entregar el liderazgo de la ciudad al sector inmobiliario supone marginar de las grandes inversiones a todo aquel sector social que no resulte atractivo para este tipo de negocios. De esta manera, tendremos una metrópoli que experimenta una gran modernización en determinados focos o nodos de

su trama urbana, mientras que grandes extensiones de la ciudad permanecen al margen. Esto es lo que lleva a autores como Ludeña a afirmar que Lima tiende a convertirse en una suerte de *Global Barriada* en el escenario internacional, pues la mayor parte de su población y de su territorio no se benefician del gran crecimiento económico producto de la globalización (2002: 166).

Por otra parte, el aumento de intervenciones urbanas que buscan mejorar la seguridad de los espacios residenciales o comerciales de la ciudad tiene como efecto concreto la difusión de prácticas explícitas de exclusión social, que también son un hecho violento, en la medida que se vulneran derechos ciudadanos en nombre de la seguridad. Por ello, Borja sostiene, provocadoramente, que en condiciones de exclusión urbana, actos de violencia o vandalismo propiciados por jóvenes pueden ser entendidos como una expresión democrática (Borja: 2003).

LAS TRANSFORMACIONES DE LIMA EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS Y LA INICIATIVA PRIVADA

El camino seguido por Lima se ajusta bastante bien al proceso que han experimentado las principales ciudades de América Latina. El capital privado ha tomado la iniciativa del crecimiento urbano y conduce la expansión o densificación de la ciudad desde fines del siglo pasado, como señala Ludeña al aludir a los cambios de piel que experimentó la metrópoli (2002: 181-183). Esto ha ido de la mano de una política pública caracterizada por la renuncia o debilitamiento de las instituciones e instrumentos de planificación y regulación. Igualmente, los gobiernos locales flexibilizaron sus reglamentos de zonificación, y así facilitaron los cambios de uso y el crecimiento en altura. Tanto el Gobierno nacional como la alcaldía provincial y los gobiernos distritales de la metrópoli flexibilizaron

su control del espacio urbano a fin de hacer la ciudad más atractiva para el desarrollo de la industria de la construcción.

La inversión privada se multiplicó en la ciudad. No se concentró exclusivamente en el área central, sino que se expandió a través de algunos fragmentos de ciudad en las zonas de Lima Norte, Lima Este y Lima Sur. Los íconos de estas nuevas intervenciones privadas fueron los grandes *malls* construidos por una industria del *retail* en expansión. Estas grandes inversiones fueron motivadas por la identificación de segmentos importantes de la población residente de esas zonas de la ciudad que tenían capacidad de consumo, para configurar lo que estudiosos del consumo urbano como Arellano definieron como una clase social emergente. No obstante, sirvieron también para suponer que la inversión privada era capaz de liderar la consolidación de estas “nuevas” Limas que podían erigirse como las nuevas centralidades de la metrópoli.

No obstante, y pese a la idealización con la que se trató el crecimiento económico de Lima Norte, no podemos afirmar que ahí se haya generado un gran polo de desarrollo económico para la ciudad. Gonzales y Del Pozo, en su estudio de las concentraciones del empleo en la ciudad, demuestran que si bien Lima es policéntrica, los grandes núcleos se sitúan en la zona central de la urbe, más precisamente en los distritos de San Isidro, Miraflores, el Cercado y La Victoria (2012). Del mismo modo, el Plan Regional de Desarrollo Concertado de la Ciudad (PRDC) afirma que San Isidro, Miraflores y el Cercado configuran el espacio de mayor concentración de producción y servicios, con el 44% de la productividad de la ciudad (PRDC 2012). Por último, según el estudio de segregación socio-ocupacional llevado a cabo por Fernández de Córdova (2012), la clase dirigente de la

ciudad se concentra solo en unos cuantos distritos del área central de la ciudad, como son San Isidro, San Borja, Miraflores, Surco o Jesús María.

Pese a la ilusión que podemos alimentar de tener unas *Limas* emergentes y progresistas que reemplazan a los antiguos conos, y que se desarrollan gracias a la iniciativa privada de sus pobladores y de la inversión inmobiliaria, el crecimiento urbano experimentado en estas zonas de la ciudad es terriblemente inequitativo, con algunos islotes de auge inmobiliario cercados con rejas para diferenciarse y “protegerse” de la ciudad informal que se ha producido, con tejidos urbanos poco adaptados al necesario abastecimiento de las diferentes redes de infraestructura y populosos asentamientos humanos con pocas probabilidades de alcanzar en un futuro niveles de consolidación urbanos satisfactorios.

La Lima de la inversión privada ha acentuado las diferencias sociales entre los espacios urbanos, escindiendo cada vez más la ciudad y estimulando la *fragmentación espontánea* en el interior de varias zonas de la ciudad, a través de la formación de lo que Ploger define como los condominios *ex post* (2006). Con semejante acentuación de las diferencias sociales, la violencia no será un fenómeno ajeno a la urbe, y, por ende, las percepciones de inseguridad aumentan.

LA RESPUESTA DE LA POBLACIÓN

La oferta inmobiliaria reciente ha sido recibida con beneplácito por los limeños, que entienden que estos íconos de modernidad elevan el estatus de Lima en la esfera internacional. De hecho, los nuevos lugares para hacer compras constituyen el indicador más importante de satisfacción que ma-

nifestaron los limeños en la encuesta de 2012 del observatorio ciudadano Lima Cómo Vamos (LCV)¹. De acuerdo a los índices de satisfacción utilizados por LCV, la oferta de lugares o comercios para hacer compras alcanza 58,2, 10 puntos por encima del segundo indicador mejor apreciado, que son las ofertas culturales, deportivas o recreativas.

La zona central de la ciudad, que concentra los distritos más ricos y las mayores oportunidades laborales, es aquella donde se encuentran las opiniones más favorables a la defensa de los espacios públicos

El modelo de crecimiento urbano no es puesto en cuestión; todo lo contrario, se asume que el problema de fondo de la ciudad son sus espacios públicos, lo que se aprecia con los resultados de LCV, cuando el 51,8% de habitantes entiende como legítimo el hecho de poner rejas e impedir el acceso de todos los ciudadanos a los espacios públicos próximos a la residencia. Es sugerente observar que la zona central de la ciudad, que concentra los distritos más ricos y las mayores oportunidades laborales, es aquella donde se encuentran las opiniones más favorables a la defensa de los espacios públicos (62%). Esto puede explicarse en parte porque distritos como Miraflores, Jesús María o el propio San Isidro no son tan homogéneos socialmente como el imaginario urbano podría suponer, y porque cuentan con importantes áreas públicas que acogen a millares de limeños transeúntes. Sin embargo, estos distritos vienen experimentando la invasión agresiva de los nuevos productos inmo-

¹ El 49,4% señaló estar satisfecho con esta oferta comercial, mientras solo un 19,8% se manifestó insatisfecho.

biliarios, lo que genera incertidumbre acerca del tipo de vida cotidiana que tendrán en un futuro.

En cambio, solo el 40% defiende esta posición en Lima Este, el 43,7% en Lima Sur y el 43% en Lima Norte. ¿Por qué las zonas que concentran más pobres pueden manifestar opiniones que se sostengan más en la exclusión social? El problema de fondo es que estamos aludiendo a grandes extensiones de la ciudad cuyo crecimiento estuvo en su mayor parte al margen de toda planificación urbana. En estas zonas de la ciudad, el objetivo de la urbanización fue la vivienda, por lo que los equipamientos colectivos tuvieron un rol secundario y los espacios públicos fueron solo percibidos como una necesidad limitada al vecindario inmediato.

En este sentido, a pesar de que la ocupación irregular de terrenos se encuentra a la otra orilla de la urbanización residencial contemporánea, es interesante observar que ambas comparten una mirada semejante de lo urbano, que apuesta prioritariamente por los espacios privados, y le dan un rol secundario a la conformación de calles y plazas como espacios públicos articuladores de la ciudad. Además, en ambos casos el Estado cumple un rol subsidiario. No es de extrañar entonces que las prácticas de exclusión urbanas también se encuentren en las zonas pobres de Lima, pues tampoco parten de la construcción de un proyecto planificado de ciudad, tal vez con la excepción de Villa el Salvador en sus primeras décadas.

Estamos entonces ante una situación que tiene algo de paradójico. La violencia urbana, las situaciones de inseguridad que experimentamos, en parte son la consecuencia del modelo de vida urbana que hemos adoptado, en la medida que estamos produciendo una ciudad cada vez más excluyente, homogénea socialmente y que elimina sus espacios públicos, o les limita esta condición.

Lo que ello nos demuestra es que no podemos hacer depender el desarrollo urbano de nuestra ciudad exclusivamente de la iniciativa privada, sea esta del capital inmobiliario o del emprendimiento popular. Es urgente para el destino de Lima que los actores públicos dejen de refugiarse en un rol subsidiario y asuman su responsabilidad con los destinos de la ciudad.

En el mundo y en América Latina en particular varias ciudades han adoptado modelos alternativos de crecimiento urbano, rediseñando sus ciudades. La promoción de la cultura ciudadana y la recuperación de espacios públicos en Bogotá, pero sobre todo los grandes rediseños ocurridos en Medellín y Curitiba, son testimonio de que sí se pueden reorientar estas tendencias.

En todos estos casos, la intervención urbanística se ha dirigido a redefinir el papel de los espacios públicos de la ciudad, que no son simples ámbitos recreativos, sino los lugares de uso colectivo que articulan una urbe, donde no solo transitamos, sino donde se tejen oportunidades culturales y labores, entre otras dimensiones de nuestra condición humana.

Es importante anotar que, en todas estas experiencias, los gobiernos municipales han tenido un rol central a través de la implementación de intervenciones urbanísticas vinculadas a un proyecto de ciudad, que a su vez supieron ofrecer nuevas oportunidades económicas al negocio inmobiliario.

Es urgente, pues, que nuestra manera de entender el rol municipal para construir una ciudad amigable y segura no se limite a esperar mayor personal de seguridad o la habilitación de obras sin conexión clara con un proyecto urbano.

Un síntoma saludable es la reciente publicación de la propuesta de Plan de Desarrollo Regional

Concertado. Esperemos que pronto le siga la elaboración del Plan de Desarrollo Metropolitano, y que ambos se conviertan en instrumentos directores del futuro de nuestra metrópoli. Se trata de instrumentos esenciales en la búsqueda de construir una ciudad saludable para todos, por tanto, inclusiva y generadora de cultura ciudadana. Sin embargo, si no hay capacidad de comprometer a la ciudadanía con estos planes, se volverán productos estériles. Como diría Toni Puig, “comunicar no es anunciar o solo informar, es convencer, implicar”. Necesitamos implicarnos en un proyecto de ciudad con autoridades municipales líderes, ¿o preferimos que nos continúe liderando la marea inmobiliaria? □

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arellano, Rolando (2004). *Ciudad de los Reyes, de los Chávez, los Quispe...* Lima: Empresa Periodística Nacional.
- Bahr, Jürgen (2005). “La ciudad latinoamericana: la construcción de un modelo. Vigencia y perspectivas”. En *Urbes*, n.º 2.
- Borja, Jordi (2003). *La ciudad conquistada*. Madrid: Alianza Editorial.
- Borsdorf, Axel (2005). “La transformación urbana-rural en Europa. ¿Hacia una unificación espacial en ‘post-suburbia’?”. En Carlos De Mattos (ed.), *Gobernanza, competitividad y redes: la gestión en las ciudades del siglo XXI*. Santiago: IEUT-PUCCH.
- De Mattos, Carlos (2008). “Globalización, negocios inmobiliarios y mercantilización del desarrollo urbano”. En Paulo Cesar Pereira y Rodrigo Hidalgo (ed.), *Producción inmobiliaria y reestructuración metropolitana en América Latina*. Santiago: PUCCH-Universidad de Sao Paulo.
- Gonzales de Olarte, Efraín y Juan Manuel del Pozo (2012). “Lima, una ciudad policéntrica. Un análisis a partir de la localización del empleo”. En *Revista Investigaciones Regionales*, n.º 23: 29-52.
- Fernández de Córdova, Graciela (2012). “Nuevos patrones de segregación socio-espacial en Lima y Callao 1990-2007”. En *Cuadernos Arquitectura y Ciudad*, n.º 15. Lima: Departamento de Arquitectura de la PUCP.
- Lima Cómo Vamos, Observatorio Ciudadano (2013). *Encuesta Lima Cómo Vamos 2012. Informe de percepción sobre calidad de vida*.
- Ludeña, Wiley (2002). “Lima, ciudad y globalización: paisajes encontrados de fin de siglo”. En *El desafío de las áreas metropolitanas en un mundo globalizado: una mirada a Europa y América Latina*. Barcelona: Institut d’Estudis Territorials.
- Matos Mar, José (2012). *Peru: Estado desbordado y sociedad nacional emergente*. Lima: Universidad Ricardo Palma.
- Municipalidad Metropolitana de Lima (2012). *Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima (2012-2025)*. Lima: IMP.
- Ploger, Jörg (2006). “La formación de enclaves residenciales en Lima en el contexto de la inseguridad”. En *Urbes*, n.º 3: 135-163. Lima: Universidad Nacional de Ingeniería.
- Puig, Toni (2009). *Marca Ciudad. Cómo rediseñarla para asegurar un futuro espléndido para todos*. Buenos Aires: Paidós.

Este artículo debe citarse de la siguiente manera:

Vega Centeno, Pablo “El modelo urbano que sigue Lima en la actualidad: el responsable olvidado de la inseguridad”. En *Revista Argumentos*, año 7, n.º 1. Marzo 2013. Disponible en http://www.revistargumentos.org.pe/modelo_urbano.html
ISSN 2076-7722

LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN LIMA METROPOLITANA

Úrsula Aldana*



La desnutrición crónica ha sido reconocida como un problema muy serio tanto para las personas afectadas por esta condición como para el país en su conjunto. Su gravedad radica, en gran medida, en el impacto que tiene sobre el desarrollo de las habilidades cognitivas del individuo (Martorell 1999), lo que afecta negativamente su nivel de vida y la productividad laboral de un país. La desnutrición crónica es, además, un mecanismo de transmisión intergeneracional de la pobreza. Esto se debe a que la probabilidad de que un niño tenga desnutrición crónica es mucho más alta para los hogares de menores recursos.

La encuesta Cenar-Enaho 2007-2008 muestra la relación entre la tasa de desnutrición crónica

y el nivel socioeconómico de los hogares. Según esta encuesta, en el área urbana el porcentaje de niños con desnutrición crónica era de 22% en el quintil de gastos más bajo y descendía a 7% para los dos quintiles más altos (Aldana 2012b). En Lima Metropolitana, la relación entre nivel socioeconómico y desnutrición crónica es más estrecha aún. Según la misma encuesta, el porcentaje de niños menores a cinco años con desnutrición crónica es de 17% en el primer quintil de gasto y de 3% en los otros quintiles (Aldana 2012a).

La desnutrición crónica ha recibido considerable atención por parte del Gobierno nacional. Entre los programas destinados a la superación de la desnutrición crónica tenemos al programa de transferencias condicionadas Juntos y al Programa Articulado Nutricional (PAN). Este

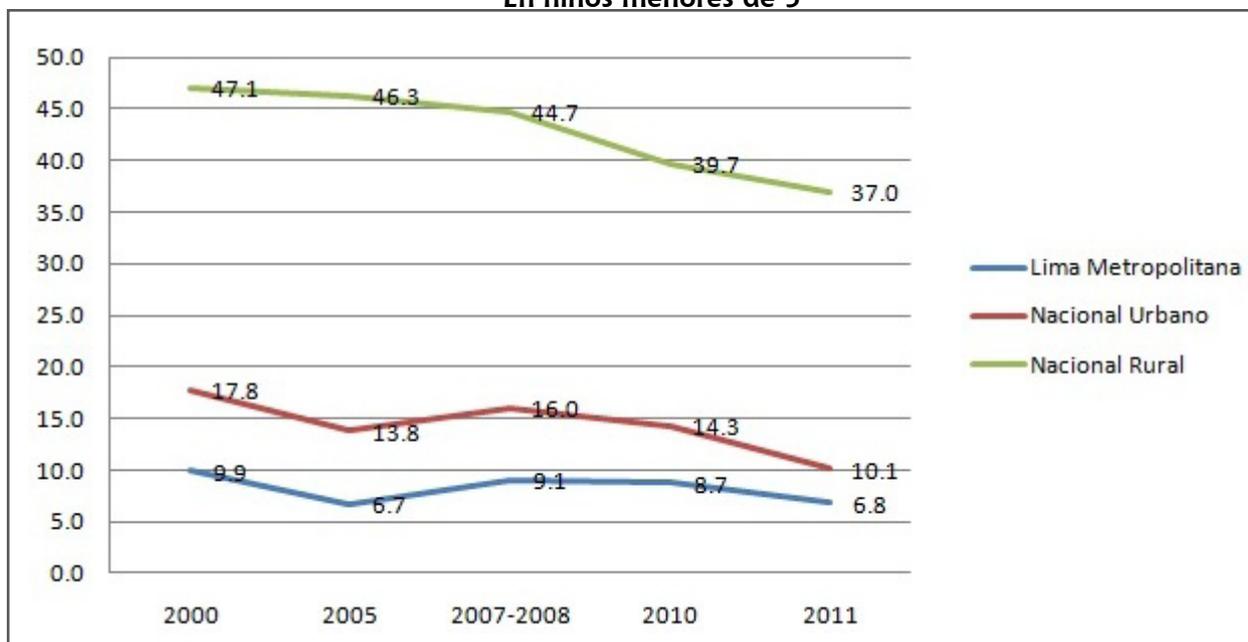
* Economista, Investigadora del Instituto de Estudios Peruanos.

último incluye actividades como la provisión de vacunas y el tratamiento de enfermedades diarreicas y de infecciones respiratorias. El PAN incorporaba el Programa Integral de Nutrición (PIN), manejado por el PRONAA, y como parte del PIN existía el subprograma infantil, que comprendía la distribución de alimentos para madres gestantes y niños menores de tres años, así como la entrega de papilla para niños en ese rango de edad.

El Gráfico 1 nos muestra la evolución de la desnutrición crónica tanto para el área urbana y

el área rural como para Lima Metropolitana. Según podemos ver en él, la tasa de desnutrición es significativamente menor en Lima Metropolitana que en el resto del país. Para el año 2011, la tasa de desnutrición crónica en Lima Metropolitana fue de 6,8%, mientras que en el área rural fue de 37% y en el área urbana, de 10%. Sin embargo, esta tasa de desnutrición relativamente baja implica un alto número de niños con desnutrición crónica. Usando las proyecciones poblacionales del INEI tenemos que esta tasa se encuentra asociada a un total de 71.000 niños con desnutrición crónica en Lima Metropolitana.¹

**Cuadro 1. Evolución de la Desnutrición Crónica Infantil
En niños menores de 5**



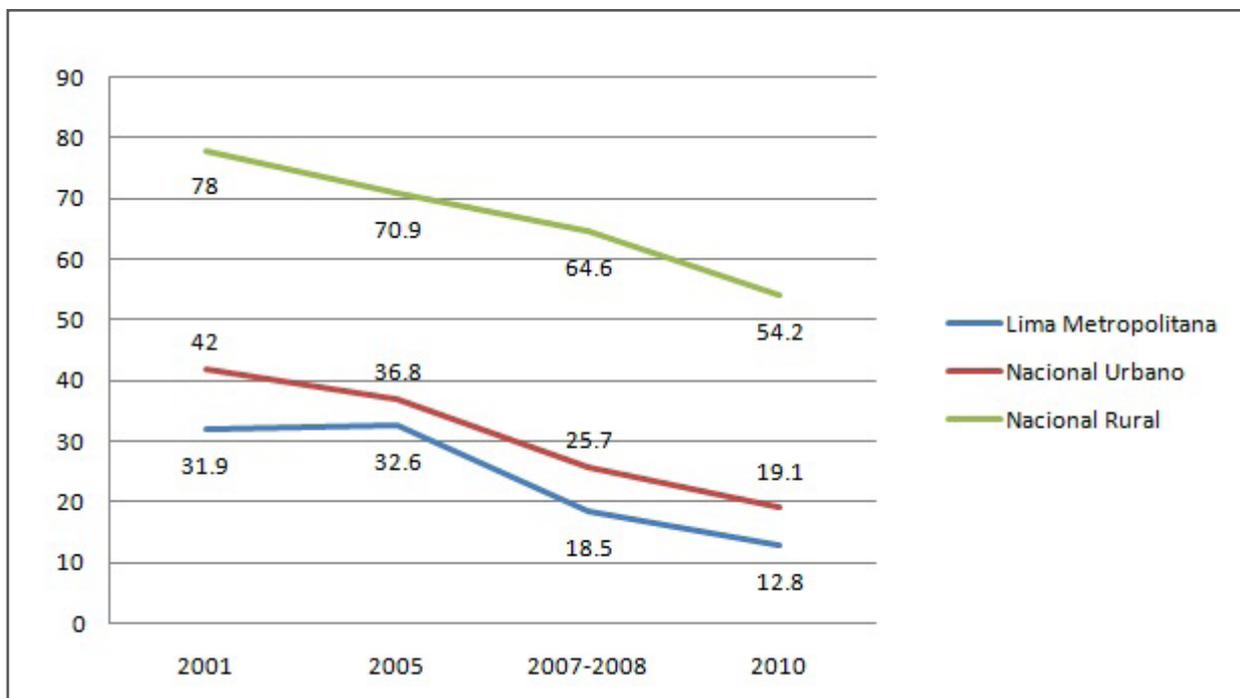
Fuente: Informes ENDES

¹ Según el INEI (2010), la población menor a cinco años en Lima Metropolitana (provincias de Lima y de Calla) ascendería a 1.661.275. A esta cantidad se le aplica una tasa de 4,3 (que viene de sustraer 2,5 a 6,8) para obtener un total de 71.434 niños con desnutrición crónica.

Por otro lado, es interesante notar que la desnutrición crónica en Lima Metropolitana tiene características que la hacen distinta a la desnutrición en el resto del país. En Lima Metropolitana, el 85% de los niños con desnutrición crónica viven en hogares en los que hay al menos un adulto con sobrepeso. Esta tasa es de 70% en el área urbana y de 40% en el área rural. Es así que en Lima Metropolitana la convivencia entre la desnutrición crónica y el sobrepeso se da con mayor frecuencia que en el resto del país, en especial en comparación con el área rural.

El Gráfico 2 muestra la evolución de la tasa de pobreza.² Comparando los Gráficos 1 y 2, podemos ver que mientras la pobreza ha disminuido considerablemente en Lima Metropolitana, la tasa de desnutrición ha bajado muy poco. Tenemos entonces que las cifras de pobreza nos dan una idea muy incompleta de la evolución del nivel de vida de los hogares. Estos datos apoyan la noción de que es útil usar índices de pobreza más complejos que la pobreza monetaria, como son los índices de pobreza multidimensionales (Escobal 2012 y Vásquez 2012).

Cuadro 2. Evolución de la tasa de pobreza



Fuente: INEI (2011) Evolución de la Pobreza al 2011

² Se excluyen los años 2000 y 2011 en tanto no hemos encontrado una serie oficial que incluya todo el periodo 2000-2011. Usar los datos de otras series traería problemas de comparación.

Por otro lado, el Gráfico 1 muestra una disparidad importante entre la evolución de la desnutrición crónica en Lima Metropolitana y el resto del país. Mientras que para el área rural la desnutrición ha caído desde 47% en 2000 hasta 37% en 2011, en Lima la desnutrición ha pasado de 9.9 en 2000 a 6.8 en 2011, y esta última tasa es la misma que tuvo Lima en el año 2005. De la misma manera, y como se puede observar en el Gráfico 1, la brecha entre Lima Metropolitana y el área urbana se está cerrando, lo que significa que la tasa de desnutrición está cayendo más rápido en las otras áreas urbanas.

Esta divergencia entre la evolución de la desnutrición en Lima y el resto del país podría explicarse por el énfasis que han puesto algunos programas sociales en los distritos con altas tasas de pobreza. Así, tenemos programas como Juntos y el subprograma infantil del PIN, que se han dado fuera de Lima Metropolitana, y que podrían explicar la caída en la tasa de desnutrición en el resto del país.

Los datos analizados nos muestran que Lima Metropolitana enfrenta un problema de desnutrición crónica muy importante en términos cuantitativos. Sin embargo, Lima no ha estado en el radar de los programas sociales destinados a luchar contra esta condición. Esto se debería a las bajas tasas de pobreza, que ocultarían la presencia de miles de niños con desnutrición crónica. □

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aldana, Ursula (2012a). *Bases para crear un programa de seguridad alimentaria y nutricional en Lima Metropolitana*. Mimeo.

Aldana, Ursula (2012b). *Indicadores nutricionales y de calidad de la dieta en el Perú*. Informe de consultoría. Mimeo.

Escobal, Javier (2012). *Multidimensional Poverty and Inequality of Opportunity in Peru: Taking Advantage of the Longitudinal Dimension of "Young Lives"*. Documento de Trabajo n.º 79. Niños del Milenio, Universidad de Oxford.

INEI (2010). *Perú: Estimaciones y proyecciones de población Total y edades quinquenales según departamento, provincia y distrito 2005-2015*. Lima: INEI.

Martorell, Reynaldo (1999). "The Nature of Child Malnutrition and Its Long Term Implications". En *Food and Nutrition Bulletin*, vol. 20, n.º 3: 288-295.

Vásquez Huamán, Enrique (2012). *El Perú de los pobres no visibles para el Estado: La inclusión social pendiente a julio del 2012*. Documento de Discusión. Universidad del Pacífico.

Este artículo debe citarse de la siguiente manera:

Aldana, Úrsula "La desnutrición crónica en Lima Metropolitana". En *Revista Argumentos*, año 7 n.º 1. Marzo 2013. Disponible en http://www.revistargumentos.org.pe/desnutricion_cronica.html
ISSN 2076-7722

PATRONES DE TRANSPORTE EN LIMA METROPOLITANA: adónde, cuánto y por qué viajan los limeños

Roberto Piselli*



El crecimiento de Lima Metropolitana está ligado a cambios en la forma en que los habitantes de la ciudad se trasladan. Estos tienen que ver con el volumen de los desplazamientos, los motivos que los originan y entre qué zonas se realizan. Utilizaremos la información recogida en la encuesta de costumbres de transporte, trabajo y uso de TIC en Lima Metropolitana, llevada a cabo durante noviembre de 2011,¹ para dar luces sobre algunos de estos aspectos.²

La encuesta recoge la existencia de 1.915.434 hogares en Lima Metropolitana (LM), los que a su vez están conformados por 8.632.642 personas. Considerando los cinco desplazamientos más comunes

que las personas llevan a cabo, semanalmente se realizan en LM 20.960.141 viajes.³ Cada viaje tiene un único propósito —ya sea ir al trabajo, de compras o al cine, entre muchos otros—, mas no un solo medio de transporte. En un único viaje uno puede tomar un micro, luego un mototaxi y finalmente caminar para llegar a su destino.

Considerando todos los propósitos y medios utilizados, encontramos que Lima Norte y Lima Centro son las zonas que más traslados generan y atraen, mientras que en un segundo nivel se encuentran Lima Sur y Lima Este. Si bien hay muchos desplazamientos entre las zonas analizadas, la mayor parte de los viajes se dan en el interior de cada una de las zonas. Los traslados a otras zonas de la ciudad quedan muy por detrás, y aun en esos casos las zonas contiguas son las segundas en importancia.

* Economista, investigador del IEP.

1 Encuesta recogida por el Instituto Cuánto por encargo del Instituto de Estudios Peruanos.

2 La encuesta se realizó en el área metropolitana de Lima y la Provincia Constitucional del Callao entre el 12 de noviembre y 5 de diciembre de 2011. Recoge información relacionada a las costumbres de transporte, trabajo y uso de TIC de la población entre los 18 y 70 años de edad.

3 Se contabilizan únicamente los viajes de las personas de entre 18 y 70 años

Cuadro 1. Matriz origen-destino: Viajes semanales en LM, 2011

		Destino						
		Lima Centro	Lima Norte	Lima Sur	Lima Este	Callao	Fuera de Lima	Total
Origen	Lima Centro	4.645.944	501.139	455.576	522.101	213.200	0	6.33.960
	Lima Norte	543.014	5.485.713	44.729	81.625	112.677	0	6.267.758
	Lima Sur	587.650	47.394	2.292.437	86.589	1.778	0	3.015.848
	Lima Este	553.505	67.466	78.456	2.643.754	45.695	10.228	3.399.105
	Callao	214.906	102.673	4.419	49.563	1.557.682	0	1.929.243
	Fuera de Lima	0	0	0	10.228	0	0	10.228
	Total	6.545.018	6.204.386	2.875.617	3.393.860	1.931.032	10.228	20.960.141

Fuente: IEP. Encuesta de costumbres de transporte, trabajo y uso de TIC en Lima Metropolitana.

¿Qué motiva los desplazamientos? Si excluimos el regreso a casa, encontramos que para la población estudiada —de entre 18 y 70 años de edad— los viajes por motivos laborales son los más importantes, más de un tercio del total. Estos pueden corresponder a los despla-

zamientos al centro laboral, viajes realizados dentro de la jornada laboral a otras ubicaciones y los regresos al centro laboral luego de estos últimos. Otro motivo importante de desplazamientos son las compras, mientras que el tercer propósito en importancia es el esparcimiento.

Cuadro 2. Propósito de los viajes*

Propósito	Viajes (por semana)	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Laboral	4.472.474	36%	36%
A estudiar	712.054	6%	42%
Compras	3.481.664	28%	70%
Comer/alimentación	517.042	4%	74%
Esparcimiento	1.827.234	15%	89%
Llevar a un familiar	809.321	7%	96%
Visita a familiares	295.624	2%	98%
Salud	112.091	1%	99%
Otros propósitos	131.024	1%	100%
Total propósitos	12.358.528	100%	

* Excluye el propósito "regreso a casa".
Fuente: IEP. Encuesta de costumbres de transporte, trabajo y uso de TIC en Lima Metropolitana.

Dado que los medios motorizados permiten recorrer mayores distancias en menor tiempo, ¿qué pasa con la distribución entre el origen y el destino de los viajes si nos enfocamos únicamente en ellos? Los viajes que involucran medios motorizados dan cuenta del 59% del

total de desplazamientos realizados. Para ellos, se mantiene que Lima Centro es el principal origen y destino del total de viajes, y Lima Norte ocupa el segundo lugar en importancia. Del mismo modo, en cada una de las zonas, la mayoría de los viajes son al interior de ellas.

Cuadro 3. Matriz origen-destino: Viajes semanales que emplean medios motorizados en LM, 2011

		Destino						
		Lima Centro	Lima Norte	Lima Sur	Lima Este	Callao	Fuera de Lima	Total
Origen	Lima Centro	2.874.597	466.039	455.576	522.101	210.094	0	4.528.407
	Lima Norte	522.861	2.512.073	42.109	76.537	76.958	0	3.230.538
	Lima Sur	582.038	43.097	892.870	86.589	1.778	0	1.606.372
	Lima Este	553.505	67.466	78.456	1.222.138	45.695	10.228	1.977.488
	Callao	208.231	80.349	1.778	49.563	713.416	0	1.053.337
	Fuera de Lima	0	0	0	10.228	0	0	10.228
	Total	4.741.233	3.169.024	1.470.789	1.967.156	1.047.940	10.228	12.406.371

Fuente: IEP. Encuesta de costumbres de transporte, trabajo y uso de TIC en Lima Metropolitana.

Cuadro 4. Matriz origen-destino: Viajes semanales por motivos laborales que emplean medios motorizados en LM, 2011

		Destino						
		Lima Centro	Lima Norte	Lima Sur	Lima Este	Callao	Fuera de Lima	Total
Origen	Lima Centro	775.023	41.753	65.321	59.203	36.057	0	977.357
	Lima Norte	283.350	514.402	18.003	29.207	24.785	0	869.746
	Lima Sur	228.689	10.250	277.529	38.026	1.778	0	556.272
	Lima Este	305.300	24.788	14.403	351.512	13.678	10.228	719.909
	Callao	102.182	20.805	0	26.436	181.368	0	330.791
	Total	1.694.543	611.999	375.256	504.384	257.666	10.228	3.454.076

Fuente: IEP. Encuesta de costumbres de transporte, trabajo y uso de TIC en Lima Metropolitana.

Los motivos laborales representan el 36% del total de viajes realizados, así como el 28% de los que hacen uso de algún medio motorizado. Para este último grupo, Lima Centro es la principal área de origen y destino del total de los viajes. Nuevamente encontramos que la mayoría de viajes de cada zona se da dentro de ellas.

Finalmente, sobre la importancia que tienen los desplazamientos en el ámbito laboral, encontramos que solamente 13% de las personas empleadas recogidas por la encuesta declaran trabajar desde su casa. La mayoría corresponde a profesionales o negocios (11%), y son muy pocos los empleados dependientes que declaran trabajar desde sus hogares (2%).

De los casi 21 millones de traslados semanales recogidos en la ciudad de Lima Metropolitana, encontramos que el propósito más importante es el laboral, y 59% de ellos involucran algún medio de transporte motorizado. Existe un gran número de viajes entre las diferentes zonas estudiadas, y si bien en términos agregados Lima Centro es el principal origen y destino de los desplazamientos, para todos los cortes analizados la mayoría se dan dentro de la misma área. □

Este artículo debe citarse de la siguiente manera:

Piselli, Roberto "Patrones de transporte en Lima Metropolitana: adónde, cuánto y por qué viajan los limeños". En *Revista Argumentos*, año 7, n.º 1. Marzo 2013. Disponible en http://www.revistargumentos.org.pe/patrones_transporte.html
ISSN 2076-7722

LAS REVOCATORIAS EN EL PERÚ: entre la participación masiva y la debilidad institucional



María Isabel Remy*

Desde 1997 en que se inaugura en el Perú la aplicación del derecho de revocatoria, contenido en la ley 26300, Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano (LDPCC), se han realizado 1,029 procesos de consulta de revocatoria de autoridades locales. En ellos se ha consultado a los ciudadanos y ciudadanas sobre la continuidad o revocatoria de 4,670 autoridades locales² (alcaldes y regidores) y 1,526 de ellas han debido interrumpir el periodo para el que fueron elegidos porque fueron revocadas.

Para seguir teniendo una idea de lo que significan las revocatorias en el Perú, en los procesos 2008 – 09 se recogieron firmas respaldando

solicitudes para la realización de consultas revocatorias en 1,576 circunscripciones: el 85% de gobiernos locales o regionales del país. En 314 de ellas, los promotores de revocatorias tuvieron éxito en lograr el número suficiente de firmas de respaldo poniéndose en consulta la continuidad de 1,576 autoridades locales; 693 fueron revocadas, entre ellas, 121 alcaldes².

* Socióloga, Investigadora del Instituto de Estudios Peruanos. Álvaro Grompone tuvo la amabilidad de proporcionarme mucho de la información cuantitativa del presente artículo.

1 La información es al 31 de enero de 2013

2 Hemos sumado las consultas revocatorias de los 2008 y 2009 porque se realizaron sobre autoridades elegidas en noviembre de 2006. La ley 26300 que legisla estos procesos, establece que las autoridades locales o regionales elegidas en un proceso electoral, pueden ser objeto de consulta de revocatoria una sola vez entre el segundo y tercer año de su mandato. Ello quiere decir que aún no podemos cerrar la información 2012-13 pues aún podrían haber consultas hacia fin del año (habitualmente son en el segundo semestre del año, con excepción de la que se realiza en Lima –y solo en Lima- el 17 de marzo).

Cuadro 1. Procesos de Consulta Revocatoria de autoridades Locales en el Perú

Años	1997	2001	2004	2005	2008	2009	2012
Kit vendidos	1,538	5,087	738	63	1,511	94	2,247
Total Procesos	61	175	188	21	245	69	270
Autoridades en revocatoria	190	628	878	94	1,246	330	1,304
Autoridades revocadas	135	38	138	53	538	155	469
% Éxito*	71.1%	6.1%	15.7%	56.4%	43.1%	47.0%	35.97%

Fuente: JNE-INFOgob
Elaboración nuestra

Notas: * En 1997, para revocar una autoridad se requería más de la mitad de los votos válidos; en 2001 y 2004, la mitad del padrón electoral; lo mismo se aplicó en los procesos 2001 y 2004. Desde 2005, se requiere más de la mitad de los votos válidos siempre que hayan concurrido más del 50% de ciudadanos del padrón electoral

Este impresionante éxito de uno de los mecanismos de la LDPCC³ requiere alguna explicación. Pero antes de ello, está el hecho de que por primera vez una consulta sobre la continuidad de las autoridades municipales se produce en Lima, y que por ello, una serie de vacíos institucionales se han puesto en evidencia. Mientras esto sucedía en miles de circunscripciones pequeñas, por lo general distantes de los espacios centrales y dispersas, los vacíos institucionales nunca se discutieron. ¿Se revierte el resultado de los procesos electorales municipales, altamente formalizados, que llevaron al gobierno municipal a 1,526 autoridades locales, en aplicación de un mecanismo institucional lleno de vacíos, y nadie se da cuenta? Problemas de mayor envergadura que la participación ciudadana están en juego en estos procesos.

3 Es el único mecanismo exitoso. La ley contempla también el derecho de remoción de funcionarios, que no se ha aplicado nunca, o el derecho de referéndum que en 19 años, se ha aplicado una vez (el referéndum sobre el reembolso de los aportes a FONAVI).

DE LAS PEQUEÑAS CIRCUNSCRIPCIONES A LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA

La convocatoria por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a una consulta de revocatoria de autoridades regionales o locales se produce cuando los promotores de revocatorias⁴ logran el respaldo, a través de su firma, de un número de ciudadanos equivalente al 25% del padrón electoral, hasta un máximo de 400 mil firmas.

Como mencionamos en un artículo anterior⁵, esto facilita la realización de procesos de revocatoria en circunscripciones pequeñas, y lo dificulta en las grandes. El 25% de un padrón electoral de 2500 electores son 625 firmas; en el país, hay 894 distritos con menos de 2500 electores de acuerdo al padrón electoral de 2010, es decir, que como máximo requieren presentar 625 firmas. Se trata de circunscripciones pequeñas, por lo general fuera de las capitales departamentales, y ubicadas de manera dispersa en la sierra y la selva del país: fuera de los espacios centrales de la noticia.

4 En los procesos 2007-08 y en lo que de los procesos 2012-13 son 3,852 los ciudadanos que han iniciado procesos de revocatorias adquiriendo kits para recopilar firmas.

5 Ver Remy, María Isabel, "Y se vienen las revocatorias". En Revista Argumentos, año 2, n° 1, mayo 2008

Cuadro 2
Circunscripciones de más de 10,000 electores donde se han realiza-
do procesos de revocatoria de autoridades municipales

Año	Departamento	Provincia	Distrito	N° Electores	Resultado
1997	Arequipa	Arequipa	José Luis Bustamante y Rivero	13,738	No
2001	Ucayali	Padre Abad	-	12,905	No
2001	Lima	Barranca	Supe	12,098	No
2004 - 2005	Cusco	Cusco	Santiago	51086	No
2004 - 2005	Moquegua	Ilo	-	41,366	No
2004 - 2005	Piura	Piura	La Unión	14,981	Sí
2004 - 2005	Lambayeque	Lambayeque	Motupe	11,131	No
2008 - 2009	Ancash	Casma	-	27,582	Sí
2008 - 2009	Ucayali	Padre Abad	-	24,701	Sí
2008 - 2009	La Libertad	Julcán	-	20,614	Sí
2008 - 2009	Lima	Lima	Ancón	20,221	Sí
2008 - 2009	La Libertad	Pacasmayo	Pacasmayo	18,278	No al alcalde; Sí a 5 regidores
2008 - 2009	Lima	Barranca	Supe	14,451	Sí al alcalde y 5 regidores; No 1 regidor
2008 - 2009	Ica	Chincha	Sunampe	13,028	Sí
2008 - 2009	Lambayeque	Chiclayo	Patapo	12,514	No
2008 - 2009	Lima	Cañete	Nuevo Imperial	11,541	No
2008 - 2009	Ica	Chincha	Grocio Prado	11,522	Sí
2008 - 2009	Ica	Pisco	San Clemente	11,484	No al alcalde; Sí a 5 regidores
2008 - 2009	Ica	Ica	Subtanjalla	10,369	No
2012	Ica	Pisco	-	94,569	No al alcalde y 5 regidores; Sí a 6 regidores
2012	San Martín	M. Cáceres	-	35,817	No
2012	Lambayeque	Chiclayo	Pomalca	16,799	No alcalde Sí 1 regidor
2012	Lima	Barranca	Supe	15,830	No
2012	Ancash	Pallasca	-	15,705	No

La circunscripción electoral más grande en la que hasta ahora, antes del proceso en curso en Lima, ha llegado a convocarse una consulta, ha sido la municipalidad provincial de Pisco en el 2012, con 94 569 electores. Tras la consulta, el alcalde y 5 regidores no fueron revocados, pero 6 regidores sí.

Cabe mencionar que en cada proceso desde 1997 en que se convoca por primer vez, se llegan a realizar algunas –pocas– revocatorias en distritos con más de 10,000 electores (ver cuadro 2). Se trata de 22 casos de los 1,029 procesos de consulta realizados.

Pero nunca más de 95,000 electores, convocados con el apoyo del 25% de electores, es decir, un máximo de 23,700 firmas.

Por primera vez, sin embargo, las consultas revocatorias han saltado de muchas pequeñas y algunas pocas medianas circunscripciones, a la capital; la provincia del Perú con 6'358,317 electores. Con la norma general, un proceso en Lima habría requerido la presentación de 1'589,579 firmas; pero como la ley establece que se deben presentar firmas hasta un máximo de 400 mil, la convocatoria se ha realizado con el respaldo del 6.3% de electores.

¿En cuántas circunscripciones electorales regionales o municipales en el Perú los promotores de revocatorias podrían acogerse a esta ventaja? En ninguna fuera de Lima. La región con más votantes, La Libertad, tiene 1'098,318 de electores en su padrón, por lo que un proceso de revocatoria requeriría la presentación de 274,580 firmas; la provincia fuera de Lima con más votantes, Arequipa, requeriría el apoyo de 173,196 firmas. Bastante lejos del tope de 400 mil firmas.

¿El país ha discutido un “régimen especial” para facilitar procesos de revocatoria en Lima? Acaso

los legisladores de 1994, preocupados por el peso político de los alcaldes de Lima (Barrantes, Del Castillo, Belmont) quisieron poner una espada de Damocles sobre las autoridades edilés de la capital. De hecho, pocos años después, la elección de Alberto Andrade resultó tan incómoda para el Presidente Fujimori, que cambió todo el régimen de finanzas municipales para restar importancia a los alcaldes provinciales. Acaso no se dieron cuenta (lo que tampoco es improbable).

En cualquier caso, mientras en pequeñas circunscripciones, levantar firmas de apoyo a un proceso de revocatoria es algo que puede hacerse contando con el entorno personal del revocador (con frecuencia, el grupo del candidato perdedor o una alianza de varios perdedores), circunscripciones más grandes requieren aparatos relativamente profesionalizados (o especializados) de recolección de firmas y la movilización de recursos económicos (cuando menos para pagar movilidades y jornales de personas que se pasan el día recogiendo firmas, sino para adquirir “obsequios” para los ciudadanos que aceptan firmar; además de coordinadores, digitadores, un mínimo de propaganda, etc.). Estos altos costos transaccionales han “protegido” circunscripciones grandes del ejercicio del derecho de revocatoria, hasta que lograron movilizar los recursos para hacerlo en Lima.

PROCESOS INSTITUCIONALMENTE DÉBILES, CON CONSECUENCIAS RADICALMENTE FUERTES.

El resultado de una consulta revocatoria puede liquidar el resultado completo de un proceso electoral previo: no sólo quien es el alcalde, sino toda la composición del concejo municipal. Los procesos electorales producen como resultado una composición de fuerzas políticas; las personas que ocupan los cargos, son el producto de esa composición de fuerzas (al menos en teoría, las elecciones no son

nominales). Esos procesos electorales son fuertemente institucionalizados, es decir, prácticamente no hay lugar a la discrecionalidad de la autoridad electoral sobre quiénes participan (organizaciones registradas que han cumplido un conjunto de normas sobre adherentes, comités, etc.), cuáles son los plazos en los que discurre el proceso, en qué condiciones participan unos u otros candidatos (si son funcionarios, si van a la reelección) y cómo interpretar el resultado del acto electoral. La Constitución, leyes generales electorales, leyes orgánicas de los gobiernos y puntuales reglamentos, transparentan las condiciones de elección de gobernantes y representantes. La elaboración de las cédulas de votación está por supuesto predefinida por ley y reglamentos específicos se aprueban para aplicarla. Efectivamente, un principio de la democracia es que las elecciones son procesos cuyos resultados son inciertos, pero sus procedimientos absolutamente previsibles.

En los procesos de revocatoria de autoridades locales y regionales, que pueden liquidar el resultado de un proceso electoral de altísima certidumbre procedimental, hay enormes incertidumbres. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir entre que se cierra la inscripción de solicitudes y el proceso de consulta? Depende... por lo general, los procesos de consulta revocatoria se juntan y se realizan en un mes relativamente fijo cada año, con tiempo suficiente para que la oficina técnica, la ONPE, pueda organizar los procesos y capacitar a miembros de mesa y electores; para la consulta de Lima se fijó sólo tres meses, y consultas revocatorias 2013 para otras circunscripciones se realizarán en el segundo semestre. ¿Por qué? Porque es una decisión discrecional. ¿Deben las autoridades en consulta registrarse por los mismos condicionamientos que los candidatos a una reelección? No por lo general; en los procesos de consulta de revocatoria es frecuente encontrar avisos de los alcaldes o

regidores informando sobre sus obras o pidiendo a los electores apoyarlos... Pero sí se estableció en Lima la restricción que opera para una reelección obligando al Concejo a retirar incluso avisos sobre desvío del tránsito. ¿Por qué?; por la misma razón: es discrecional.

En cualquier caso, mientras en pequeñas circunscripciones, levantar firmas de apoyo a un proceso de revocatoria es algo que puede hacerse contando con el entorno personal del revocador (con frecuencia, el grupo del candidato perdedor o una alianza de varios perdedores), circunscripciones más grandes requieren aparatos relativamente profesionalizados.

¿Hasta cuándo podían los revocadores presentar firmas?; allí la fecha estaba fijada, pero un error en la respuesta de un funcionario de la ONPE a un pedido de aclaración (innecesario porque estaban las fechas precisas) llevó al JNE a autorizar la ampliación del periodo... ¿Se ha producido nueva jurisprudencia electoral? ¿En las próximas elecciones nacionales o municipales un error de tipeo de un funcionario puede alterar los plazos de inscripción de organizaciones políticas? Quizás....

¿Deben los involucrados presentar las cuentas de aportes y gastos de campaña? ¿La obligación en el caso de los revocadores rige desde el proceso de conseguir firmas? ¿Quiénes, desde los que

están en consulta, deben presentar las cuentas? ¿Las personas –regidores, alcalde- o los ciudadanos que los apoyan, o los partidos políticos que tienen representación en el concejo en consulta? No está reglamentado y cada pregunta se responde discrecionalmente; en todo caso, en procesos anteriores no se exigió.

Las consultas de revocatoria son nominales, no por listas. ¿Por qué la cédula de votación no está ordenada nominalmente –de manera que los ciudadanos busquen fácilmente los nombres de los regidores que desean revocar- sino por listas? Aparentemente, por costumbre... no está establecido.

Son muchas las incertidumbres procedimentales y por lo tanto los espacios de discrecionalidad de la autoridad electoral (que es, además, inapelable), de una consulta que tiene la facultad de eliminar el resultado de un proceso electoral altamente formalizado.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA VS. REPRESENTACIÓN POLÍTICA

Dos problemas de la mayor importancia, no ya procedimentales sino de interpretación de los efectos de las revocatorias tienen también márgenes de incertidumbre o, cuando menos de alta inconsistencia.

Como se sabe, cuando autoridades municipales son revocadas, el JNE convoca a los accesitarios (los candidatos de la lista que no alcanzaron a entrar al concejo) a ocupar los cargos vacantes. Si el alcalde fue revocado, el cargo de alcaldía pasa al primer regidor no revocado de la lista que resultó ganadora en las elecciones. Si el número de revocados supera la tercera parte del

concejo original, este nuevo concejo al que se han integrado los accesitarios asume el gobierno solo hasta que se convoque un nuevo proceso para elegir a los que fueron revocados.

La ley general de elecciones municipales (Ley N° 26864) establece que la lista ganadora tendrá mayoría en el Concejo Municipal.⁷ Una revocatoria puede alterar este principio. Por ejemplo, la lista ganadora puede perder todos sus regidores. Si habían ingresado al Concejo la mitad más uno de la lista, el número de accesitarios no alcanzará a dar mayoría al alcalde o al regidor que asuma el cargo hasta la nueva elección: será un alcalde en minoría. Puede además suceder que el Alcalde no sea revocado pero sí los regidores de su bancada; cuando se produzcan nuevas elecciones, ¿qué asegura que la lista del que sigue siendo alcalde tendrá mayoría? A la desestabilización que significa el tener en un solo periodo tres concejos (el elegido, el temporal y el que completa el periodo de mandato), dos de éstos podrían no ser mayoritarios, y trabarse las decisiones.

Otro problema es la interpretación de la mayoría. La LDPCC establece en su artículo 23 que “La Revocatoria se produce con la votación aprobatoria de la mitad más uno de los electores”. En los procesos de consulta de 1997, 2001 y 2004, las autoridades fueron revocadas sólo si la mitad más uno de ciudadanos del padrón electoral (la mayoría de electores, estrictamente) se pronunciaba en ese sentido. En 2005 y hasta ahora, el criterio de “mayoría de electores” se interpreta como la “la mitad más uno de los votos válidos”, siempre que hayan asistido a votar la mitad más uno de ciudadanos del padrón electoral.

⁷ Ley de Elecciones Municipales N° 26864; artículo 25, numeral 2: “A la lista ganadora se le asigna la cifra repartidora o la mitad más uno de los cargos de Regidores del Concejo Municipal lo que más le favorezca”

La Constitución además establece (artículo 184) que el proceso se declara nulo cuando la suma de votos blancos y viciados supera los dos tercios de los votos emitidos.

Un escenario poco probable pero posible sería el siguiente: en una circunscripción de 100 electores, asisten a votar 51 (la mitad más uno). 33

Hay muchas formas de evitar los vacíos legales que crean los procesos de revocatorias. Se podría establecer un principio según el cual las revocatorias no dan origen a nuevas elecciones, lo que además desanimaría a pretendientes temporales de los sillones municipales.

de ellos votan en blanco, pero los 2/3 serían 34, de manera que el proceso no es nulo. De los 18 votos válidos, 10 se pronuncian a favor de la revocatoria y 8 en contra. La autoridad municipal quedaría revocada con el 10% de los electores. ¿Es sensato interpretar eso como “la mayoría de electores”?

La dificultad principal es que el 10% de electores podría estar revocando no solo al alcalde o a algún regidor, sino a todo el Concejo municipal, generando esta situación de accesarios temporales (sin mayoría clara... y por supuesto, sin ninguna experiencia) y un nuevo proceso electoral que elegirá autoridades solo por un año, hasta el siguiente proceso electoral municipal general.

El caso no es probable, pero según las encuestas de intención de voto en el proceso de revocato-

ria de Lima, es mayoritaria (aunque no llega a los 2/3) la cantidad de electores que dejarían en blanco las opciones de la mayoría de regidores. El Concejo Metropolitano completo podría quedar revocado por el 17% de los electores.

A ello se agrega el hecho de que una autoridad o incluso un Concejo entero puede terminar siendo revocado (y ha sucedido), por una cantidad de ciudadanos menor de aquellos que los eligieron en procesos electorales altamente formalizados y no discrecionales como las revocatorias.

Hay muchas formas de evitar los vacíos legales que crean los procesos de revocatorias. Se podría establecer un principio según el cual las revocatorias no dan origen a nuevas elecciones, lo que además desanimaría a pretendientes temporales de los sillones municipales (nunca está de más un año de decisión de inversiones, contratos, etc.).

Efectivamente, las revocatorias podrían cambiar personas, pero no la composición política resultante de un proceso electoral. Para ello, podría establecerse que ningún proceso puede poner en consulta de revocación a más de un tercio del Concejo; ello garantizaría que siempre, el número de accesarios alcanzara para sustituir a los revocados y no se alteraría la mayoría. Para evitar la desestabilización completa de un gobierno municipal, podría establecerse incluso que, en un periodo, sólo puede ponerse a consulta revocatoria al alcalde o al concejo (en una proporción no mayor a un tercio), pero no ambas instituciones al mismo tiempo.

Una norma así podría animar a muchos tenientes alcalde a intentar revocar a su alcalde; pero en ese y en todos los casos, una ley electoral de consulta de revocatoria, imprescindible a estas alturas de masividad de solicitudes, debe esta-

blecer con claridad el criterio de “mayoría de electores”.

¿MANTENER O NO MANTENER EL DERECHO DE REVOCATORIAS? ESA ES LA CUESTIÓN

Ante la perversión de resultados que vienen produciéndose y que aún pueden producirse, muchas voces se han levantado en contra del mantenimiento de este mecanismo de la democracia directa. Por lo general, aluden a que ello debilita la representación política y el sistema de partidos políticos⁸.

Sin embargo, en el Perú, el sistema de partidos políticos no organiza ya, sino en contados lugares (uno de ellos es Lima, donde se produce la “excepción” que facilita el proceso) la oferta electoral. En la mayoría de circunscripciones, muchas listas, formadas por personas y sus entornos, sin referentes políticos claros, se lanzan a la “tinka” electoral; muchas listas disputan unos votos que se dispersan y alcaldes y concejos son elegidos por pocos votantes; el precario resultado satisface a muy pocos. Pero sucede también (y es el caso de varios procesos de revocatoria), que si bien pocos candidatos reciben altos porcentajes de votación, la elección de uno u otro no es producto de adhesiones políticas firmes, sino de opciones cambiantes, favorecidas por el hecho de que, en la medida en que no funcionan los partidos políticos como referentes de continuidad, el mecanismo clásico de sancionar una mala gestión o una gestión que no representa adecuadamente a mayorías, el no votar en la siguiente elección por el mismo partido, no funciona. Todo se juega en el corto plazo.

8 Una discusión sobre las revocatorias y lo que ponen en juego, así como diferentes mecanismos de participación ciudadana, se encuentra en Remy, María Isabel, Los múltiples campos de la participación ciudadana en el Perú. Un reconocimiento del terreno y algunas reflexiones. Lima: IEP 2005

Si bien el inicio de procesos de consulta puede darse en todas partes; basta que un alcalde tenga un enemigo, político o personal para que alguien compre un kit y empiece a recabar firmas, llegar a un proceso de consulta (conseguir las firmas necesarias), supone que, en lo inmediato –a un año de la gestión- un sector de electores pone en cuestión la gestión política de la autoridad, es decir, teme que sus intereses (o demandas o preocupaciones), no están en el centro de las preocupaciones de quienes tienen a su cargo la gestión de su ciudad, su localidad o su región⁹. Estos grupos pueden ser minorías activas (o expresivas de intereses particulares en conflicto con el interés general), pero tienen la fuerza (la influencia, los medios), para abrir un espacio de disputa acerca de la orientación del gobierno.

Eso probablemente es lo que se juega. Y quizás no le haga daño a nuestra democracia permitir esta disputa por el sentido de gobiernos locales o regionales; gobiernos que tienen las competencias para mejorar la vida cotidiana de las personas y muchas de sus posibilidades de inclusión económica.

Lo que no es posible, y debiera ser parte de una agenda legislativa (hace tiempo que debió ser parte de una agenda legislativa) es que este tipo de opciones se manejen produciendo “excepciones”, dejando amplios márgenes a la discrecionalidad, provocando la parálisis de gobiernos por la sucesión en cortos periodos de hasta cuatro alcaldes

9 Hay analistas que han propuesto que se expliciten, comprueben y delimiten las razones de una solicitud de revocatoria, y que se permitan solo si, por ejemplo, se invoca “corrupción” o “mala gestión”. La “corrupción” no probada y sustentada ante el poder judicial, es un insulto: nadie es “corrupto” porque la gente lo cree. La “mala gestión” cómo se demuestra... ¿por el % de ejecución del primer año?; imposible de delimitarse. “No cumplió sus promesas electorales” tampoco se puede probar. En realidad, son una suerte de juicio político.

y concejos (el revocado, el temporal, el que termina el mandato y el que sale de la nueva elección), y permitiendo que esto sea producto de una minoría de electores.

La democracia directa, la participación ciudadana, puede corregir los resultados de la representación; pero no debiera poder destruirlos. Ahora que este mecanismo ha dejado de ser monopolio de los “márgenes” de la política nacional y ocupa el lugar central, podría ser hora de que

una discusión en profundidad sobre la democracia en el Perú (que es lo que es: una democracia de partidos débiles), fortalezca tanto los gobiernos como los espacios de los ciudadanos. —□

Este artículo debe citarse de la siguiente manera:

Remy, Maria Isabel “Las revocatorias en el Perú: entre la participación masiva y la debilidad institucional”. En *Revista Argumentos*, año 7 n.º 1. Marzo 2013. Disponible en <http://www.revistargumentos.org.pe/revocatorias.html>
ISSN 2076-7722

¿POR QUÉ MUCHOS POBRES NO QUIEREN A SUSANA VILLARÁN?



Wilfredo Ardito*

Una de las situaciones más difíciles de manejar para la alcaldesa Susana Villarán y su equipo es que su principal respaldo está en los sectores medios y altos, mientras el mayor descontento se da entre los más pobres. Algunas personas han querido interpretar este hecho atribuyendo a los sectores populares la propensión de ser manipulados, un alto nivel de ignorancia o más tolerancia frente a la corrupción, sin pensar que estas características también están presentes en los sectores A y B. Lo importante, más bien, es analizar por qué el mismo sector que predominantemente votó por Susana Villarán ha cambiado su forma de pensar.

UN DIFÍCIL COMIENZO

Los sectores populares son los que viven en el Centro Histórico y también los que más lo frecuentan,

por lo que son los más sensibles a las intervenciones municipales en dicha zona. Lamentablemente, al inicio de la gestión, el equipo de Susana Villarán demostró mucha improvisación e ingenuidad en temas claves, especialmente debido a la reducción dramática del Serenazgo: fueron despedidos muchos efectivos sin que se hubiera contratado a sus reemplazantes. Como consecuencia, en pocas semanas, el caos regresó al Centro: los ambulantes vendían frutas en el jirón Camaná, grupos de ebrios se encontraban en Quilca o el Jjirón De la Unión a plena luz del día, y se llegó al extremo de que los jirones Moquegua o Callao eran recorridos por mototaxis. A pocos metros del palacio municipal, unos vándalos arrancaron la placa del monumento al niño Petiso. A muchos limeños les pareció que se había retrocedido al tiempo de Barrantes o Del Castillo. “No volveré al Centro en mucho tiempo”, comentó entonces un amigo de San Martín de Porres después de una desagradable experiencia con su familia.

* Abogado, Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Hacia la mitad de 2011, el desgobierno se fue revirtiendo. Los serenos regresaron, más numerosos y mejor preparados, pero esos primeros meses generaron la impresión de que la gestión de Castañeda había sido mejor. “Es terrible que estemos echando de menos a un alcalde corrupto”, decía un abogado en aquellos días.

NO UNO SINO MUCHOS PREJUICIOS

El problema de la ineficiencia inicial era que Susana Villarán había alcanzado el sillón municipal por una reducida mayoría, y por eso requería urgentemente mostrar eficiencia. Tenía que hacerlo, además, por su condición de mujer, en una sociedad donde a las mujeres se les exige demostrar su capacidad, y por ser de izquierda, dado que mucha gente piensa que la izquierda no sabe gobernar.

El ejemplo más visible de conflicto con la población fue la decisión de la Municipalidad de cerrar la avenida Arequipa todos los domingos, para que practiquen ciclismo algunas decenas de personas. “Nadie nos consultó”, me dicen unos mortificados vecinos de Lince.

Además, la alcaldesa tenía en su contra los prejuicios raciales, explicitados en los últimos meses de la campaña por la revocatoria, pero que anteriormente ya estaban presentes. Los blancos en el Perú suelen ser vistos por los demás peruanos como altivos, poco trabajadores,

egoístas y racistas, rasgos que en el lenguaje cotidiano se expresan como de un “pituco”. Estas percepciones pueden afectar inclusive a alguien que públicamente critica el racismo, como le ocurrió a Eliane Karp. Estoy convencido de que uno de los factores de la derrota electoral de Vargas Llosa y de Javier Pérez de Cuéllar frente a Fujimori fue la imagen blanca-pituca que los dos candidatos y su entorno proyectaban. Los méritos internacionales eran irrelevantes o, más bien, una confirmación de la distancia respecto a la población. Frente a esa fuerte carga, un candidato blanco que desee ganar elecciones en el Perú (y en Lima) tiene que mostrarse excesivamente campechano, al estilo de Ricardo Belmont o Alan García, o enfrentarse a alguien considerado aún más pituco, como le sucedió a la propia Susana Villarán en relación con Lourdes Flores.

Ni la alcaldesa ni su equipo han sido conscientes de estos problemas, debido al tabú que impide reflexionar acerca de las consecuencias del racismo en nuestra sociedad. Por esto es que mucha gente atribuye a la alcaldesa el desprecio por los habitantes de San Juan de Lurigancho por sus comentarios sobre las “lavanderas”, algo totalmente ajeno a su forma de pensar, o cree que no sentía nada frente a los muertos en La Parada (la idea de que “los blancos son crueles”). A esto se sumaron una serie de decisiones que parecían mostrar a la Municipalidad alejada de las necesidades de los sectores populares.

LAS PRIORIDADES MUNICIPALES

El ejemplo más visible de conflicto con la población fue la decisión de la Municipalidad de cerrar la avenida Arequipa todos los domingos, para que practiquen ciclismo algunas decenas de personas.

“Nadie nos consultó”, me dicen unos mortificados vecinos de Lince. A diferencia de lo que ocurrió con una medida similar tomada durante el régimen de Andrade, en este caso se cierran innecesariamente más de cien cuadras a cada lado de la Arequipa y se desvían numerosas líneas de transporte. Muchas personas pasan ahora largos minutos en congestiones que jamás habían sido vistas los domingos. Pese al daño que ha causado esta medida a la imagen de la gestión municipal, algunos funcionarios municipales estaban entusiasmados. Es más, el año pasado dispusieron cerrar la Arequipa un miércoles para hacer pruebas

ciclistas, a la hora en que miles de personas regresan a sus hogares.

También en el ámbito del transporte resulta chocante que se desconecten los semáforos en avenidas como Javier Prado y Juan de Arona para que para que inexpertas policías “dirijan” el tránsito, que privilegian el paso de los vehículos particulares hasta por 15 minutos, haciendo esperar a los vehículos de transporte público. Además, como cada vez se incrementa más el número de autos particulares, los usuarios de ómnibus y combis se ven más perjudicados.

Imagen 1



Legenda: Plaza Italia, una innecesaria remodelación (fotografía: Wilfredo Ardito)

Otro problema de prioridades es la ruptura del uso tradicional de los espacios emblemáticos del Centro Histórico. Algunos funcionarios pueden haber considerado que se trata de una decisión innovadora, pero creo que para mucha gente es muy violento. Lugares de relajación colectiva son apropiados por el personal municipal para actividades que bien podían hacerse en canchas deportivas. Lo más grave fue la instalación de pistas para deportes extremos en la Plaza de Armas y la Plaza San Martín (en el último caso con una gigantesca botella de Cifrut). En mi caso personal, fue especialmente chocante la noche en que, con otros transeúntes, fui expulsado del Parque de la Exposición porque en una pequeña parte del parque se iba a celebrar un elegante matrimonio (sí, de dos personas blancas). Esto sucedió a los pocos días de comenzar la gestión y ha venido ocurriendo otros fines de semana, para malestar de los ciudadanos que antes disfrutaban del parque. Al día siguiente de las

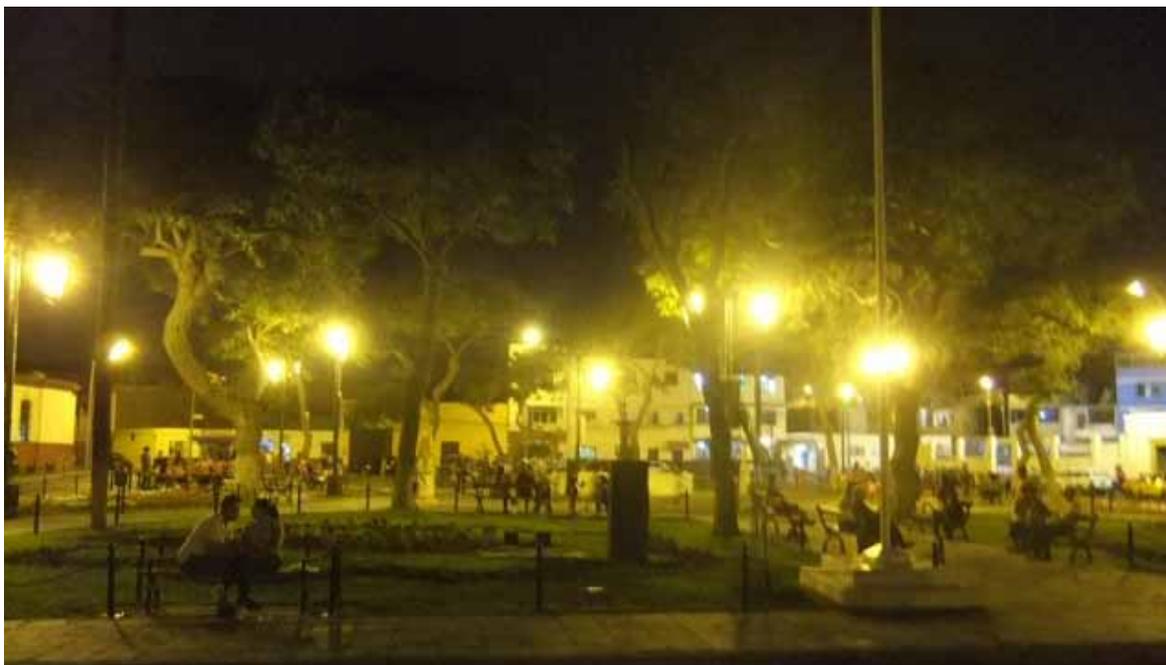
recepciones los desperdicios se acumulaban en los jardines antaño bien cuidados.

Siempre en relación con los espacios públicos, causó controversia la prolongada e innecesaria remodelación de la Plaza Italia, en los Barrios Altos. Tratándose de una zona con muchos problemas sociales, parecía un verdadero despilfarro, y rompió con la identidad de la zona.

IMAGEN Y COMUNICACIÓN

Resulta penoso que la mayoría de limeños ignore que la Plazuela del Cercado fue recuperada, que pueden visitar gratuitamente el nuevo museo Bodega y Quadra, que existe el fascinante parque Animárboles en Comas, que la Municipalidad ha logrado enseñar natación a miles de niños, que se ha operado gratuitamente de cataratas a 1,700 ancianos y que gracias a la "Ley Zanahoria" se ha reducido sustancialmente el número de personas fallecidas.

Imagen 2



Leyenda: Recuperación de la plazuela del Cercado, un logro poco conocido de la gestión (Fotografía: Wilfredo Ardito)

Es verdad que ha existido un boicot informativo muy fuerte de parte de muchos medios de comunicación, pero también lo es que la inexperiencia del personal municipal para difundir los logros de la gestión es otra de las razones para la desinformación de los ciudadanos. “Nos dicen que los temas sociales no venden”, me decía una abnegada funcionaria encargada de muchas intervenciones en contextos realmente difíciles. Ella se refería a los funcionarios del área de imagen, que insistían en difundir que la Municipalidad promueve las grandes inversiones y que tiene el apoyo de la Confiep. Son argumentos que pueden interesar a los sectores A y B, pero no a aquellos donde la alcaldesa tiene menos respaldo.

Una adecuada campaña informativa habría permitido, más bien, aclarar por qué la Municipalidad no podía salvar el callejón El Buque (porque está prohibida para invertir en inmuebles privados) o por qué muchos negocios ilegales siguen funcionando (por las acciones de amparo). La Municipalidad debería precisar con firmeza que dos de las personas muertas en La Parada durante el desalojo de octubre fallecieron en circunstancias totalmente ajenas a la intervención policial (al parecer se trató de un robo, pues fallecieron por arma blanca).

Una de las situaciones más dramáticas de desinformación son los nuevos paraderos de las avenidas Tacna y Abancay. A diferencia de gestiones anteriores, la Gerencia de Transporte Urbano estableció paraderos alternos para distintas líneas, lo que de por sí genera dificultades, pero además no están señalizados según los números o nombres de las líneas (Chama, Santa Cruz, 73), sino códigos municipales que pocas personas conocen (NO, EM, SO). “Ahora si voy al Centro tengo que salir con anticipación”, me dice una psicóloga “porque sé que me tomará más tiempo llegar a

mi destino”. La incertidumbre causa permanentes incomodidades a los usuarios, y de poco ayudan algunos orientadores que contribuyen al caos con sus silbatos. Solamente en los primeros días se repartieron unos volantes imprecisos que no aclaraban los cambios de denominación de las líneas ni señalaban con claridad los paraderos.

muchos problemas de la gestión actual se deben a los problemas de comunicación de la Gerencia de Transporte Urbano con los ciudadanos, sean pasajeros, transportistas o taxistas.

Inclusive el colorido logo Lima Para Todos genera confusión, pues no está claramente asociado a la Municipalidad (el escudo de esta aparece mucho más pequeño, y se le han quitado los colores).

EL TRANSPORTE Y LA INCERTIDUMBRE

Precisamente, muchos problemas de la gestión actual se deben a los problemas de comunicación de la Gerencia de Transporte Urbano con los ciudadanos, sean pasajeros, transportistas o taxistas. Por ejemplo, se entró en un innecesario conflicto cuando se dispuso que solamente circularan ómnibus Euro 4, pese a que muchos transportistas acababan de adquirir ómnibus según la norma Euro 3, aprobada en la gestión anterior. La propia alcaldesa intervino para respaldar los nuevos ómnibus, y al poco tiempo tuvo que retroceder. Meses después se granjeó un nuevo conflicto al establecer regulaciones draconianas, como prohibir que los choferes de combi escucharan música, a cualquier volumen. “Es privarle a un hombre que trabaja 14 horas al día de su único entretenimiento”, dice una amiga.

Nuevamente, la Municipalidad retrocedió, pero ya se había logrado generar la imagen de insensibilidad.

Los defensores de la gestión municipal sostienen que las mafias de los transportistas quieren seguir lucrando sin aceptar un transporte ordenado, pero muchos conductores son los que consideran que las multas se han elevado desproporcionadamente por infracciones que no lo ameritan. Entiendo que las multas tienen un efecto disuasivo, pero cuando se impone una injusta no existe ninguna solución. Hace unos días, en plena Plaza de Armas, un policía de tránsito multó al taxi en el que yo viajaba por una falsa infracción. Pretendí reclamar ante el SAT, y me contestó una máquina, una y otra vez. Sea por multas impuestas con razón o sin ella, ahora numerosos conductores de transporte público y taxistas se expresan con verdadero odio contra la alcaldesa.

Probablemente por un mal entendido espíritu de cuerpo, Susana Villarán ha defendido siempre a la Gerencia de Transporte Urbano y a las demás Gerencias, aun cuando cometían errores, lo que la ha expuesto innecesariamente. A la larga, los ciudadanos no tienen la posibilidad de obtener la destitución de gerentes, asesores o funcionarios ineficientes... pero sí la de la alcaldesa.

AL CAER LA NOCHE

Todas las noches, hacia las diez, el Serenazgo se retira del jirón De la Unión, y este se llena de ambulantes y vendedores de comida. En el cruce de Tacna y Emancipación se instala un paradero informal de colectivos. En cuanto a los paraderos formales, tan difíciles de ubicar, ya no son un problema: "A esta hora los vendedores ya paran en cualquier parte", comenta un vendedor de anticuchos.

Pareciera que para los encargados de la seguridad ciudadana o del transporte urbano, de noche no vale la pena ya promover el orden. Casi todos los que circulan por el Centro Histórico a esa hora pertenecen a los sectores populares. No sería extraño que sintieran que, para ellos, la Municipalidad no trabaja. ¿Servirá para ellos la propaganda por el No? _____ □

Este artículo debe citarse de la siguiente manera:

Ardito, Wilfredo "¿Por qué muchos pobres no quieren a Susana Villarán?". En *Revista Argumentos*, año 7 n.º 6. Marzo 2012. Disponible en <http://www.revistargumentos.org.pe/ardito.html>
ISSN 2076-7722

RACIONALIDAD Y EMOTIVIDAD EN LAS ELECCIONES PERUANAS: una propuesta de investigación



Arturo Maldonado*

¿Cuáles son los factores que explican el voto? Esta pregunta es el santo grial de los estudios del comportamiento electoral, y desde hace años la ciencia política ha tratado de brindar respuestas tomando aportes de otras disciplinas, como la sociología, la psicología o la economía. Las aproximaciones de la identificación partidaria y las que se derivan del paradigma de la elección racional han dominado el debate académico. Más recientemente, algunos autores postulan que los afectos y las emociones pueden ser factores explicativos del comportamiento electoral de los votantes. En este texto propongo que estos nuevos acercamientos son útiles para explicar el comportamiento del votante peruano, y del votante limeño en el proceso actual de revocatoria.

En un contexto con un sistema de partidos que no se ha consolidado, donde existen escasas y débiles identidades partidarias, donde la capacidad de procesamiento de información del votante es equivalente con el pobre nivel del sistema educativo y donde la información política que reciben los votantes es muy deficiente, estos no pueden ejercer su potencial racional, y entonces recurren a sus afectos y emociones como información que los guía en la toma de la decisión política acerca de por quién votar.

EXPLICACIONES ACERCA DEL COMPORTAMIENTO ELECTORAL

La teoría en ciencia política nos ha entregado tres síntesis importantes sobre el comportamiento electoral de los votantes. La primera, que se plasma en el libro *The American Voter* (Campbell, Converse, Miller y Stokes 1960), enfatiza la identificación

* Candidato a Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Vanderbilt.

partidaria como principal variable explicativa. Esta identificación es un vínculo que forma el votante con un partido político, que se crea a través de la socialización y pasa a través de las generaciones, en una suerte de herencia política.

sin partidos políticos sólidos no hay socialización política, y por lo tanto el resultado estaría más marcado por la volatilidad que por la estabilidad del comportamiento electoral.

La siguiente síntesis tuvo como claro referente al paradigma de la elección racional, que aplicó la idea de la maximización de los beneficios y la reducción de los costos al campo del comportamiento electoral. El trabajo pionero es *An Economic Theory of Democracy* (Downs 1957), que dio origen a los modelos espaciales del comportamiento electoral. Según esta lógica, los partidos escogen impulsar políticas y propuestas que encajan en una escala ideológica, y luego los electores calculan su ubicación y las distancias entre ellos y los partidos, y optan por un criterio de proximidad. Esta aproximación es bastante exigente con el votante, pues requiere que esté informado acerca de la posición de los partidos y de su propia posición en los *issues* más importantes. Versiones menos rígidas con el votante requieren que este conozca la ubicación de los partidos y la suya propia en una escala resumen —la conocida escala izquierda derecha—. Investigación empírica, sin embargo, encontró que los votantes estaban lejos de tener la información necesaria que la teoría requería (Converse 1964).

Una postura más moderna, que se derivó también del paradigma racional, requería aún menos del

votante. Fiorina, en *Retrospective Voting in American National Elections* (1981), solo espera que los votantes cuenten con un bit de información: cómo ha cambiado su bienestar durante el periodo de gobierno. Es decir, este autor propone que los votantes evalúen retrospectivamente la performance del gobernante, y sobre esa base deciden premiar o castigar al candidato o partido. Cada elección es, pues, una rendición de cuentas del gobernante o del partido del gobernante, en la que son evaluados sobre la base de qué tanto han mejorado las condiciones de vida de los ciudadanos.

La pregunta que surge es cómo estos enfoques sirven para explicar el comportamiento electoral del peruano y del limeño en el actual proceso de revocatoria.

EL CASO PERUANO Y LIMEÑO

La aproximación de la identificación partidaria le exige más al contexto que al votante. El contexto necesitaría de instituciones partidarias que sobrevivan en el tiempo, que forjen identidades en sus seguidores y que sean coherentes en sus posiciones, mientras que el votante solo requeriría socializarse dentro de estas instituciones para adquirir esta identificación de largo plazo. En el actual contexto peruano es casi un sentido común mencionar que no se ha institucionalizado un sistema de partidos que pueda brindar esta socialización a los electores. Las escasas excepciones parecen ser el aprismo y el fujimorismo. Según Meléndez (2012), los votantes que se identifican como apristas son el 5.5% y los fujimoristas, el 14%. En las pasadas elecciones presidenciales, el voto partidario fujimorista pudo tener alguna relevancia, pero, en el actual contexto de la revocatoria, el peso de las identidades partidarias es mínimo debido a que el partido aprista y el fujimorismo actúan como actores secundarios. Fuerza

Social (y en general el sistema de partidos) está lejos de ser una institución política que haya generado identidades partidarias multitudinarias que le permitan a Villarán asegurar un porcentaje de votos a su favor. La identificación partidaria sería en el Perú una variable marginal en la explicación del voto, circunscrita al exiguo porcentaje que se siente representado por un partido y vota de acuerdo a esa identificación. Es decir, sin partidos políticos sólidos no hay socialización política, y por lo tanto el resultado estaría más marcado por la volatilidad que por la estabilidad del comportamiento electoral. Y, efectivamente, en el país la volatilidad de las preferencias ha sido la marca Perú del comportamiento electoral nacional.

Las aproximaciones que se derivaron del paradigma de la elección racional le exigen más al votante que al contexto; es el votante el que necesita ir a la caza de la información política si es que quiere emitir un voto “racional”. Los problemas en el contexto peruano surgen tanto en el procesamiento de la información como en la oferta informativa.

El sistema educativo peruano es uno de los peores de la región, y forma ciudadanos con escasas capacidades de procesamiento de información, incluyendo la información política. Más aún, la oferta informativa es sesgada, imprecisa o falsa. Si a esto le sumamos el poco interés en la política, que no va más allá del vistazo superficial a las primeras planas de los periódicos, entonces tenemos un panorama desalentador para un adecuado cálculo racional. De un lado, el sujeto calculador no está formado para hacer este ejercicio, y de otro, la información no ayuda a la racionalidad de la decisión política. En el proceso de la revocatoria está claro que la situación no ha mejorado; por el contrario, se podría decir que cada vez se habla

menos de lo que hizo y no hizo la alcaldesa, y cada vez se escuchan más ataques personales, lo que envilece la política y enturbia los canales de información del ciudadano.

El acercamiento retrospectivo rescata la racionalidad del ciudadano desinformado, al requerir solo una evaluación del cambio en su bienestar. Esta aproximación es útil en el contexto peruano. Carrión (1997) y Stokes (1999) analizan bajo esta perspectiva el gobierno de Fujimori, y concluyen que los ciudadanos premiaron a Fujimori por su desempeño económico y la lucha contra la subversión.

Se podría decir también que esta lógica está detrás de las explicaciones estructurales que resaltaban una continuidad en el voto limeño y en el voto provinciano en las dos últimas elecciones presidenciales. El mecanismo de estas explicaciones estructurales, sin embargo, no queda claro. Se sospecha de un voto socioeconómico, clasista, o étnico. Sin embargo, lo que podría esconderse detrás del nivel socioeconómico, la clase social o la etnicidad, es un conjunto de electores conformes/disconformes con el actual status quo y que vota por una permanencia/cambio del actual sistema político, económico y social. Se trataría entonces de un ajuste de cuentas con el actual sistema donde aquellos electores cuyas condiciones de vida no han cambiado para mejor votarían por el candidato que mejor personalice el cambio. En el 2011, Humala fue esta persona y eso explicaría su mayor intención de voto entre la población con lengua materna indígena, entre los pobres, los menos desarrollados, los de menores ingresos familiares y los más rurales. El voto de Fujimori fue exactamente lo opuesto, representando entonces el voto de aquellos que hacían un balance positivo del sistema (ver Tanaka, Barrenechea y Vera 2011).

En el actual contexto de la revocatoria, es muy probable que muchos ciudadanos estén castigando a la alcaldesa por su supuesta incapacidad de ejecutar obras en beneficio de la ciudad, aunque comparativamente su gestión no haya sido muy diferente de la de sus antecesores. De hecho, desde la tribuna de Villarán se resalta el hecho de que su gestión ha ejecutado más presupuesto que la de su antecesor, y que se ha comprado pleitos que los que la precedieron no quisieron enfrentar, como la mejora del transporte o el traslado de los comerciantes de La Parada. Es decir, los ciudadanos de Lima están castigando a la alcaldesa cuando antes premiaron a sus antecesores por iguales o peores performances. ¿Por qué los votantes limeños han exacerbado su evaluación de la actual gestión? Las explicaciones que se derivaron del paradigma racional no podrían explicar estos vaivenes del electorado. Propongo que los afectos y las emociones son los lentes que distorsionan el juicio de los votantes, aumentando los defectos y empequeñeciendo los logros, y por lo tanto son variables útiles en la explicación del comportamiento volátil del elector peruano.

LOS AFECTOS Y EMOCIONES EN LAS ELECCIONES NACIONALES

La literatura en ciencia política ha analizado el efecto de los afectos en el voto (Brady y Sniderman 1985) y el rol de las emociones en la búsqueda de información política y en la movilización, incluyendo el voto, pero no su dirección (ver Valentino et al. 2011, Valentino et al. 2008 y Marcus y Mackuen 1993). Una línea importante de investigación explora el rol de las campañas políticas como mecanismo de información, pero también como generador de emociones.

La agenda de investigación tiene pendiente examinar si los candidatos despiertan emociones y si

estas emociones tienen efecto en el voto. Mirando las últimas elecciones presidenciales, vemos que el miedo hacia Humala fue un potente determinante del voto de sectores asustados con cualquier cambio en el piloto automático del crecimiento económico, y la aversión hacia Keiko Fujimori fue otro poderoso determinante de sectores comprometidos con la memoria y la lucha contra la corrupción. La evidencia indica que las emociones que suscitaron los candidatos correlacionaban mejor que cualquier otra variable con la intención de voto.¹

Cuadro 1: Tabla de correlaciones

Variables	Voto Fujimori	Voto Humala
Respuesta emocional	0.70	0.76
Simpatía por partido	0.55	0.73
Escala izquierda-derecha	0.28	-0.26
Satisfacción con la democracia	0.22	-0.20

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta de mayo de 2011 del Instituto de Opinión Pública de la PUCP.

En el proceso de revocatoria también parecen estar involucrados los afectos y emociones. Los adjetivos lanzados a Villarán son una manifestación de ello. Los términos “vaga”, “ineficiente” o “pituca” son expresión de un resentimiento profundo que dispara a su vez una distancia emocional en el votante. De otro lado, la campaña emprendida por el “No” también expresa el rol de las emociones. Los llamados memes son efectivos no tanto por aumentar el recuerdo de la palabra “No” o por generar interés en el tema, como

¹ Se les solicitó a los encuestados que eligieran dos emociones que les generaban Humala y Fujimori de un total de 10 (5 positivas y 5 negativas). La respuesta emocional sintetiza estas respuestas, y va desde -2 si el encuestado mencionó dos emociones negativas hasta +2 si el encuestado mencionó dos positivas.

algunos expertos han manifestado, sino por las emociones que provocan. Han transformado la campaña, que ha pasado de un monopolio de emociones negativas a un clima más festivo, donde también existen la alegría y el entusiasmo.

Entonces, no es que los votantes del “Sí” hagan un balance negativo de costos y beneficios; de hecho, hasta pueden ser beneficiarios de algunas obras o quizá sepan que la actual gestión no es peor, o que incluso es mejor, que las anteriores; pero los lentes de sus afectos y emociones negativas hacia la alcaldesa distorsionan su visión, lo que acrecienta la percepción de sus errores y empequeñece sus logros. Al momento de decidirse, a los votantes limeños se les haría más fácil hacer un cálculo emocional basado en qué tanta simpatía o antipatía les genera Villarán que hacer un cálculo complejo de costos y beneficios, para el cual no cuentan ni con las herramientas cognitivas ni con la información adecuada. La batalla por Lima es una lucha por conquistar los corazones más que por convencer con razones.

LA AGENDA PENDIENTE

Empíricamente, podríamos anticipar que aquellos a quienes Villarán les despierte antipatía y aquellos a los que su gestión les ha generado descontento, desilusión o tristeza votarán mayoritariamente en su contra, y que estas consideraciones serían más poderosas que la identificación partidaria o que el balance de las obras de la gestión municipal. Sin embargo, es necesario contar con más evidencia para sustentar esta afirmación y para responder a muchas otras preguntas que surgen acerca del rol de los afectos y las emociones en la política peruana. Por ejemplo, ¿existe un trade-off entre el cálculo de costos y beneficios y el uso de los afectos y las emociones? Es

decir, ¿a medida que el contexto desalienta el uso del cálculo racional, los afectos y emociones cobran mayor relevancia? Por el contrario, ¿escenarios más institucionalizados, con un sistema firme de partidos políticos y con información política de calidad, favorecen el cálculo racional, y por lo tanto los afectos y emociones terminan siendo factores secundarios? Luego, ¿quiénes son aquellos que usan mayormente sus afectos como mecanismo de toma de decisiones políticas? ¿Son los menos informados? Finalmente, ¿son los afectos y las emociones contrarias a la razón, o ayudan al cálculo racional, dado que incentivan la búsqueda de información?

Los llamados memes son efectivos no tanto por aumentar el recuerdo de la palabra “No” o por generar interés en el tema, como algunos expertos han manifestado, sino por las emociones que provocan.

Estas son preguntas que van más allá del proceso actual de revocatoria. Este proceso electoral es una buena excusa para debatir acerca del comportamiento electoral de los peruanos desde la ciencia política, la que hasta el momento ha carecido de explicaciones sistemáticas actuales acerca de cómo votamos. Este texto es también una invitación para que la disciplina y sus practicantes tomen más en cuenta las explicaciones que parten del sujeto, con sus aproximaciones más recientes, que enfatizan las limitaciones del actor racional e incluyen los sesgos psicológicos dentro del modelo de comportamiento. □

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Brady, Henry E. y Paul M. Sniderman (1985). "Attitude Attribution: A Group Basis for Political Reasoning". En *American Political Science Review*, 79: 1061-1078.
- Campbell, August, Philip Converse, William Miller y Donald Stokes (1960). *The American Voter*. New York: Miller. 1960
- Carrión, Julio (1997). "La opinión pública bajo el primer gobierno de Fujimori: ¿de identidades a intereses?". En Fernando Tuesta (ed.), *Los enigmas del poder: Fujimori 1990-1996*. Lima: Fundación Friedrich Ebert.
- Converse, Philip (1964). "The Nature of Belief Systems in Mass Publics". En David Apter (ed.), *Ideology and Discontent*. New York: The Free Press.
- Downs, Anthony (1957). *An Economic Theory of Democracy*. Nueva York: Harper Collins Publishers.
- Fiorina, Morris (1981). *Retrospective Voting in American National Elections*. New Haven: Yale University Press.
- Markus, George E. y Michael B. Mackuen (1993). "Anxiety, Enthusiasm, and the Vote: The Emotional Underpinnings of Learning and Involvement during Presidential Campaigns". En *The American Political Science Review*, vol. 87, n.º 3: 672-685.
- Meléndez, Carlos (2012). "Partidos inesperados: la institucionalización del sistema de partidos en un escenario post colapso partidario. Perú 2001-2011". Paper no publicado.
- Stokes, Susan (1999). "La opinión pública y la lógica política del neoliberalismo". En Fernando Tuesta (ed.), *Fujimori, la oposición y las reglas*. Lima: Fundación Friedrich Ebert.
- Tanaka, Martín, Rodrigo Barrenechea y Sofía Vera (2011). "Cambios y continuidades en las elecciones presidenciales 2011". En *Revista Argumentos*, año 5, No. 2, mayo 2011.
- Valentino, Nicholas A. et al. (2008). "Is a Worried Citizen a Good Citizen? Emotions, Political Information Seeking, and Learning via the Internet". En *Political Psychology*, vol. 29, n.º 2: 247-273.
- Valentino, Nicholas A. et al. (2011). "Election Night's Alright for Fighting: The Role of Emotions in Political Participation". En *The Journal of Politics*, vol. 73, n.º 1: 156-170.

Este artículo debe citarse de la siguiente manera:

Maldonado, Arturo "Racionalidad y emotividad en las elecciones peruanas: una propuesta de investigación?". En *Revista Argumentos*, año 7 n.º 6. Marzo 2012. Disponible en http://www.revistargumentos.org.pe/racionalidad_y_emotividad.html
ISSN 2076-7722

REVOCATORIA 2013: la prensa, las encuestas y el peso de las palabras



Carolina Arrunátegui*

El año 2010, el presidente ejecutivo de Ipsos Apoyo, Alfredo Torres, publicó un breve artículo en el portal de Perú Económico, en el que explicaba cuál es el papel que juegan las encuestas en los procesos electorales. Torres llega a dos conclusiones: la primera es que las encuestas son importantes porque tienen la capacidad de influir en las decisiones electorales, tanto de la opinión pública como de los mismos candidatos. Por ejemplo, dice él, hay políticos que se animan a participar en una elección porque las encuestas los presentan como favoritos y hay los que se inhiben de hacerlo porque las encuestas no los favorecen. Las encuestas tienen también el poder de influir en los discursos de los candidatos: estas muestran cuáles son las principales preocupaciones de los ciudadanos, y un político que aspire a conectar con ellos debe incluirlas en su agenda. Por otro lado, las encuestas pueden tener efectos

en el estado anímico de los candidatos: pueden desanimarlos y hacerlos abandonar su militancia si les son adversas o conminarlos a proseguir si los respaldan. En el elector también tienen consecuencias importantes. Si bien la mayoría de electores vota por el candidato de su preferencia, existe un sector importante que prefiere llevar a cabo un voto estratégico: si las encuestas sitúan a su candidato favorito muy abajo en las preferencias, estos electores desvían su voto hacia alguno de los candidatos con más posibilidades. De este modo, sienten que están haciendo un voto “útil”. Queda claro, pues, que las encuestas tienen el poder de cambiar el rumbo de los acontecimientos en un proceso electoral. La otra conclusión importante a la que llega Torres es que este poder no puede ser administrado por nadie: ni por los encuestadores, ni por la prensa, ni por los políticos. Según él, los efectos de las encuestas son impredecibles, y no pueden ser manipulados.

* Lingüista, Pontificia Universidad Católica del Perú.

Agradezco la valiosa ayuda de Héctor Cárdenas López en la discusión de las ideas que se presentan aquí y de Marco Lovón Cueva en la búsqueda de información y en la confección de este texto.

Esta última idea es la que quisiera ahora discutir a propósito del proceso de revocatoria que está viviendo la ciudad en estos días. Coincido con Alfredo Torres cuando dice que no es posible predecir con plena certeza los efectos que una encuesta pueda tener en la opinión pública, pero lo que sí es posible es controlar la interpretación de las cifras que arrojan las encuestas, y esta es, sin duda, una manera de administrar su poder. Las cifras nunca significan por sí solas, es necesario dotarlas de sentido, y, en nuestro medio, es la prensa la que se encarga de ello. Lo estamos viviendo ahora mismo con el proceso de revocatoria. El pasado domingo 17 de febrero, los programas *Cuarto poder* de América Televisión y *Punto final* de Frecuencia Latina difundieron sendas encuestas sobre la intención de voto por el Sí o por el No. *Cuarto poder* presentó las cifras de la encuestadora Ipsos Apoyo y *Punto final* las de Datum. A la mañana siguiente, el lunes 18 de febrero, las encuestas estaban en las portadas de los diarios más importantes de la ciudad. Y lo que he observado es que la prensa escrita no se ha limitado a difundir sus resultados, sino que se ha enfrascado en una lucha por su interpretación. Cada diario, dependiendo de si está a favor o en contra de la revocatoria —una vez más comprobamos que la neutralidad periodística es una ilusión—, le ha dado un tratamiento distinto a las cifras y ha echado mano de distintos recursos lingüísticos para construir una interpretación de estas acorde a sus intereses.

En general, los diarios que están en contra de la revocatoria a Susana Villarán han puesto el énfasis en el acortamiento de la brecha porcentual entre el Sí y el No. La interpretación de las cifras es la misma para todos ellos: las encuestas, tanto la de Ipsos Apoyo (56% al Sí, 38% al No) como la de Datum (47% al Sí, 45% al No), favorecen a Susana Villarán porque muestran cómo el apoyo al No ha subido en relación con meses anteriores

y cómo el respaldo al Sí ha experimentado una disminución. Estos diarios, además, resaltan los resultados de Datum, que muestran un empate técnico, al establecer una diferencia porcentual de dos puntos entre el Sí y el No. Diarios como *La República*, *El Comercio*, *La Primera* y *Diario 16* están en esta línea. En contraste, los diarios que están a favor de la revocatoria sostienen que los resultados de las encuestas son clarísimos, y que no hay que buscarle tres pies al gato: las cifras de Ipsos Apoyo anuncian que el Sí es el virtual ganador (56% al Sí, 38% al No) con una diferencia porcentual de 18 puntos difícil de remontar a menos de un mes del proceso de consulta. Al mismo tiempo, estos diarios ponen en duda o descalifican los resultados de Datum, y, en algunos casos, ni siquiera los consignan. Diarios como *Correo*, *Expreso*, *La Razón* y *Nuevo Sol* están en esta línea. Como podemos ver, las mismas cifras pueden favorecer o perjudicar a Susana Villarán, todo depende del cristal con el que la prensa las mire.

Para llevar a cabo esta construcción de sentido, los diarios han utilizado ciertos recursos lingüísticos. Un denominador común en el discurso de los diarios que están en contra de la revocatoria es el uso de *cadena léxica* y *metáforas*. Veamos los siguientes titulares de portada de *La República*, *La Primera* y *Diario 16*:

(1)

La República

Titular de portada: Según últimas encuestas,
Crece apoyo al NO

¹ En este análisis no se han incluido a los llamados diarios “populares” o “chicha” porque, como señala Gargurevich (1992), este tipo de prensa se caracteriza por hacer una cobertura mínima de temas políticos. La ausencia de estos temas en estos diarios responde a la necesidad de evitar su politización, lo que generaría una pérdida de lectores.

Subtítulos:

- Ipsos Apoyo: La opción por el Sí cayó 9 puntos en tres meses mientras el NO subió 7 puntos en el mismo periodo.
- Último sondeo de Datum da 47% al Sí y 45% al NO. *Virtual empate técnico* a 30 días de la revocatoria.

La Primera

Titular de portada: Revocatoria se desploma. 49% al NO y 51% al Sí.

Subtítulo:

- Crece el NO de manera acelerada y el Sí está en caída libre. Datum dice que hay *empate técnico*.

Diario 16

Titular de portada: ¡Campaña de infarto! *Empate técnico* Sí 47% NO 45%

Subtítulos:

- Encuestadora Datum confirma *repunte* de alcaldesa Susana Villarán.
- En tanto, Ipsos Apoyo ratifica *incremento* de 6 puntos del NO y *bajón* de puntos de revocadores.

Lo que queremos resaltar en estos datos es que el No de Susana Villarán aparece sistemáticamente asociado a palabras como “crece (de manera acelerada)”, “subió”, “repunte” e “incremento”, mientras que el Sí se vincula a “cayó”, “desploma”, “bajón” y “caída libre”. Estas asociaciones de palabras, llamadas cadenas léxicas, son un mecanismo de cohesión textual² que funciona como un

medio para construir una imagen, una realidad. A partir de la repetición constante de una misma palabra bajo la forma de distintos sinónimos (“crece”, “subió”, “repunte”, etc.), las cadenas léxicas guían la comprensión lectora de los receptores y los “llevan” hacia un tema común que queda fijado como el asunto central o el más importante de un texto (Halliday y Hasan 1976). En el caso de estas portadas, el tema que se quiere fijar, es decir, la realidad que se quiere construir, es que las cifras de las encuestas favorecen a Villarán y perjudican a los partidarios de la revocatoria.

El otro recurso lingüístico que está en juego aquí son las metáforas. Las metáforas nos permiten hacer comprensible un objeto en términos de otro, activan representaciones simbólicas subyacentes y unen lo lógico con lo emocional (Mio 1997, citado por Charteris-Black 2005). En el caso de nuestros datos, los diarios están recurriendo a una metáfora orientacional (Lakoff y Johnson 1986) al utilizar términos como “subió”, “bajó”, “caída libre”, etc. Este tipo de metáfora parte de un concepto básico asociado a nuestra experiencia física, sensorial y motora (arriba/abajo) y se liga a una estructura conceptual perteneciente al campo de las emociones y los valores: lo bueno es arriba y lo malo es abajo. A partir de esta metáfora, los diarios en cuestión pueden construir fácilmente la idea de que las cifras de las encuestas muestran que la situación electoral de Villarán es “buena”, mientras que la de los partidarios de la revocatoria que es “mala”.

Notemos también que todos estos diarios recogen los resultados de Datum y utilizan el término “empate técnico” para evaluar sus cifras, lo que claramente refuerza la imagen positiva del No, al situarlo en igualdad de posibilidades frente al Sí. El caso de *El Comercio* merece comentario aparte. En el discurso de este diario no hay presencia de

² La cohesión es la propiedad textual que supone que las oraciones están vinculadas y conectadas entre ellas por elementos concretos que permiten acceder al sentido del texto, porque un texto no es una suma de oraciones, sino el producto de las relaciones que se establecen entre ellas (Halliday y Hasan 1976).

cadena léxica ni de metáforas, ni se hace alusión directa al tema del empate técnico, pero lo que sí está presente, al igual que en todos los diarios que están a favor de Villarán, es la interpretación de las encuestas que pone el énfasis en el acortamiento de la brecha entre el Sí y el No:

(2)

El Comercio

Extracto de noticia (página A2):

A menos de un mes de la consulta revocatoria contra la alcaldesa Susana Villarán y sus 39 regidores, el primer simulacro de votación con ánfora que Ipsos Apoyo realizó para América Televisión proyecta —según los sufragios emitidos— que el 50% de limeños votaría a favor de remover a la burgomaestre, mientras que el 36% lo haría en contra. En el simulacro, el 9% votó en blanco y el 5% viciado. *Si solo se consideran los votos válidos, el 58% votaría a favor de la revocatoria y el 42% en contra, lo que representa una diferencia de 16 puntos entre el Sí y el No. La distancia entre quienes están a favor y en contra, si se compara con una encuesta hecha en enero, disminuyó de 27 a 18 puntos. Según Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Apoyo, hay una tendencia a que se reduzca la brecha entre el Sí y el No.*

Es interesante notar que, a diferencia de los otros diarios, *El Comercio* ha utilizado las cifras del simulacro de votación de Ipsos Apoyo (58% al Sí y 42% al No) y no las de intención de voto (56% al Sí y 38% al No). Esto es significativo porque, a partir de estos resultados, la distancia porcentual entre el Sí y el No se reduce de 18 a 16 puntos. Con esta última cifra (16 puntos), la idea de una

reducción de la brecha entre el Sí y el No se refuerza, y con ello la imagen positiva del No. *La Primera* también utiliza las cifras del simulacro de votación de Datum (véase los titulares reproducidos líneas arriba), que también sugieren un empate técnico (51% al Sí y 49% al No).

los diarios que están a favor de la revocatoria dan por sentado que las cifras de Ipsos Apoyo “hablan por sí mismas” y que la única interpretación posible es que el Sí es el virtual triunfador del proceso de consulta del próximo 17 de marzo

En contraste, los diarios que están a favor de la revocatoria dan por sentado que las cifras de Ipsos Apoyo “hablan por sí mismas” y que la única interpretación posible es que el Sí es el virtual triunfador del proceso de consulta del próximo 17 de marzo. Para reforzar esta idea, estos diarios hacen énfasis en la distancia porcentual entre el Sí y el No, y enfocan sus energías en desacreditar los resultados de Datum que sugieren el empate técnico. Veamos los siguientes datos provenientes de *Correo*, *La Razón*, *Nuevo Sol* y *Expreso*:

(3)

Correo

Titular de noticia: Según la encuesta de Ipsos Apoyo, 38% lo haría por el “NO” y 56% votaría por el “Sí” a la revocatoria

Subtítulo:

- Sondeo de Datum registra “empate técnico” de 47% y 45%.

La Razón

Titular de noticia: Revocatoria es respaldada por 56% de limeños frente a 38% que no está de acuerdo, según encuesta de Apoyo

Subtítulo:

- Mientras cuestionada encuestadora Datum le da un empate técnico.

Nuevo Sol

Titular de portada: Sondeo de IDICE da amplia ventaja de 20% al “Sí” sobre el “No”. Última encuesta hunde a alcaldesa Villarán

Expreso

Titular de noticia: Del Castillo sobre nuevo frente de izquierda: “Detrás del ‘No’ existe un proyecto político de los partidos totalitarios” (pp. 2-3)

En el cuerpo de la noticia:

Periodista: De otro lado, los partidarios del No a la revocatoria han sacado a relucir que su opción va obteniendo más puntos en las encuestas, pero la distancia con el Sí sigue siendo grande...

Del Castillo: Claro, hay 20 puntos de diferencia todavía. Queda aún mucho pan por rebanar, nadie puede cantar victoria; pero creo que queda claro que la idea de ellos es un proyecto político, no cabe duda.

Un primer aspecto que hay que notar en estos datos es el tratamiento que el diario *Correo* le da al término “empate técnico”. Como podemos observar, este aparece entre comillas. El uso de este recurso tipográfico tiene la importante función de

modalizar el término que acompaña. La modalidad es una categoría gramatical que se relaciona con el grado de certeza o el compromiso del emisor de un enunciado respecto de su contenido (Fairclough 1992). En este caso concreto, las comillas transmiten la idea de que el diario tiene un bajo grado de certeza respecto de los resultados de Datum, es decir, el diario no suscribe la existencia de un empate técnico entre el Sí y el No.

¿Qué persigue la prensa al enfrascarse en esta pugna por el significado de las encuestas? Creo que, en virtud del poder que estas tienen, la prensa está invitando a la opinión pública a llevar a cabo el conocido “voto estratégico”.

Por su parte, el diario *La Razón* es más explícito en su cuestionamiento a las cifras de Datum. En su titular, esta encuestadora es calificada de “cuestionada”, mientras que el término “revocatoria” aparece acompañado del adjetivo “respaldada”. Se trata, pues, de un trabajo de selección léxica en función de los intereses políticos del diario.

El diario *Nuevo Sol* no utiliza las cifras de Ipsos ni de Datum, sino las de una tercera encuestadora, Idice. Los resultados de esta encuestadora favorecen claramente al Sí, porque amplían la brecha porcentual entre el Sí y el No: si para Ipsos la brecha es de 18 puntos, para Idice es de 19,6%, cifra que el diario redondea a 20%. En términos de sus recursos lingüísticos, vemos que *Nuevo Sol* utiliza el adjetivo “amplia” para calificar la distancia porcentual entre el Sí y el No, mientras que el verbo “hunde” responde a una metáfora orientacional

según la cual “lo malo es abajo”, lo que lleva a interpretar que la situación electoral de Susana Villarán previa a la consulta popular es “mala”.

Por su parte, el diario *Expreso* no le dedicó una noticia a las encuestas, pero sí incluyó una entrevista a Jorge del Castillo, militante aprista, en la que este da su opinión sobre las cifras. En esta entrevista, Del Castillo pone el énfasis en la distancia porcentual entre el Sí y el No (“hay 20 puntos de diferencia todavía”). Aquí es importante recordar que cuando se construye un discurso se controla constantemente variables como qué se cita, cuándo y cómo, porque las fuentes de información que se incluyen son útiles para construir una realidad coherente con los intereses propios (Fairclough 1992). En este sentido, es significativo que *Expreso* haya elegido entrevistar a un político que claramente se encuentra en contra del No.

CONCLUSIONES

Es claro que hay una polarización de la prensa en relación con la revocatoria, y esta se ha hecho evidente en el tratamiento que cada diario le ha dado a las cifras de las encuestas de Ipsos Apoyo y Datum del pasado 17 de febrero. Como ha podido observarse a la luz del análisis, la prensa escrita ha protagonizado una lucha por la interpretación de estas cifras. Y es que nada en el mundo significa en sí mismo; ni los números, como acabamos de comprobar. La realidad es algo a lo que no podemos acceder directamente, sino solo a través del lenguaje. Y el lenguaje no es un espejo de la realidad, es decir, no la transmite a nosotros de manera transparente, “tal cual es”; por el contrario, al referirse a ella la construye, porque el significado está en la manera en que las personas utilizan las palabras (Fairclough 1992, Hall 1997, Van Dijk 1999, Shi-xu

2009). Este juego permanente entre la realidad y el lenguaje es lo que ha permitido que las mismas cifras puedan, al mismo tiempo, favorecer o perjudicar a Susana Villarán.

Ahora bien, ¿qué persigue la prensa al enfrascarse en esta pugna por el significado de las encuestas? Creo que, en virtud del poder que estas tienen, la prensa está invitando a la opinión pública a llevar a cabo el conocido “voto estratégico”. Se trata de una apelación a las mayorías. Un sector de la prensa está diciendo: “Súbete al carro de la mayoría. Si estabas a favor del No, desánimate, porque las cifras muestran claramente que es el perdedor. No desperdicies tu voto y vota por el Sí”. Y, por su parte, la otra prensa dice: “Si estabas a favor del Sí, desánimate, porque está sufriendo un bajón. No desperdicies tu voto y vota por el No”. No sabemos si estas ideas calarán en la gente y se reflejarán finalmente en las urnas, pero ciertamente ya están en la agenda de la opinión pública, y en estos días dirigen el debate sobre la revocatoria. □

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Charteris-Black, Jonathan (2009). “Gran Bretaña como contenedor: metáforas sobre inmigración en la campaña electoral en 2005”. En *Discurso y Sociedad*, vol. 3, n.º 3: 467-494.
- Fairclough, Norman (1992). “Text analysis: Constructing Social Reality”. En *Discourse and Social Change*. Cambridge: Polity Press, pp. 169- 199.
- Gargurevich, Juan (2002). *La prensa sensacionalista en el Perú*. Serie Comunicaciones. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Hall, Stuart (1997). “The Work of Representation”. En *Representation: Cultural Representations and signifying practices*. London: Sage, pp. 15-63.

Halliday, M. A. K y Ruqayia Hasan (1976). *Cohesion in English*. London: Longman.

Lakoff, George y Mark Johnson (1986). *Metáforas de la vida cotidiana*. Madrid: Cátedra.

Shi-xu (2009). "Discourse and Reality". En *A Cultural Approach to Discourse*. Londres: Palgrave: Macmillan, pp. 13-41.

Torres, Alfredo (2010). "El poder de las encuestas en las elecciones". En *Perú Económico S. A.* Disponible en <http://bit.ly/YU67SE>.

Van Dijk, Teun (1999). "Estructuras ideológicas del discurso". En *Ideología. Una aproximación multidisciplinaria*. Barcelona: Gedisa, pp. 328-344.

Este artículo debe citarse de la siguiente manera:

Arrunátegui, Carolina. "Revocatoria 2013: la prensa, las encuestas y el peso de las palabras". En *Revista Argumentos*, año 7, n.º 1. Marzo 2013. Disponible en http://www.revistargumentos.org.pe/revocatoria_2013.html
ISSN 2076-7722

ENTRE BRECHAS Y SOLEDADES. POLÍTICA Y SOCIEDAD EN EL PERÚ: a propósito de la soledad de la política, de Carlos Meléndez



Guillermo Rochabrún*

Meléndez Guerrero, Carlos (2012). *La soledad de la política. Transformaciones estructurales, intermediación política y conflictos sociales en el Perú (2000-2012)*. Lima: Aerolíneas Editoriales, para su sello editorial Mitin.

La *soledad de la política* es un libro que hace importantes aportes a esclarecer en qué consiste la “crisis de la política” en el Perú. El libro examina seis conflictos sociales recientes en diversas regiones del país, análisis precedido de dos capítulos generales, para al final cerrar con unas páginas de conclusiones. Se trata de un puñado de casos significativos, tomados del vasto escenario de conflictos desarticulados que caracteriza ahora a este país: Ilave, Quilish, Bambamarca, Moquegua-Tacna, Bagua y Conga. En lo que sigue voy a dialogar libremente con el texto, retomando algunas ideas y conceptos, buscando darles una mayor precisión, y potenciar así el esclarecimiento que él brinda.

* Sociólogo, Profesor de Sociología en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Una de las tesis del libro sostiene que el país atraviesa una gran transformación de muy largo alcance que está lejos de haber terminado, comparable a la secuela de mutaciones que siguieron a las migraciones masivas de los años cincuenta. Es una “coyuntura crítica”, pues varios cursos alternativos son posibles; ergo, las decisiones que tomen los actores sociales y políticos serían de muy vastas consecuencias.

UNA NUEVA ESTRUCTURA POLÍTICA

El libro muestra que la actual dinámica sociopolítica es muy diferente a la que tenía lugar hasta pocas décadas atrás. Las condiciones institucionales han cambiado drásticamente, casi siempre hacia la parcelación del Poder Ejecutivo, al delegar funciones y fondos a las municipalidades primero

y después a los gobiernos regionales, a lo que se agrega las instancias de participación. Todo ello activa el interés por los nuevos cargos políticos, pero en medio de una gran precariedad organizativa —tanto de parte del Estado como de los actores electorales— y de un gran desprestigio de los partidos, sin que las nuevas organizaciones escapen a ese designio.

Un resultado de esta combinación de transformaciones y ausencias es la elevada conflictividad en el país, sobre todo en las zonas rurales, pobres y aisladas. En los últimos 12 años, la ciudad de Arequipa ha sido la única ciudad capital donde se ha presentado un conflicto de alcance nacional, en 2002; los otros han sucedido en zonas rurales, y desde ahí a veces han arrastrado a centros urbanos, como Cajamarca o Bagua. Varios conflictos que han tenido dicha repercusión surgen ante la presencia, por primera vez en esas zonas, de grandes inversiones, sobre todo en minería e hidrocarburos, lo que ha provocado cambios en la propiedad, pugnas por tierras y agua, elevación del costo de vida, incremento de desigualdades muy visibles, etc. Meléndez coloca las inversiones como el cambio de alcance nacional más importante. Sin embargo, no todos los conflictos del país tienen ese origen —ni siquiera todos los que Meléndez estudia—, aun cuando ocurran en zonas de inversión. De modo que sería más consistente para el análisis priorizar los cambios institucionales y las brechas y conflictos que de ellos resultan, pues tienen lugar en todo el territorio, mientras que las inversiones ocurren solo en algunas zonas.

UNA DOBLE BRECHA

En el centro de su análisis Meléndez coloca una doble brecha. Una de ellas (vertical) tiene lugar entre cuatro niveles de gobierno y de política: local, provincial, regional y nacional. La otra (horizontal)

corre entre el plano social y político. A su vez, en esta última hay que distinguir entre los partidos y el Estado, diferencia que el libro analiza aunque sin conceptualizarla. La doble brecha hace que los conflictos se multipliquen y se vuelvan difíciles de manejar, a veces por la dificultad que tienen para agregarse y constituirse a nivel propiamente político.

Destaca el empeño de Meléndez en lograr un equilibrio entre las estructuras en proceso y los actores individuales. Lo hace alternando entre las circunstancias económicas, políticas y sociales en que transcurren los conflictos, y las trayectorias de líderes que azarosamente aparecen en medio de ellos.

Destaca el empeño de Meléndez en lograr un equilibrio entre las estructuras en proceso y los actores individuales. Lo hace alternando entre las circunstancias económicas, políticas y sociales en que transcurren los conflictos, y las trayectorias de líderes que azarosamente aparecen en medio de ellos. Nacidos en el medio donde actúan, muy adaptados a él, están sin embargo huérfanos de organización, de ideología, de metas, enfrentando solos el vacío entre el nivel local en el cual surgen y los niveles provincial, regional y nacional. En este análisis, a la manera de Charles Wright Mills en *La imaginación sociológica* (1959), la biografía revela la estructura social. En el libro, los dramas y vicisitudes de los operadores políticos denuncian las brechas entre los niveles espaciales, así como la forma en la cual la política y la sociedad funcionan como universos paralelos. Por ejemplo, el

éxito de estos dirigentes en las movilizaciones sociales no puede ser trasladado al escenario político electoral. Pero además de funcionar para el análisis como síntomas de las estructuras, los operadores pueden llegar a protagonizar actos significativos. Es decir, mientras más débil sea la institucionalidad más importancia en la coyuntura tendrá el caudillo circunstancial.

Como hemos mencionado, los cambios institucionales en general conducen hacia una suerte de parcelación del poder del Estado central, primero a través de municipalidades que reciben recursos del Gobierno central (por medio del Fondo de Compensación Municipal, en operación desde 1995), luego de “gobiernos regionales”, que siguen siendo solo demarcaciones políticas, y finalmente mediante mecanismos participativos (p. 33). Lo que en particular se desprende del análisis de Meléndez es que estos cambios institucionales son parte del problema. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo tiene ahora un escenario mucho más fragmentado que antes: debe desprenderse de recursos e instancias, y luego coordinar con los nuevos organismos para intentar hacer aproximadamente lo mismo que antes. La cadena burocrática se alarga, y los mecanismos de transmisión se hacen más débiles, al menos inicialmente. Ahora hay que empalmar instancias que son más heterogéneas de lo que lo eran antes. El Gobierno central funciona mediante políticas, mientras que los gobiernos regionales operan —no sabemos por cuánto tiempo más— con una lógica totalmente distinta. De ahí la abundancia de recursos que no pueden ser utilizados o que se manejan erráticamente. Mientras tanto la regionalización no resuelve problemas fundamentales del Estado, como la sobreabundancia y superposición de entidades referidas a un mismo tema. Es así que en temas como

agua y transporte existen —para cada uno— al menos siete ministerios y más de diez entidades en total, las cuales no coordinan entre sí.

Surge entonces otra interrogante: ¿por qué se procedió a ejecutar estas reformas, y en particular la regionalización? Meléndez menciona la actuación de algunas ONG en la creación de cuadros técnicos en ciertas zonas, capaces de hacer demandas descentralistas, a lo cual se sumarían movilizaciones en esa dirección desde 1995 (p. 52); pero ello no es una explicación suficiente. Me pregunto entonces por el papel de los organismos multilaterales. Sería largo hacer la lista de las transformaciones institucionales que hemos tenido, y que —para bien o para mal— se han debido a ellos: la imposibilidad del Banco Central de emitir papel moneda, las reformas del Estado en los años noventa, los cambios en el régimen laboral, la privatización de los servicios públicos y la seguridad social, los mecanismos participativos, las evaluaciones educativas, etcétera. Esto obliga a ampliar el marco nacional de análisis, pues aspectos decisivos del escenario y de la problemática no se entienden sin dichas agendas. Es decir, varios de los cambios estructurales que definen la actual coyuntura crítica se deben a la capacidad de agencia de actores que operan a escala planetaria.

A esta globalización hay que agregar la suscripción de acuerdos internacionales (acerca de derechos humanos, la ley de consulta, el acatamiento a tribunales internacionales, etc.). En principio ello es potestad de cada país, pero su efecto neto es restar al Estado posibilidades de acción en su propio territorio. Ahora bien, de por sí esta merma en nada contribuye al acercamiento entre Estado y sociedad.

LA CONFLICTIVIDAD ACTUAL Y EL “DESBORDE”

¿Por qué el actual nivel de conflictividad social? Para Meléndez se trata de la convergencia de varios procesos, en principio independientes entre sí, de modo que la confluencia sería casual: inversiones extractivas masivas en zonas rurales pobres que no han conocido antes tales actividades, y menos bajo las modalidades tecnológicas actuales, disputa por los recursos y por su utilización y multiplicación institucional de instancias de poder, amén de los mecanismos de participación ciudadana (pp. 33-34). Sin embargo, varios de los conflictos estudiados, como el de Ilave, no han tenido que ver con grandes inversiones transnacionales, o, si ellas existían, el conflicto no era en su contra, como en el litigio Moquegua-Tacna. Esta incongruencia posiblemente es consecuencia de la prioridad que Meléndez da a hechos discretos y localizados —las inversiones— frente a procesos generales, como los cambios institucionales. Como quiera que fuese, en esta confluencia, según Meléndez, surge una coyuntura en la que las instituciones y la intermediación política son desbordadas. Esta es una de las nociones centrales que utiliza el autor. ¿Pero a qué llamar “desborde”? El término viene del muy conocido libro de José Matos Mar *Desborde popular y crisis del Estado* (1984), que fuera publicado en medio de una grave contracción económica y del aparato estatal, arrasamiento de las capas medias, auge de Sendero Luminoso y emergencia de nuevos sectores sociales. Sin embargo, no es ese desborde —más bien cuantitativo— lo que aparece en los casos estudiados.

En Ilave no faltó la presencia estatal: ahí actuaron desde el inicio el Ministerio del Interior, el Poder Electoral, el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo. Más bien, ocurría que en su conjunto formaban una institucionalidad muy mal adaptada a la situación. En Bagua se confrontaron la acumulación

capitalista internacional y poblaciones nativas organizadas que sentían amenazada su forma de vida, ya bastante modificada por el crecimiento económico y demográfico de la zona, con un Gobierno claramente inclinado hacia las inversiones. ¿En qué, pues, podría consistir el desborde? El término es muy impreciso, al punto que en cierto momento del análisis son los operadores políticos quienes “se ven desbordados”, porque pierden el control de las poblaciones movilizadas (pp. 78, 81). Pero es muy diferente que en determinado instante masas movilizadas superen a las “fuerzas del orden” —el millón (o más) de manifestantes por la autonomía en las calles de Barcelona— a que la institucionalidad como tal no funcione. En conclusión, hay que repensar la metáfora del “desborde”, y más bien vincular los fenómenos a los que alude a las brechas y al diseño y funcionamiento del plano institucional.

En Bagua se confrontaron la acumulación capitalista internacional y poblaciones nativas organizadas que sentían amenazada su forma de vida, ya bastante modificada por el crecimiento económico y demográfico de la zona, con un Gobierno claramente inclinado hacia las inversiones.

Ahora bien, no es la primera vez que se tiene un escenario tan convulso. Recuérdese que conforme transcurría el Gobierno Militar del periodo 1968-1980 se fueron fortaleciendo —y también surgieron sobre la marcha— numerosas organizaciones gremiales y movimientos como los Frentes de Defensa departamentales, todos en contra de un gran demandado: el Estado. Esto no fue accidental, porque, al intervenir en

todos los terrenos, el Gobierno se mostraba como el gran responsable. En medio de un denso escenario ideológico, el Gobierno era desafiado por una constelación de agrupaciones de izquierda clandestinas, entremezcladas con las organizaciones sociales. No había espacio para posiciones liberales, considerando el control gubernamental de la prensa y la TV, y que los partidos demoburgueses estaban en receso.

Hubo, pues, una conjunción de organizaciones sectoriales y regionales que avanzaron hacia un gran frente de masas, aglutinando demandas de alcance nacional. La intermediación política entonces era inexistente —el Gobierno era una dictadura hermética— y prácticamente innecesaria, porque el movimiento social era a la vez político; es decir, no había brecha. Si ahora la hay, ello se debe a las transformaciones de las últimas décadas. ¿Cómo se fue desvaneciendo la capacidad de articulación que entonces hubo y por qué no ha podido recuperarse, aun bajo otras modalidades? Es necesario repasar las transformaciones tanto del sistema político como del panorama social entre 1980 y 2000, y encontrar ahí los orígenes de muchos de los rasgos actuales. Pero cabe descartar la atribución común a todos estos problemas a una suerte de herencia colonial.

EL “DESBORDE” DE LA HERENCIA COLONIAL

Hay en las ciencias sociales una visión que es a la vez presentista e historicista, cuando proyecta hacia el pasado los problemas contemporáneos. Un ejemplo sería la “débil presencia del Estado” en el territorio (pp. 27, 29). Me pregunto: ¿débil para qué efectos? Téngase presente que si pensamos en las dificultades de comunicación lingüística, hasta fines del siglo XIX, el que una gran parte de la población peruana no hablara el idioma oficial o el analfabetismo en modo algu-

no eran problemas. Fue a partir de cierto momento del siglo XX que la clase dirigente se planteó metas para las cuales esas circunstancias eran obstáculos, y entonces la presencia del Estado se hizo más débil, pues tenía ante sí una nueva tarea, para la cual no estaba preparado. Y así como la educación, luego vino la salud pública. Si vemos transportes y comunicaciones, ¿cómo se compararía la actual red de carreteras y caminos, de puertos y aeropuertos, más teléfonos y satélites, con los sistemas análogos durante la Colonia, o inclusive en épocas prehispánicas? No obstante, hoy el país parece menos comunicado que antes.

Sin embargo, las diferencias son cualitativas, porque lo que es el Estado en cada época, y su relación con lo social, son muy diferentes, incluso hasta hacer muy forzada cualquier equivalencia formal. En la República del siglo XIX, los poderes locales, el gamonalismo y la Iglesia eran parte de un orden público en la medida en que eran sus garantes; mediante su presencia ese orden funcionaba. Pero si bien podemos decir que el Estado recién tuvo “el monopolio de la violencia legítima” (Weber) cuando acabó con las montoneras, su alcance podía ser débil en comparación con la dominación de los poderes locales. Al terminar de eliminar a los terratenientes con la Reforma Agraria de 1969, el Estado fue formalmente más homogéneo, pero incapaz de reemplazar a los poderes locales, que seguían existiendo y operando, en alianza con la burocracia tradicional, y saboteando a la burocracia encargada de las reformas.

Asumida como un simple membrete, la idea de herencia colonial hace que casi todos los grandes problemas del presente aparenten tener cinco siglos de antigüedad. Pero en realidad muchos de ellos aparecieron propiamente con la República, y ni siquiera en sus inicios. Esto no es una disquisición historiográfica erudita: tiene vastas implicancias político-epistemológicas, pues quien aspire a la transformación del país debe estar atento a los cambios que ocurren, sean

o no de su agrado.¹ El ejemplo más pertinente para este comentario es el de la crisis de la política.

LA CRISIS DE LOS PARTIDOS Y DE LA POLÍTICA

Ya en los años noventa se discutió si Fujimori había dado muerte a los partidos o si ellos se habían suicidado. Si la respuesta estaba en las condiciones políticas de la época fujimorista, quedaría por responder por qué no se recuperaron luego. Tengamos en cuenta que el desafecto de la ciudadanía hacia la política, los partidos y los políticos mismos, la volatilidad del voto —es decir, la práctica desaparición del “voto cautivo” — y el amplio uso del voto cruzado y preferencial ocurrían ya desde los años ochenta. A lo largo del libro, Meléndez trajina la brecha entre lo social y lo político, tanto estatal como partidario, pero en sus páginas no aparece una explicación. No pretendo suplir ese vacío, pero sí reflexionar sobre él distinguiendo entre la declinación de los partidos ante el electorado, la declinación partidaria interna al reducirse la militancia y el declive funcional. Hagamos un breve examen.

Qué tanto efecto pudo tener la prédica antipartido del Gobierno Militar o la de Fujimori es muy difícil de establecer.² El caso es que el regreso a las prácticas electorales en los años ochenta mostró al inicio una clara centralidad de los partidos, con una ampliación de su espectro, al incorporar a la que aún era una izquierda marxista, y de su espacio, al universalizar y extender el electorado a los mayores de 18 años aun

si fuesen analfabetos. Sin embargo, ya en ese entonces hubo al menos un síntoma de algo diferente: los electores empezaron a pasar con suma facilidad de un partido a otro, y a hacer uso del voto preferencial, así como del voto cruzado. La búsqueda de explicaciones a la “crisis de los partidos” debe empezar por ahí. Un elemento a tomar en cuenta es que desde 1980, a diferencia de su estatus anterior, el Parlamento careció de capacidad de gasto: el candidato a parlamentario tenía menos que prometer, y como parlamentario tenía menos que dar.

Luego aparecerían, fuera de todos los partidos, los *outsiders* exitosos: primero Belmont y luego el mismo Fujimori.³ La victoria de este fue lograda a costa de Mario Vargas Llosa, otro outsider, aunque finalmente quedara comprometido con los partidos tradicionales. Paralelamente surgieron iniciativas políticas provincianas, y llegaron en magnitudes oceánicas. Unas pocas han tenido continuidad, pero están lejos de constituir algo parecido a organizaciones partidarias. Meléndez ha sido de los pocos que ha estudiado este fenómeno, y en este libro refiere hechos curiosos, como el tráfico regional que partidos nacionales hacen de sus “franquicias”.

En cuanto a la declinación de la militancia, la izquierda la experimentó a todo lo largo de los años ochenta, y fue paralela a la del movimiento sindical y de su capa de dirigentes. Hoy es una situación general, con las significativas excepciones del fujimorismo y el Movadef. En mi experiencia vivida queda la sensación de que ahí se vivió un profundo cambio de horizonte de significado. En los años setenta, la prédica combinada del Gobierno Militar y de la izquierda constituyeron un horizonte cuya figura simbólica central era el trabajador asalariado organizado, enmarcado por leyes laborales, entidades estatales, gremios y cooperativas. La vida era, de

1 Por ejemplo, frente al clientelismo, el sistema político ha podido hacerse relativamente “democrático” en las últimas décadas, y no debido a una mayor “cultura democrática”, sino por la multiplicación de caudillos en competencia prebendaria. Pero, de otro lado, el actual rechazo al nepotismo y su persecución indican algún proceso de cambio en ese sentido.

2 No cabe explicar un fenómeno —en este caso, el desprestigio de los partidos y de la política— por alguna campaña, si vemos los efectos contraproducentes de muchos aluviones propagandísticos, y cuando al mismo tiempo apelamos a la “frágil memoria” del electorado para explicar algunos de esos fracasos.

3 Entendemos por *outsider* a quien no es un “político profesional”. La línea demarcatoria es borrosa.

muchas maneras, un proyecto donde lo individual, si no se subordinaba a, estaba claramente enmarcado en instancias colectivas. Pero la que sería una muy prolongada recesión económica tras el intento militar, el desmantelamiento y descomposición de sus reformas, los despidos masivos en 1977, la paulatina inoperancia de la confrontación sindical en los pliegos de reclamos, la aparición de estrategias colectivas de supervivencia —destinadas ya no a la lucha sino a gestionar colectivamente pequeños recursos para paliar problemas individuales inmediatos—, la expansión del trabajo por cuenta propia, la progresiva expropiación a la izquierda por parte de Sendero Luminoso de cualquier discurso que pareciera “radical”, etcétera, tuvieron como efecto global debilitar el horizonte colectivista anterior, e irlo reemplazando parcialmente por un horizonte individualizante. Recordemos cómo “prendió” en 1987 la iniciativa de Vargas Llosa contra la finta de Alan García de estatizar la banca.⁴ En ese nuevo escenario mental —al cual se sumó la prédica de Hernando de Soto sobre el trabajo informal, el discurso contra el estatismo y mucho más adelante el “emprendedurismo”— todavía continuamos. En estas condiciones pocos serán tentados por la militancia partidaria, a lo cual se agrega el debilitamiento de la dimensión ideológica de los partidos y su obsolescencia funcional. Pero ese es el punto siguiente.

Con la declinación funcional me refiero al desplazamiento de la negociación política por la tecnocracia. Uno de sus principales escenarios es la delegación del Parlamento al Ejecutivo de facultades legislativas. La razón fundamental es la presión del capital internacional y de los organismos multilaterales, cuyos ritmos son mucho más rápidos que los de las legislaturas, pero que además demandan criterios coherentes y unívocos —se dice “técnicos”— en vez de complicadas fórmulas negociadas entre fuerzas políticas en pugna. Una piedra angular del orden demoliberal, como la

⁴ Téngase presente que todo esto es anterior al desplome del mundo soviético en 1989.

separación de poderes, es lenta e ineficaz para lo que la valorización del capital requiere. Y existe la manera —perfectamente constitucional— de pasarla por alto. En el Poder Ejecutivo esto implica sustituir los cuadros políticos partidarios por equipos de tecnócratas. En esas condiciones, ¿quién necesita partidos, más allá de los momentos electorales? Un aspecto adicional es la complicación de la política y su fragmentación a raíz de la regionalización misma: la política a la que estaban acostumbrados los otrora partidos nacionales ahora tampoco tiene cómo ejercerse en las regiones.

Una piedra angular del orden demoliberal, como la separación de poderes, es lenta e ineficaz para lo que la valorización del capital requiere. Y existe la manera—perfectamente constitucional— de pasarla por alto. En el Poder Ejecutivo esto implica sustituir los cuadros políticos partidarios por equipos de tecnócratas.

Vistas en conjunto estas tres dimensiones arriesgo algunas posibles relaciones entre ellas. En la base estaría un nuevo desarrollo de fuerzas productivas en los centros capitalistas, facilitado por la crisis de 1973, que llevó a un radical debilitamiento del trabajo frente al capital. Con todas las mediaciones que podían refractar este proceso, lo tuvimos en el país con el drástico hundimiento del peso de las remuneraciones ante las ganancias, y luego con la llamada “flexibilización laboral”. Fue también el debilitamiento de lo sindical y lo colectivo frente a un horizonte individualizante, que incluyó el crecimiento explosivo del trabajo por cuenta propia y más tarde la ideología del “emprendedurismo”. El desapego del electorado a los partidos puede, al menos en parte, entenderse en ese contexto.

Pero junto con esto hemos tenido un conjunto de procesos diversos, encubiertos por la palabra “globalización”. Si ella tiene algún sentido, es el de referir al predominio de flujos de bienes, capitales e información que cruzan fronteras nacionales, así como a la ubicuidad de muy diversas instancias supranacionales y supraestatales: organismos oficiales, empresas, ONG, equipos de tecnócratas cosmopolitas, mercados negros y mafias de todo tipo que quiebran la jerarquía espacial que Meléndez asume: local-provincial-regional-nacional. Saskia Sassen ha puntualizado cómo instancias espacialmente nacionales se enlazan entre sí en una lógica transfronteriza, obviando la jurisdicción del Estado-nación. Un ejemplo nuestro serían las gestiones —exitosas por lo demás— de unas comunidades de Huancavelica ante un tribunal internacional, asesoradas por alguna ONG, en un conflicto entre ese gobierno regional y el de Ica. El fallo tuvo que ser acatado por el Gobierno nacional. Así, al menos algunas brechas locales podrían explicarse por nuevos lazos globales.⁵ Precisemos que importantes aspectos de la nueva institucionalidad, como la participación, la licencia social o la consulta previa, también son parte de la llamada globalización. Esta es, pues, profundamente contradictoria. “La política ya no es lo que era”.

IGUALADOS EN LA DEBILIDAD

Mucho de lo que aparece ahora como fragmentación en el plano social es el resultado de... la igualdad. Ocurre que, sobre todo a nivel subdepartamental, los intereses diferentes tienen fuerzas muy parejas, hay un vacío ideológico, y tampoco forman redes de interdependencia. Como resultado, solo por excepción podrán constituirse coaliciones estables. ¿Qué pasó en un caso como el de Moquegua, donde al

agregarse distintos sectores a la movilización por la distribución del canon las demandas no se dispersaron (p. 91)? No hubo fragmentación, pero tampoco se superó la brecha frente a lo político. Como dice Meléndez, para superar esa brecha horizontal había que ir más allá del problema del canon, y encarar un proyecto de desarrollo regional, lo cual escapaba al horizonte de las bases movilizadas, e incluso del gobierno regional mismo.

En otras palabras, la diversidad no obliga a caer en la fragmentación. Nada impediría, en principio, que en medio de la diversidad existiera un ente hegemónico que hiciera alianzas con algunos —aun marginando a otros— y ejecutase un plan de desarrollo o algo parecido, a la vez que propusiera algún horizonte de significado. Pero esto requiere tanto de una instancia fuerte como de algún proyecto, y hace tiempo que carecemos de ambos. En los años ochenta, Hernando de Soto ensayó sobre todo lo segundo: “síntese empresario” era su consigna, pero no tuvo éxito con “la alianza formal-informal”. En las últimas dos décadas, todos los Gobiernos parecen esperanzados en que las cifras de crecimiento por sí solas produzcan milagros sociales y políticos. La política no solamente se ha quedado sola, sino sin brazos.

Celebro este libro como un peldaño más dentro de la trayectoria de su autor. No es una obra definitiva, sino un trabajo que le permite hacer un alto, intercambiar ideas —lo cual estamos haciendo ahora—, mirar de nuevo y, con las baterías recargadas, intentar el siguiente peldaño. □

Este artículo debe citarse de la siguiente manera:

Rochabrún, Guillermo “Entre brechas y soledades. Política y sociedad en el Perú: a propósito de la soledad de la política, de Carlos Meléndez”. En *Revista Argumentos*, año 7, n.º 1. Marzo 2013. Disponible en http://www.revistargumentos.org.pe/brechas_y_soledades.html
ISSN 2076-7722

⁵ Véase de esta autora *A Sociology of Globalization*. Norton and Company, 2007. Hay versión castellana.

RESEÑA AL LIBRO “MEMORIAS DE UN SOLDADO DESCONOCIDO” DE LURGIO GAVILÁN (IEP-2012)*



EL LIBRO DE LA MEMORIA O LAS IDAS Y VUELTAS DE LA VIDA DE LURGIO GAVILÁN EN LA VORÁGINE DE LA VIOLENCIA

Ramón Pajuelo Teves**

Como todo libro testimonial, *Memorias de un soldado desconocido*, de Lurgio Gavilán,² que esta noche es objeto del ritual de una presentación pública, contiene páginas que nos hablan sobre la vida de su propio autor, pero sobre todo nos acercan al pulso de una experiencia vital única, particular, en una sociedad y un tiempo específicos. Son páginas que, en ese sentido, constituyen un mirador extraordinario de acontecimientos ocurridos en el pasado, pues nos permiten acercarnos a ellos de la mano de quien fuera un testigo directo. Es decir, un protagonista

que, tras el paso del tiempo, hurga en sus propios recuerdos a fin de reconstruir el sentido previo de su vida, reconstituyendo también una noción de presente y de futuro. Por estas características, el relato testimonial nos acerca sobre todo al intrincado vínculo existente entre una determinada experiencia vital y la sociedad en la cual transcurre.

En la parte final de su libro, Lurgio Gavilán relata su retorno a las punas del norte ayacuchano el año 2007, como antropólogo integrante de un equipo de investigación del Instituto de Estudios Peruanos. Habían transcurrido más de veinte años desde que anduvo por esas tierras como un niño senderista, quien a los 12 años decidió enrolarse en las columnas de Sendero Luminoso en busca de

* Estos textos -excepto el de Fernando Calderón- fueron leídos el 12 de diciembre de 2012 durante la presentación del libro *Memorias de un soldado desconocido*. Autobiografía y antropología de la violencia en la sede del IEP.

** Investigador y actual director de Publicaciones del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

1 Gavilán 2012.

su hermano. El viaje en autobús que Lurgio comparte con otros pasajeros no solo atraviesa el territorio, sino también el tiempo. Tal como relata el autor, a medida que el bus avanza en su camino:

[...] los pasajeros comienzan a leer el libro de la memoria. ¡Aquí falleció mi hermano!, ¡aquí murió mi tío!, ¡aquí se volcó el carro! Otras veces se observa correr al ayudante cobrador para colocar ramilletes de flores entre las piedras negruzcas para el señor Wamani, o se puede ver el drama de sufrimiento de los deudos comunicándose con sus seres queridos fallecidos encendiendo velas y ofreciendo el aroma y color de las flores. (p. 163).

La experiencia del viaje se convierte en una apropiación colectiva de lo que Lurgio denomina “el libro de la memoria”. Es decir, la propia vida pasada y sus recuerdos. Por eso, el “libro de la memoria” al cual Lurgio se refiere no es algo que se lee, sino que se actúa —de acción, no de actuación— recordando a quienes ya no están presentes, activando y asumiendo el dolor, pero también gratificando la pena mediante la consolación que otorga el don: la ofrenda al señor Wamani, los olores y colores de las flores entregadas a los ausentes.

Las Memorias de un soldado desconocido escritas por Lurgio Gavilán constituyen un llamado a vivir —es decir, a asumir— ese “libro de la memoria” que compartimos todos los peruanos por existir en una sociedad que en décadas pasadas se vio envuelta en un tiempo de guerra, consecuentemente, de violencia y terror inenarrables. El autor nos entrega con coraje el recuerdo de cómo vivió su propia porción de esa historia. Nos dice al respecto que: “Es verdad que al recordar uno experimenta cierta nostalgia, pero al mismo tiempo alivio en el alma. Fueron muchos años vividos en las filas de SL, en el cuartel militar, en el convento franciscano, en las comunidades campesinas y en los centros académicos” (p. 52).

Podemos leer su relato como mero testimonio de lo que le ocurrió a alguien. Sin embargo, sería mejor acercarnos a sus páginas comprendiendo que los hechos de los que fue protagonista nos marcaron a todos de una u otra forma. Se trata de páginas que nos desafían a asumir nuestra condición de sociedad de postguerra. Es decir, una sociedad inscrita —de manera necesariamente confusa y conflictiva— en el tiempo posterior al pico de la tragedia que implica toda guerra. Un tiempo en el cual los ajustes de cuentas por hacer respecto al pasado no pueden circunscribirse a los recuerdos, sino que exigen la realización de acciones de reconstrucción vital colectiva; es decir, actos de verdad y de justicia dirigidos a enrumbar el inevitable futuro común. Digo esto porque ocurre que, a casi diez años de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el balance que se puede hacer resulta realmente preocupante, pues el poder público —el Estado y sus instituciones— se encuentra realmente a la zaga de una sociedad en la cual el pasado reciente de horror viene siendo asumido de manera sumamente activa, mediante el establecimiento de distintas formas de memorias, olvidos y silencios, en plena disputa en estos años.²

2 El Estado peruano exhibe desde hace una década la escandalosa ausencia de voluntad política para avanzar en las recomendaciones dejadas por la CVR. Muchos pensaron que otro sería el rumbo del actual gobierno de Ollanta Humala, quien llegó al poder movilizándolo un fuerte sentimiento nacionalista, sobre todo entre los más pobres y excluidos del país. Sin embargo, una vez en el poder, Humala dejó atrás todos sus postulados previos, dejando en piloto automático la marcha del país, específicamente la vigencia del nefasto modelo de acumulación neoliberal impuesto desde inicios de la década de 1990 por el fujimorismo. A duras penas, el gobierno actual parece refugiado en un discurso demasiado difuso y genérico en torno a la “inclusión social”. Es evidente que dicha “inclusión” resulta imprescindible en el país, pero no parece posible —sino como simple política de ayuda social— en tanto se mantenga el actual modelo que día a día reproduce desigualdades e inequidades persistentes de larga data en la sociedad peruana. El discurso de “inclusión social”, de otro lado, se haya bastante lejos de otorgar identidad política a un régimen que muestra no tener rumbo político propio.

En tal contexto, la autobiografía de Lurgio Gavilán se inscribe —lo podemos apreciar siguiendo sus propias palabras— en una larga y tortuosa búsqueda por construir nociones de pertenencia, igualdad y reconocimiento en tanto ciudadanos de pleno derecho que aún arrastramos todos los peruanos: “¿Qué es el Perú?; ¿indios sin alma como sostenían los primeros religiosos que llegaban al nuevo mundo?, ¿o solamente unos mendigos sentados en un banco de oro como expresó Antonio Raymondi?”, se pregunta Lurgio, y su respuesta es simplemente rotunda:

Perú es un país plural, diverso, de todas las sangres, una amalgama de culturas con una idiosincrasia discriminadora. ¿Cuándo hemos sido un solo Perú, un país unificado? A veces creo que somos *huklla* (estar unidos) solamente cuando nuestros futbolistas visten la “rojiblanca” y hacen gritar de alegría a todo el Perú [...]. ¿Cuál pasión es la que se nos enciende? ¿Qué noción tomamos entonces del país en que vivimos? ¿Qué línea temporal adoptan esas simbologías? ¿Perduran? O, como dice la cumbia de una agrupación norteña —con respecto al amor—, “porque aparece y desaparece”. (p. 51)

Al sacar a la luz pública los hechos de su biografía signada por el dolor, pero también por la esperanza, Lurgio Gavilán opta valientemente por la opción de narrar simplemente lo ocurrido. Deja entonces que los sucesos hablen y nos interpelen a todos. Nos dice simplemente que:

[...] puedo ofrecer esta memoria y dejar por escrito unos pocos recuerdos. No es una historia de violencia, sino relatos de la vida cotidiana carentes de dramatismo y partidismo político. De ningún modo busco justificar las atrocidades cometidas por SL y el Ejército peruano; solo relato los hechos tal como ocurrieron. Para quien

escribe, son todos los días de recuerdo, como si ayer mismo hubiera estado en esas escenas de la vida. Muchos azares de la suerte de un soldado desconocido se podían contar, sin embargo, aquí no está plasmado todo quizá porque los recuerdos son lejanos. (p. 50)

El autor opta así por un *lugar de habla* desde el cual nos ofrece el testimonio de hechos aleccionadores que no solo se circunscriben a una vida en particular, sino que también nos hablan acerca de todos. Lo hace inscribiendo su voz —y esto proviene de la decisión voluntaria de un antropólogo que asume la difícil tarea de comprender sus propias experiencias como actos sociales— en el marco de esa dilatada y compleja búsqueda de una noción democrática de peruanidad a la cual hemos aludido líneas arriba. La voz de Lurgio se inscribe así en una larga genealogía de discurso —búsqueda angustiada en torno al sentido del Perú y lo peruano— que podemos rastrear a partir de Garcilaso de la Vega y Guaman Poma de Ayala. No es casual, en ese sentido, que la voz de Lurgio muestre especial resonancia con la de otro antropólogo y escritor que dibujó como nadie los desgarramientos del Perú: José María Arguedas. El tono arguediano de las confesiones del soldado desconocido se aprecia especialmente en su prosa poética. Es una poesía que nos sobrecoge en varios momentos: cuando describe el bello entorno natural de la montaña o las punas, cuando confiesa el dolor de conocer “en vivo y en directo” tanta desgracia humana, o cuando habla con los animales que sufren y gozan, como todo ser vivo, su paso por este mundo. Una poética de la vida, en realidad una ontología, que se nutre sin duda de semejantes raíces indígenas.

De otro lado, he sentido varias veces, al leer el libro y sumergirme en la historia de las increíbles idas y vueltas de la vida de su autor, que me hallaba ante páginas que inauguran una forma narrativa nueva en la antropología. No se trata obviamente

te de un informe etnográfico —y en tal sentido el subtítulo original del manuscrito fue precisado para llegar a la imprenta—, pero tampoco es el diario de campo antropológico de quien finalmente aspira a comprender lógicas sociales que le son externas. Es el libro testimonial autobiográfico de un antropólogo que, en gran medida debido a su pertenencia a esta disciplina, se ve compelido a recordar y contar los hechos de su propia experiencia, sabiendo claramente que se trata de una trayectoria vital tan humanamente trágica como pedagógica en una sociedad como el Perú de estos días. El antropólogo revela entonces su propia trayectoria vital, pretendiendo simplemente dar cuenta de lo ocurrido, no por afán de neutralidad, sino porque sabe que al hacerlo puede mostrar fidedignamente fenómenos profundos de la sociedad en la cual le tocó vivir.

No es casual, en ese sentido, que la voz de Lurgio muestre especial resonancia con la de otro antropólogo y escritor que dibujó como nadie los desgarramientos del Perú: José María Arguedas.

Diversos sucesos y temas tratados en el libro pueden dar pie a reflexionar sobre momentos, lugares y protagonistas de la terrible historia que padecemos los peruanos —entre ellos a Lurgio Gavilán— en esos años durísimos en que nuestras vidas se vieron envueltas en la vorágine de la peor violencia de nuestra historia republicana. Como señala en el prólogo del libro Carlos Iván Degregori —nuestro entrañable amigo y colega, quien motivó con su particular estilo vital la propia aventura de

Lurgio que ahora se cristaliza en sus memorias—, se trata del recuento de hechos de una vida excepcional, efectuado por una persona que al fin y al cabo es hoy un hombre libre, y a quien le tocó pasar por tres “instituciones totales” de singular importancia en la historia peruana: las filas de Sendero Luminoso, el cuartel militar y los claustros de un convento.⁴

En todas ellas, se pueden constatar —de acuerdo al relato de Lurgio— algunos ingredientes compartidos tan propios de la sociedad peruana. Por ejemplo, la vigencia de una acendrada moral autoritaria, que en el caso de Sendero Luminoso se convirtió en una pesadilla casi mesiánica y sin límites, al punto de arrastrar a toda la sociedad peruana a su peor época de horror y destrucción. Sin embargo, también en medio de la peor pesadilla humana es necesario saber que estamos ante hechos de orden histórico, frente a actos realizados por personas de carne y hueso, completamente distintas a cualquier dios inmarcesible (tal como pretendía pasar a la posteridad el autodenominado “Presidente Gonzalo”). De allí que el relato de Lurgio Gavilán contribuya a que rompamos diversos mitos de nuestra propia historia y memoria de posviolencia. Nos permite recordar que fueron acciones humanas concretas, hombres y mujeres reales, quienes se hallaron detrás de la vesania senderista, dispuesta a alcanzar la “gran armonía” del Estado comunista a cualquier costo de la “cuota de sangre”. O tras los muros de cuarteles militares convertidos en auténticos infiernos cotidianos, en los cuales muchos ciudadanos a quienes el Estado debía proteger desaparecieron sin rastro. Pero este libro también nos permite apreciar que muchas veces, a pesar de la inhumanidad impuesta

4 Una cuarta “institución total” que también marcó fuertemente la vida del autor no aparece aún en el libro: la universidad y el mundo académico.

como norma de conducta, hubo gentes que en medio de la guerra supieron descubrir o sacar a flote su propia humanidad. Es el caso del militar que no solo perdonó la vida de nuestro autor, cuando siendo un niño senderista resultó capturado por el Ejército, sino que además lo arrojó y lo condujo a estudiar, dándole así la opción de abrirse nuevos caminos. O de aquellos jóvenes o niños senderistas que en medio de lo peor de la guerra supieron descubrir el amor, incluso en las filas contrarias.

El libro tiene también otro flanco posible de lectura, que estoy seguro fue uno de los que motivó a Lurgio a emprender con templanza el camino que va desde el recuerdo a la letra y finalmente a la imprenta. Nos permite conocer mejor aspectos y sucesos de la violencia peruana envueltos aún en brumas. Es el caso de la vida en los cuarteles en medio de los años de la guerra. O de las actividades cotidianas de aquellos miembros de base de las columnas senderistas, quienes debían cumplir a ojos cerrados las órdenes de sus jefaturas, expresadas en los distintos “planes” o “campañas” militares de su organización. Otro tema interesante sobre el cual seguimos envueltos en la ignorancia tiene que ver con el peculiar componente guerrillero que aparentemente existió en los orígenes de Sendero Luminoso, sobre todo en los primeros años de la guerra, especialmente en el vínculo con muchos jóvenes universitarios, maestros de escuela y campesinos enrolados en las columnas que en el libro se denominan justamente como “guerrilleras”. Es inquietante conocer desde adentro la trágica historia de estas columnas, muchas de las cuales vivieron una auténtica metamorfosis, pues transitaron desde los ideales de “justicia” e “igualdad” hacia el horror. De allí que Lurgio insiste con juicio enérgico —en diversas declaraciones públicas efectuadas en entrevistas realizadas a propósito del libro— en que Sendero Luminoso parecía un monstruo que se tragaba a sus hijos. La

imagen nos hace recordar el cuadro de Goya en el cual Saturno aparece devorando a su propio hijo, es decir, a su propia carne.

Otro tema que a la luz del testimonio directo de Lurgio es posible apreciar con nueva perspectiva tiene que ver con la participación de los niños y adolescentes en la guerra. Son numerosos los testimonios y evidencias de niños muertos o capturados, por uno u otro bando, en medio del conflicto. Conozco a dos antropólogos —cuyo nombre no estoy autorizado a revelar— que mientras hacían trabajo de campo en plena época de la violencia se toparon con columnas senderistas compuestas casi enteramente por niños y adolescentes, con quienes se comunicaron en quechua y a quienes tuvieron que alimentar, pues se hallaban deambulando hambrientos por las punas. Muchos niños indígenas monolingües, como era Lurgio Gavilán cuando se integró a Sendero Luminoso detrás de su hermano, se vieron envueltos de diversas formas en el capítulo más trágico de nuestra historia nacional. El enrolamiento de niños no es algo que ocurrió solamente en las columnas de Sendero Luminoso, sino también entre las fuerzas del orden y los Comités de Autodefensa de los propios campesinos. Sin embargo, en Sendero Luminoso se aprecia mayor grado de perversidad, debido a que se plantea como un objetivo ideológico. Uno de los primeros documentos de esta organización, escrito por Abimael Guzmán antes del inicio de la guerra, ya propone el objetivo de vincular activamente a los niños a la guerra, lo cual revela que por encima de cualquier criterio humano mínimo, en Sendero Luminoso primó desde siempre la lógica de que la ideología política se hallaba por encima de todo, incluso de la vida humana.⁵

5 El documento del PCP-CL señala como objetivo: “Hacer que los niños participen activamente en la guerra popular, pueden cumplir diversas tareas a través de las cuales vayan comprendiendo la necesidad de transformar el mundo [...] cambiar su ideología y que adopten la del proletariado” Ver PCP-SL 1977.

El costo/beneficio de los objetivos políticos del partido resultaba más importante que las vidas de quienes se hallaban en plena etapa de “crecimiento de la vida”, sobre la cual hablaba el poeta Dante Alighieri al describir las cuatro edades de la vida humana.

Otro aspecto acerca del cual no quiero dejar de referirme, aunque sea grosso modo, es el vínculo entre el proyecto senderista y los campesinos indígenas. Esto nos conduce a situar de manera precisa el relato de Lurgio sobre su paso por Sendero Luminoso. Se trata de los años en los cuales la violencia alcanzó su mayor intensidad y brutalidad, a partir de 1983, precisamente en el lugar donde se vivieron hechos claves de dicha historia: las punas ubicadas en las alturas de las provincias de Huanta y La Mar. Este territorio, correspondiente entonces, de acuerdo a los planes de Sendero Luminoso, a su denominado Comité Regional Principal —compuesto por los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac—, fue el escenario en el cual los campesinos de las comunidades reaccionaron a partir de fines de 1982 en un sentido contrario al esperado por los senderistas. Ocurrió que la aceptación de la presencia senderista de los años previos —sustentada en una cierta coincidencia entre los anhelos de justicia y progreso de los campesinos y la prédica senderista— se transformó rápidamente en una resistencia abierta. Los comuneros transitaron del rechazo a las demandas de colaboración o apoyo hasta la autodefensa armada. No fue un acto inconsciente o de simple defensa propia reactiva ante la agudización de la guerra. Se trató de una decisión lógica adoptada comunidad por comunidad, que movilizó profundas expectativas en torno al progreso, el orden y el futuro. El rechazo a Sendero Luminoso tuvo fuertes consecuencias para decenas de comunidades que posteriormente fueron arrasadas, al convertirse en objetivo de las acciones punitivas de sus columnas armadas, dirigidas a dar escamio a las denominadas “meznadas”.

Desgraciadamente, desde fines de 1982, cuando ingresan las Fuerzas Armadas al conflicto, estas comunidades también se convirtieron en blanco de la represión militar indiscriminada. En ese contexto, ocurrieron hechos emblemáticos, tales como la matanza de Uchuraccay. Lo ocurrido entonces en las comunidades de las alturas es un capítulo fascinante de la historia de largo plazo del vínculo entre los campesinos denominados “iquichanos” (identidad “inventada” tardíamente, en plena república, según lo ha demostrado la historiadora Cecilia Méndez⁶) y el resto de la sociedad peruana. Siendo un niño senderista, a Lurgio le tocó vivir esta historia de violencia justamente en la cresta de ola, como protagonista directo. Su relato permite comprender el “otro lado” dramático de esta historia, reflejado en las penurias de los miembros de las columnas senderistas. Es lo que revela Lurgio al recordar el hambre, el frío, el temor y hasta las deserciones de los miembros de las columnas armadas. Los militantes senderistas fueron rechazados violentamente por los comuneros organizados en las primeras rondas campesinas, perseguidos y arrinconados por los militares, obligados a buscar refugio en zonas agrestes tales como las faldas del Razuwilka (apu tutelar de la zona). De manera que el “gran salto” con el cual soñaba la dirección senderista al ejecutar su “plan de desarrollar las bases de apoyo” a partir de 1984 se hallaba bastante lejos de la dura experiencia diaria de sus militantes, obligados en un momento a calmar el hambre con la nieve del cerro.

En las comunidades, el horror destrozó completamente el orden establecido. Muchos desaparecieron sin rastro, víctimas de Sendero, de los militares o de los propios grupos de autodefensa. Los delicados tejidos sociales, culturales, económicos y por supuesto territoriales se vieron trastocados enteramente. La competencia de rasgos históricos por la hegemonía en la zona entre las “comunidades ma-

6 Méndez 1992.

dre”, tales como Iquicha, Uchuraccay o Ccarhuaurán, o entre comunidades de valle y puna, también se manifestó en medio de la guerra, todo lo cual estaba en tensión con la subsistencia de formas de solidaridad intercomunal, de fuertes rasgos étnicos, reactivadas también en medio de la guerra.

Años después, el escenario hallado por Lurgio, ya como antropólogo confrontado a la experiencia de volver a recorrer esas zonas, es completamente diferente. Su narración destaca el hecho de que los campesinos siguen tan pobres como siempre. Pero los cambios son evidentes, y no solo se refieren a las carreteras, cierta urbanización como patrón de poblamiento, la expansión mercantil o los avances de la institucionalidad política reflejada, por ejemplo, en los centros poblados. También ocurre que las personas se muestran diferentes en su modo de ser, desconfiadas, mientras que antes “la gente era conservadora y cariñosa” (p. 173). Este nuevo escenario es el que por estos años se va transformando aceleradamente, en un sentido muy peligroso, al ritmo de la conversión del VRAEM en un motor de articulación regional que ha convertido a muchas comunidades en narco-pueblos dependientes de la economía de la coca. Nuevas amenazas y

RESEÑA DE “MEMORIAS DE UN SOLDADO DESCONOCIDO. AUTOBIOGRAFÍA Y ANTROPOLOGÍA DE LA VIOLENCIA”. LURGIO GAVILÁN SÁNCHEZ (LIMA: IEP, 2012)

María Eugenia Ulfe*

Esta es una historia de vida excepcional, y agradezco la generosidad y la valentía de compartirla con un público más amplio, y con ella, de romper con la mirada inocente e ingenua que construye categorías dicotómicas, como la de víctimas y perpetradores,

* Antropóloga, Pontificia Universidad Católica del Perú. Grupo Memoria del IEP.

riesgos asoman al mismo tiempo que se deja notar el empuje de gente en su afán de acceder a un futuro mejor, ese empeño cotidiano del cual la propia historia vital relatada en este libro es un extraordinario ejemplo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Gavilán, Lurgio (2012). *Memorias de un soldado desconocido. Autobiografía y antropología de la violencia*. Lima y México: Instituto de Estudios Peruanos y Universidad Iberoamericana.

Méndez, Cecilia (1992). *El poder del nombre, o la construcción de identidades étnicas y nacionales en el Perú: mito e historia de los iquichanos*. Documento de Trabajo n.º 115. Lima: IEP.

PCP-SL (1977). *Bases de discusión. Línea de masas*.

para invitarnos a reflexionar sobre el conflicto armado interno en su complejidad. La historia de Lurgio nos introduce en un universo de claroscuros, de tonalidades diversas, de vaivenes y decisiones de vida. Su identidad es múltiple y flexible, y responde también a las opciones que se le presentan y las decisiones que toma a lo largo de su vida.

Sobre el testimonio ya se ha escrito bastante para el caso latinoamericano. Me interesa destacar más bien el “realismo de la memoria” y la apuesta del autor, que, al abrirnos su vida, nos cuestiona e invita a comprenderla. De ahí que una valoración moral de la memoria no es pertinente tampoco. Lo que nos entrega es una memoria que está sedimentada en el cuerpo del autor, y que se abre como capas, que es agrídulce, dolorosa y también ingenua, y que se desenvuelve a través de su paso por Sendero Luminoso, el Ejército y la Iglesia, pero la Universidad también. Carlos Iván Degregori las llama en el prólogo “tres instituciones totales”, pero son finalmente cuatro: porque la Universidad también transforma su acercamiento a su propia vida, lo conduce a distanciarse de sí (a objetivarse) y mirarse como un sujeto de la historia reciente del país.

Esta memoria “real” comienza con la mirada del niño que fue a los 12 años, cuando tomó la decisión de unirse a las huestes senderistas para seguir el camino de su hermano. Gavilán entra temprano en la guerra, en el año 1983, en la selva de Ayacucho. Es un niño que aprende a sobrevivir en medio de la guerra. Su relato contrasta con el idealismo de muchos literatos senderistas. No es una lectura épica de la lucha armada como la que uno encuentra en los textos de los narradores y poetas senderistas. En el testimonio de Gavilán, la épica se torna una realidad que es dura y por momentos agradable, como su amistad con Rosaura, cuando acompaña a la enfermera o participa de las celebraciones que compartieron al inicio del conflicto armado interno. Gavilán nos da pistas para conocer “algo” de la cotidianidad y la precariedad de Sendero Luminoso en su momento inicial. Hay tan poca información que se tiene desde dentro que aquí el texto de Gavilán nos aporta. Y con ello recojo una pregunta que se hiciera Ricardo Caro a partir

de este libro: ¿por qué crecieron? ¿Cómo, ante tanta precariedad y absolutismo, fueron capaces de crecer? ¿Qué hay en nuestra sociedad que nos lleva a dimensiones tan álgidas de violencia?

Gavilán narra la verticalidad y la disciplina en el trato de los senderistas con sus propias huestes, los ajusticiamientos internos por robarse una lata de atún, destaca el apoyo inicial de los comuneros de las comunidades de apoyo y el posterior deterioro en las relaciones con ellos, reflejado en el hambre que hacia los días finales de su paso por Sendero comienza a sentir. Llamen mi atención también los rituales internos de paso, como aquel de militante a camarada, y los cantos que parecían marcar cada momento de sus vidas.

El texto de Gavilán viene a acompañar otras dos producciones de memorias senderistas, *Sibila*, de Teresa Arredondo (2012), en el cual se narra la historia familiar y de vida de Sibila Arredondo viuda de Arguedas, y *Aquí vamos a morir todos*, de Andrés Mego (2012), en el cual se recoge el relato de Julio Yovera, sobreviviente del motín de El Frontón en 1986. Juntos, estos tres relatos nos presentan las miradas íntimas de aquellos que conocemos poco: la subjetividad de los otros actores del conflicto armado interno, los “marcados”, que no forman parte del Registro Único de Víctimas, pero sin embargo están ahí. Son estas las voces que comienzan a emerger en medio de una coyuntura donde reina la no historia, la no memoria, la negación. Si hasta ahora habíamos llegado a ellas por medio de poemas, cuentos o incluso a través de sus propios dibujos, ahora contamos con narraciones personales. Esta es la vida que muchos peruanos vivieron en medio de la violencia. Están ahí, y mediante sus relatos apelan a re/construir algún tipo de vínculo con lo social y el pasado. Pero ¿cómo se inscriben estas historias en

el gran relato del conflicto armado interno que aún se está escribiendo? ¿Desde dónde mirar la emergencia de este sujeto político y cómo es?

Dos años más tarde, en 1985, Lurgio es tomado prisionero por el Ejército. Su valoración de Sendero se manifiesta desde sus primeras páginas, y su consideración a quien ve como su salvador en el Ejército también. Narra el encuentro con quien decide perdonarle la vida. Este momento es descrito como un reconocimiento de uno en el otro, de un jefe militar en otro hambriento. Al mismo tiempo, Gavilán describe las atrocidades que eran capaces de cometer las Fuerzas Armadas con los campesinos. Su vida en el Ejército es descrita como un nuevo renacer, como un momento de aprendizaje que es interpretado desde distintos ángulos —vuelve al colegio, aprende a leer y a escribir, obtiene un documento de identidad y se reinserta, poco a poco, en la vida social, dejando atrás su historia de clandestino militante—. ¿Cómo era la vida en la base militar? ¿Cómo se entendía y vivía el conflicto en esa cotidianidad? ¿Cómo se hablaba del miedo, del otro?

Hacia 1995, Lurgio toma un nuevo camino. Esta vez es la Iglesia, y serán los franciscanos —con sus votos de pobreza, castidad y humildad— quienes le abrirán las puertas y lo invitarán a pensar en su vida. Después de ese recorrido intenso, abrumador, revelador de las complejidades propias de una vida en medio del conflicto, Gavilán cierra diciéndonos: “[...] no hay más, es todo cuanto he vivido, y las respuestas están ahí; no es preciso saber más, un silencio es la

mejor respuesta, nunca se entenderían, y solo el que ha vivido esta historia la siente viva en su cuerpo. Luego mi cuerpo desaparecerá y se perderá en el universo, pero a mí me volverán a encontrar en estas páginas, como las rocas madres resistiéndose al tiempo” (p. 172). Lo veremos después como profesor universitario, convertido en colega antropólogo, pensando el país y sus memorias en disputa. Si la antropología es una ciencia social que nos remite a pensar cómo construimos nuestras relaciones los unos con los otros, la autobiografía se muestra como una autoetnografía, donde el autor se distancia de sí mismo, se muestra y muestra el hacer, el pensar, el sentir. Son relaciones que están profunda y densamente cargadas de historia. Es una práctica de memoria desde donde mirar el conflicto armado interno y, a través de este, la idea de nación, el Estado y nuestras instituciones “totales”.

Este libro se abre paso como la vida misma del autor, y debería convertirse en materia de lectura en las escuelas, en las universidades, en las FF. AA. Conocer la vida del protagonista es conocer un poco más de nuestra historia reciente.

DEJAR LA HISTERIA. UN COMENTARIO AL LIBRO DE LURGIO GAVILÁN¹

Jacqueline Fowks*

Supe del trabajo de Lurgio en octubre de este año gracias a alguien que había leído borradores de sus textos corregidos en 2006 y que vio —en el muro de Facebook de un amigo— el anuncio de la presentación de su libro en México. Ello me llevó a contactarlo, vía Facebook también, para entrevistarle mediante una videollamada.

A los pocos días, publiqué una nota en el diario *El País*, en la que daba cuenta de su historia, una historia que sale a la luz en un país donde, dije, hay dificultades para abordar el periodo de la violencia en el espacio público, pues el tema del conflicto armado interno de inmediato genera bandos, controversias y, en muchos casos, mentiras para atacar a un sector o a individuos con quienes no se está de acuerdo. Este tipo de debate sobre la memoria, especialmente en Lima, es literalmente un espacio de competencia, en el que un grupo o algunos líderes de opinión —unos con más voz y poder político que otros— atacan a los que ven como enemigos.

Militares en retiro, fujimoristas y simpatizantes fujimoristas, políticos que se autodenominan de centro o independientes o que solo quieren el “avance” o “desarrollo” del Perú, empresarios (como el exministro Oscar Valdés), periodistas, expertos, etcétera han identificado entre sus enemigos a los exmiembros

de la Comisión de la Verdad y a todos quienes citen el informe final de la CVR. También son “enemigos” los organismos, activistas y abogados de derechos humanos, las ONG, los artistas, periodistas, intelectuales y familiares de víctimas de hechos de violencia cometidos por las fuerzas del orden. Los llaman defensores de terroristas, o terroristas, o terrucos, o comunistas, o caviares, o extremistas, o ultras o rojos. Les atribuyen también un odio o falta de respeto hacia las Fuerzas Armadas, dado que nunca se preocupan por sus derechos humanos, de los que salvaron al Perú de Sendero Luminoso (“¿Quién defiende los derechos humanos de los policías, de los soldados?”, suelen preguntar en medio de gritos o de llanto, o en conversaciones en el taxi o en una esquina). Les achacan que solo les importan los derechos humanos de los terroristas (y esto también lo menciona Carlos Iván Degregori en su texto introductorio del libro). Señalan que se le hace un favor a SL al usar el término conflicto armado interno, porque se les reconoce como “combatientes”, como si hubiera habido aquí una guerra. Sostienen que solo hubo terrorismo y del otro lado pacificación, lucha contra el terrorismo.

Todo esto es visible en sus comentarios en los medios, en el Congreso, en iniciativas de ley, pero también ha sido visible en hechos sucedidos en las calles, como cuando un grupo de personas —¿o vándalos? — echó pintura naranja en el memorial llamado Ojo que Lloro, a pocos metros de aquí, en Jesús María. Un memorial, dicho sea de paso, cerrado para el ciudadano de a pie, e incluso difícil de visitar si uno no realiza un trámite.

Las personas e instituciones a quienes ataca ese primer grupo —en el debate político, en los medios o en eventos públicos—, estos activistas, abogados, académicos, intelectuales, exmiembros de la CVR, etcétera, se defienden usualmente recordando los delitos cometidos por las fuerzas del orden desde

¹ El título alude a la histeria debido a dos menciones recientes a ese término. Una de Juan Carlos Ubillús, quien en la presentación del libro *¿Y qué si la democracia ocurre?* dijo de algunos artistas plásticos que sus trabajos tenían un componente de histeria al aludir a los problemas de la democracia en el Perú. Hace algunas semanas, el antropólogo Javier Torres también afirmó que los medios de comunicación limeños son histéricos.

* Corresponsal extranjera y profesora asociada de la PUCP. Maestra en Ciencias de la Comunicación por la UNAM.

1980 o también por miembros del gobierno de Alberto Fujimori. Intentan que quienes trabajaron para el Estado reconozcan que hubo violadores de los derechos humanos, y que no cumplieron con la función del Estado de proteger a la persona. Recuerdan también que los grupos terroristas cometieron la mayor cantidad de muertes en los años del conflicto armado interno. Suelen recibir no solo insultos, sino también amenazas; a veces han sufrido seguimiento, reglaje, etcétera, por parte de las fuerzas de seguridad. En pocos casos tienen una experiencia saludable en su relación con las fuerzas del orden o quienes la representan. Vivimos ya al menos una década en esa dinámica de polarización, de tensión, de maniqueísmo, de reduccionismo (si se quiere, de histeria) a dos partes enemigas. Este año, se ha agregado un actor nuevo, entre comillas, Movadef, que también lleva al extremismo el enfoque de los asuntos relativos a la violencia pasada y a la actual.

Este escenario de polarización existía desde la década de 1980, pero se refuerza, ahonda o agrava luego de la producción del informe final de la CVR. En aquel tiempo, por ejemplo, el gobierno de Belaúnde y las FF. AA. criticaban los informes de Amnistía Internacional sobre violación a los derechos humanos en el Perú; por otro lado, las FF. AA. trataron de manera intimidante a personas como Pilar Coll cuando fue secretaria de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Una vez planteado esto, puedo entonces decir uno de los motivos por los cuales es tan valioso este libro del antropólogo Lurgio Gavilán: porque lleva la cuestión, el asunto, el tema a otro lugar, a otro punto de vista, un enfoque que destierra el reduccionismo, el facilismo y la simpleza de los polos, de los dos puntos de vista enfrentados (o tres, también enfrentados, si incluimos la actual prédica de Movadef).

Si recordamos cómo han informado los medios de Lima acerca del libro *Memorias de un soldado desconocido*, no hubo ningún ataque, desde ningún ángulo, al autor, tampoco se dio ese reduccionismo que he descrito previamente de los polos enfrentados; solo hemos leído o visto el relato de una vida excepcional durante un periodo tan complejo en el Perú.

Gavilán ha escrito no solo una autobiografía, un relato de la violencia, sino también un texto muy sentido acerca de su relación con los otros, con las personas, con la vida, con el entorno, las plantas, los animales, la comunidad, los suyos.

Y el relato de esas experiencias de Gavilán expresa de forma muy clara la complejidad de lo vivido durante el periodo de violencia, como destaca Eduardo Dargent en su columna de este domingo en *Diario 16* acerca del libro.²

Casi todos los comentarios sobre la historia de Lurgio Gavilán coinciden en que su libro debería leerse en las escuelas. Dargent aludió a la posibilidad de que quede en el olvido, pero hay muchos modos de evitarlo. Por ejemplo, el documentalista Fernando Vélchez, peruano que ganó un premio por un corto que presentó en el Festival de Cine de Berlín, está interesado en realizar un documental sobre esta historia.

El texto de Gavilán es valioso además porque revela experiencias transformadoras, sea en institucio-

² Dargent, Eduardo. "Gavilán". En: *Diario 16*, 9 de diciembre de 2012.

nes o pequeños actos y decisiones de personajes clave. El oficial del Ejército que le perdonó la vida cuando era un niño senderista, la religiosa que vio en él otro futuro posible, la tutora que le sugirió escribir. He pensado mucho en la función de la escritura, en castellano, para un peruano que aprendió a escribir tarde en su segunda lengua. También pienso en el valor del silencio, el estudio y la meditación para procesar lo vivido, momentos que retrata al contar sus años en el convento franciscano. Gavilán ha escrito no solo una autobiografía, un relato de la violencia, sino también un texto muy sentido acerca de su relación con los otros, con las personas, con la vida, con el entorno, las plantas, los animales, la comunidad, los suyos. El rescate de las dimensiones que componen lo humano es también esencial en este texto, no es solamente un buen texto de antropología y de memoria de la violencia.

También es importante tener en cuenta que este libro surge en un momento delicado. Hoy las comisiones de Constitución y de Justicia han aprobado el proyecto de ley de negacionismo. Dos mil doce ha sido un año con varios casos de censura a trabajos artísticos que aludían al tiempo de la violencia en el Perú. Incluso un documentalista, Andrés Mego, ha retirado de Internet un video sobre la vida del exsenderista Julio Yovera, sobreviviente de la matanza en El Frontón, un documental que no critica los hechos de terror, pero tampoco los promueve, ni aprueba. Y la persecución legalista no es la mejor forma de lidiar con Movadef. Si queremos enfrentar las ideologías extremistas que justifican la violencia, tenemos que conocer quiénes son esos peruanos y sus ideas, justamente para encararlos en ese plano y no entregar al criterio policial la aplicación de una norma que deja demasiado espacio a la interpretación y subjetividad.

Lurgio Gavilán sostiene en su libro que no quiere hacer juicios de valor ni política partidaria acerca de lo que hicieron Sendero Luminoso y el Ejército, sin embargo, su punto de vista no es neutral ni aséptico. Es político porque contiene una posición y una visión acerca del Perú, de los vulnerados, los discriminados, los despreciados y desconocidos por el Estado, tratados así desde antes de que surgiera Sendero Luminoso. Testimonia su paso por tres espacios clave, desde donde intentó cambiar lo que consideraba injusto, impropio o en desorden. Una palabra importante en el libro acerca de lo que ocurre en el Perú es huklla, que en quechua significa “ser unidos”, estar unidos. Gavilán se pregunta por qué solo cuando juega la selección el Perú se siente así, y no en otros momentos. Esta visión de un Perú fracturado está en la esencia del libro. Esa forma de ver el país, creo, tiene resonancia o es similar a la obra de una artista plástica, Eliana Otta, curadora de una exposición llamada “¿Y qué si la democracia ocurre?”: un cartel impreso en offset, un afiche grande, que comparto aquí con ustedes para cerrar esta presentación.

MEMORIAS DE UN SOLDADO DESCONOCIDO, DE LURGIO GAVILÁN (LIMA: IEP, 2012)

Fernando Calderón*

Este artículo no pretende ser únicamente una reseña, pues busca sintetizar algunas de mis experiencias como lector de las memorias de Lurgio Gavilán. Su libro constituye más que un relato particular del conflicto armado interno desde las miradas del adolescente senderista, del joven soldado, del fraile franciscano y del agudo antropólogo. Tanto su testimonio como las reflexiones que intercala en él nos interpelan a dos niveles. En el plano subjetivo, su lectura evoca las emociones y los recuerdos de ese periodo para todos quienes directa o indirectamente lo experimentamos. De otro lado, le plantea a los trabajos sobre la memoria el reto de trascender las categorías rígidas en que a veces han incurrido para definir a los actores del conflicto.¹

Yo crecí en los años noventa. En mi imaginación, Sendero Luminoso (SL) podía representarse como un gran monstruo que controlaba la sierra y que infundía terror por las noches, sigilosamente, en Lima y otras ciudades de la costa. No comprendía muy bien lo que pasaba, pero sabía que los *terrucos* eran los malos. Cuando Sendero apareció en la vida de Lurgio, un niño quechua de un pequeño pueblo de Ayacucho, la imagen era radicalmente distinta: “En esos tiempos [1983], SL estaba en proceso de expansión; en todas partes se hablaba de una justicia social. Escuchábamos en radios, los

jóvenes y los profesores hablaban de una guerra popular” (p. 59). Se trataba de guerrilleros, no de terroristas, que vivían entre los campesinos, junto a ellos, y que luchaban por un nuevo orden: el comunismo sería más justo, y en él no habría hambre ni pobreza.

Una de las mayores virtudes del libro —tal como señala Carlos Iván Degregori en el prólogo— es que nos cuenta cómo experimentaron los senderistas de base el proceso a través del cual SL se fue distanciando de los campesinos al punto de volverse un enemigo para ellos. Aquello que en las ciencias sociales se ha leído como el paso hacia convertirse en un *antimovimiento* social (Wieviorka 1991), para Gavilán y sus compañeros se vivió en forma de hambre angustiante y de violencia creciente:

Cuando ingresé al movimiento todavía se comía bien, pues en cada pueblo los comuneros nos preparaban diversas comidas. Luego, cuando se volvieron *yanaumas*, ronderos, nos retiramos hacia las montañas altas, donde no había comida. De vez en cuando bajábamos al pueblo para robar los alimentos. Otras veces nos esperaban los *yanaumas* y regresábamos sin comida. Nos habíamos vuelto rateros. (p. 91)

Mientras las circunstancias eran más adversas para los guerrilleros en las zonas altoandinas, las sanciones que imponían los “camaradas” contra los traidores se hacían más severas. Los relatos de los asesinatos a algunos de sus compañeros de armas son crudos, breves y, por eso mismo, emocionalmente intensos. El destino del autor pudo haberlo conducido a morir allí, asesinado por otros senderistas, o en el momento en el que fue capturado por una patrulla del Ejército en marzo de 1985. Sin embargo, sobrevivió gracias al teniente al mando, y poco después se incorporó al Ejército.

* Asistente de investigación en el IEP hasta 2012. Actualmente es investigador en la PUCP.

¹ Una opinión similar se puede apreciar en el reciente artículo de María Eugenia Ulfe y Vera Lucía Ríos acerca del encuentro Diálogos por la Paz y la Memoria, organizado por el Grupo Memoria del IEP, la Cátedra de Historia Militar de la Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú y el Departamento de Historia de la Universidad de California, Santa Barbara.

Lurgio vivió casi una década en un cuartel militar de Huanta. Durante ese tiempo, cumplió el Servicio Militar Obligatorio, fue a la escuela, aprendió castellano y obtuvo su partida de nacimiento. En suma, se hizo parte del Estado peruano. Allí, también, conoció el otro lado de la violencia, la de los entrenamientos con baños en sangre y heces de animales, de las mujeres que eran abusadas sexualmente y de los prisioneros que “desaparecían” antes de que llegaran las inspecciones desde Lima. Había que obedecer, como en SL, pero ya no luchando por llegar al comunismo, sino por la patria y por la gloria del Ejército del Perú.

Aunque de un modo muy diferente, mi vida también ha transcurrido muy cercana al Ejército. Mi padre y sus compañeros conformaron una generación de jóvenes oficiales que egresaron de las aulas de la Escuela Militar y rápidamente fueron destinados a las “zonas de emergencia”. Los padres de muchos de mis compañeros de colegio murieron allí, y la idea de que pudo pasar lo mismo con el mío nunca ha abandonado mi cabeza. Por todo eso, al leer los cánticos de los cabitos de Huanta y los detalles de la vida castrense recordaba mi infancia; los ruidos de la tropa que pasaba siempre por mi casa al amanecer, y me detenía a pensar en las marcas (visibles e invisibles) que las experiencias de esos años dejaron en los soldados que estuvieron allí.

Por su parte, la búsqueda incansable de sí mismo llevó a Gavilán a pasar algunos años como religioso franciscano. También entonces se encontró cantando y obedeciendo, experimentando la disciplina de la vida en el convento de Los Descalzos, en el Rímac, pero ahora estaba alejado de la violencia. Fue en ese período que una profesora de filosofía lo animó a escribir sus memorias, y tuvo ocasión para reflexionar sobre su azarosa vida. Cuando comenzaba el nuevo siglo, emprendió

una nueva travesía, la de la vida académica, que lo devolvió a Ayacucho para estudiar —y pronto enseñar— antropología en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.

quizás el mayor mérito del libro es que ha abierto una puerta para tratar de reescribir la historia del conflicto armado interno, esta vez a partir de los grises, de los puntos intermedios y ambiguos, de las historias particulares de los que fueron víctimas y victimarios a la vez en una región y un tiempo extremos.

Hoy Lurgio Gavilán es candidato a doctor en la Universidad Iberoamericana de México. La publicación de su historia ha despertado mucho interés, al punto que ha sido entrevistado por diversos medios periodísticos. Sin embargo, quizás el mayor mérito del libro es que ha abierto una puerta para tratar de reescribir la historia del conflicto armado interno, esta vez a partir de los grises, de los puntos intermedios y ambiguos, de las historias particulares de los que fueron víctimas y victimarios a la vez en una región y un tiempo extremos. Los debates en torno a la memoria se pueden —y deben— enriquecer con las historias particulares de los soldados y policías que llegaron a ser senderistas, los campesinos que devinieron violentos ronderos y todas las situaciones similares que cuestionan las interpretaciones oficiales que se sostienen hasta ahora.

Entre los oficiales del Ejército he escuchado con frecuencia que su cuestionamiento a priori del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación

radica en que quienes la conformaron no estuvieron allí durante el periodo de violencia. Para muchos militares y policías, la cercanía de la muerte y las consecuencias de ese estado anímico son experiencias vitales intransmisibles, difícilmente comprensibles para el resto. Quizás el libro de Lurgio les demuestre lo contrario, y más bien los anime, como espero que suceda con los otros actores del conflicto, a contarnos su propia historia. —□

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Gavilán, Lurgio (2012). *Memorias de un soldado desconocido*. Lima: IEP.

Ulfe, María Eugenia y Vera Lucía Ríos (2013, 30 de enero). Diálogos para la paz y para la memoria. <<http://www.noticiasser.pe/30/01/2013/grupo-memoria/dialogos-para-la-paz-y-para-la-memoria>> (última consulta: 14/02/13).

Wieviorka, Michel (1991). *Terrorismo. La violencia política en el mundo*. Barcelona: Plaza Janes.

Este artículo debe citarse de la siguiente manera:

Pajuelo, Ramón et al. “Entre brechas y soledades. Política y sociedad en el Perú: a propósito de la soledad de la política, de Carlos Meléndez”. En *Revista Argumentos*, año 7, n.º 1. Marzo 2013. Disponible en http://www.revistargumentos.org.pe/lurgio_gavilan.html
ISSN 2076-7722

La revista Argumentos del Instituto de Estudios Peruanos es, desde 2008, una publicación electrónica bimestral de acceso libre. El objetivo de la revista es aportar al diálogo y el intercambio crítico de ideas en el país, desde una perspectiva pluralista e interdisciplinaria.

ARGUMENTOS busca ser un punto intermedio entre el texto académico y el periodístico, que combine la reflexión informada sobre temas de coyuntura con la investigación social sobre nuevos y persistentes problemas en el país. Nuestro público objetivo es amplio: la academia nacional e internacional, estudiantes universitarios, periodistas, políticos e instituciones sociales vinculadas a la investigación y el desarrollo del país.
